

9 años de más dignidad

Hace 9 años, en el anterior Gobierno de la Presidenta Bachelet aprobamos la primera reforma al sistema de pensiones que, hasta ese entonces, descansaba sólo en la capitalización individual. Quien no cotizara en una AFP, estaba derechamente condenado a una vejez pobre e indigna.

La reforma que instauró el Pilar Solidario fijó un piso de derechos garantizados en materia de protección social tanto para las personas que no habían podido acceder a una pensión, como para quienes tenían pensiones muy bajas. Desde esa fecha hasta ahora, se ha beneficiado a cerca de dos millones de personas.

La Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario se focalizaron en el 60% más pobre de la población, beneficio que además tuvo en el Bono por Hijo, un complemento para mejorar las pensiones de las mujeres que por años no tuvieron ningún tipo de reconocimiento por el trabajo realizado en casa.

Se pensó en introducir el concepto de solidaridad, más que el ciego individualismo y egoísmo y Chile fue un mejor país, más justo y equilibrado. De acuerdo a estudios oficiales, la pobreza entre mayores de 60 años se redujo de un 23% en 2006⁷, a un 6,6% en 2015 gracias al Pilar Solidario. Si hubiéramos dejado todo al mercado o que cada cual se “rascara con sus propias uñas”, la pobreza no hubiera bajado, porque en todo este periodo, las utilidades de las AFP no han caído, mientras que las pensiones sí son un problema grave.

Es por eso que el Gobierno de la Nueva Mayoría decidió escuchar el reclamo justificado de la gente contra el sistema de pensiones y ofrecer una reforma. Una de verdad, seria, aterrizada, que resuelve el problema ahora y no en 40 años más.

A diferencia de la derecha, nosotros no estamos ofreciendo plata a cambio de trabajar más años. Estamos ofreciendo que esa misma idea de solidaridad que ganó su espacio en 2008 cuando se aprobó la primera reforma, nos lleve a un sistema de pensiones que no castigue al cotizante y que entregue mejores pensiones.

Han sido 9 años de más dignidad, 9 años en los que muchas familias pasaron de no tener nada, a contar con un ingreso que al menos permita sortear las cosas más básicas. Podemos seguir mejorando, pero eso va a depender de a quiénes escojamos en estas elecciones. Porque hay otras visiones que creen más bien en que cada cual debe salvarse solo, no importa a qué precio siempre y cuando, el que pague, sea usted.

Vocación democrática

Protestas sociales que terminan con jóvenes muertos, prensa censurada, aislamiento internacional. Fuerte represión contra la ciudadanía y peligrosos intentos por terminar con uno de los poderes del Estado y cerrar el Congreso. ¡Esta descripción, huele mucho a una dictadura!

Esto es lo que pasa en Venezuela en este preciso instante y la situación lejos de parecer más calma, parece deteriorarse día a día. El gobierno de Nicolás Maduro parece que viviera en una realidad paralela, mostrando un país que sólo existe en sus mentes y torciendo evidentes hechos de la realidad, con una propaganda que raya en la vergüenza ajena.

Venezuela es hoy un país que va directo al precipicio de una dictadura y es necesario intervenir para que su pueblo no sufra las consecuencias que han vivido otras naciones que vivieron el fin de sus democracias. Ese fue nuestro caso en 1973. El atropello a los derechos humanos, el silencio impuesto a la prensa y la destrucción de las instituciones democráticas son claros síntomas de lo que estamos hablando.

Y... ¿Qué recibe Chile por apoyar la democracia? Ataques, insultos y una retórica pasada de moda que ya nadie acepta, entiende o tolera.

El canciller Heraldo Muñoz aclaró que la única motivación de nuestro país es apoyar los procesos de diálogo, la estabilidad y la paz social, de la mano de la mantención y cuidado de las instituciones que aseguran la democracia venezolana.

Lo que pasa en el país caribeño no es sólo una crisis política, no es sólo una oposición que no deja gobernar a Maduro, no es sedición como se ha intentado imponer en la opinión pública. Se trata de una grave crisis social, económica y humanitaria. El hecho de que no haya comida o enseres básicos, explica por sí sola la dimensión de lo que tiene que vivir día a día la gente más sencilla.

Nadie en su sano juicio, puede llamar a derrocar un gobierno democráticamente elegido, pero tampoco se puede permitir que ese mismo gobierno intente romper la

institucionalidad, viole los derechos de las personas o utilice el aparato estatal para torcer la voluntad de las mayorías.

En nefastas épocas pasadas, Chile pasó por esto y se puso de pie. Le dijo NO a una dictadura cruenta, gracias al acuerdo y la conjunción de las fuerzas democráticas. Vale la pena recordar cuánto nos costó volver a contar con un sistema democrático, que pese a sus imperfecciones, ha podido entregar la estabilidad y gobernabilidad necesarias, para lograr un pleno desarrollo como país.

De eso se trata, de vocación democrática.

A 50 años de una reforma resistida

Hace 50 años, el Presidente Eduardo Frei Montalva promulgaba la ley de Reforma Agraria que fue el primer paso que dio Chile para restituir la dignidad, justicia y equidad con el mundo rural y las personas que trabajaban la tierra. El sello de la Reforma lo imprimió en ese entonces el Gobierno de la DC que fue el primero en cristalizar los esfuerzos por dar dignidad a los campesinos, mediante una ley.

Se hizo pensando en un principio básico que era que la tierra debía ser trabajada, y no acumulada, que debía ser fuente de riqueza para muchos y no para unos pocos. Fue pensada para dar dignidad a las personas, dejando atrás décadas de servidumbre casi medieval.

Antes de esta Reforma, apenas 10 mil latifundios concentraban el 81% de la superficie 78% de la superficie agrícola del país; el nivel de sindicalización era mínimo, con apenas 32 sindicatos y 2.118 afiliados en 1965. La reforma Agraria de los Presidentes Frei y Allende permitió expropiar 9,8 millones de hectáreas para impulsar el trabajo en el campo y facilitó la existencia de más de 480 sindicatos campesinos para el año 1970.

No todo fue bueno, no siempre se acertó y la Reforma Agraria, también fue resistida. Pero lo que sí se puede afirmar es que llevó un fuerte cambio en las relaciones de poder en el campo, democratizó el mundo rural y sentó las bases del crecimiento de décadas posteriores en materia de potencial agropecuario en Chile.

Si no se hubieran hecho cambios, el campo chileno hubiera seguido anclado a viejas y añejas estructuras sin posibilidad de adelantar la revolución agropecuaria que caracterizó a nuestro país en los años posteriores. Son muchos los productos emblema que hoy forman parte de nuestras exportaciones y que incluso a nivel regional, se traducen en empleos y crecimiento.

El campo cambió para siempre ese 28 de julio de 1967. Hoy no podemos siquiera pensar en un Chile moderno y pujante económicamente, si no consideramos nuestras exportaciones agrícolas y pecuarias. No sólo vivimos de cobre, ni siquiera en esta región.

Es por eso que cuando nos detenemos un momento y miramos atrás para recordar a las personas que se la jugaron por estos cambios, entendemos lo importante que es apostar por ideas transformadoras, profundas y a veces dramáticas, pero que a la larga en el tiempo, van a significar una enorme fuente de crecimiento, riqueza y desarrollo para todo un país.

A votar

Lo que se juega este domingo es el tipo de país de nuestras familias a futuro. No se trata de lo inmediato, sino del legado a los chilenos, porque gobernar es más que administrar el Estado.

Ejerciendo el derecho a voto, eres parte de las decisiones respecto al tipo de país que quieres, más allá del signo político. El voto debe ser informado respecto a qué opción es la que permite construir condiciones de vida mejor, un Estado que sea capaz de garantizar derechos básicos como salud, educación y vivienda.

Y es que al contrario de lo instalado en el colectivo, el quehacer en política tiene menos que ver con partidos o cuoteo, y sí con el tipo y calidad de trabajo que tendrán las personas en las grandes ciudades y en los pequeños pueblos, con el acceso al agua de los agricultores, con las medidas para apoyar a los pequeños mineros o a los emprendedores.

En la política se define si vamos a usar nuestros recursos para generar riqueza o dejar pasar el desarrollo por la vereda del frente.

Fue la política la que permitió impulsar las energías renovables, la construcción de hospitales y centros de salud.

Fue la política la que dio más opciones a las mujeres de defender sus derechos reproductivos y reforzar sus derechos como madre trabajadora.

Eso es lo que se juega este domingo. Y no votar, no interesarse, es renunciar a participar del debate acerca de cómo y hacia dónde va el país, si las cosas se están haciendo bien y sobre cómo estas decisiones afectan nuestras vidas.

Es renunciar a ser parte activa del proceso para hacer las mejoras que se requieren.

Porque si exigimos cambios, lo mínimo es ejercer el más básico de los derechos y obligaciones civiles, como lo es el sufragio.

No votar es dejar que otros decidan por mí.

No votar es ratificar lo mismo que se critica: que su voz no vale nada. Eso es lo que hay que combatir.

Aprovechar el momento, del cobre

El cobre está retomando un ciclo de mejores precios, de manera tímida a fines de este año, pero tal vez de modo más sostenido en 2018. Todos los indicadores muestran que habrá más demanda por el metal y que la economía chilena debiera aprovechar este nuevo “buen ciclo” para promover buenas políticas públicas y hacer que el crecimiento llegue a la mayor cantidad de chilenos. En especial los de regiones que es donde se genera esta riqueza extractiva.

Suele ocurrirnos que la parte difícil y complicada de la “pega” se las llevan las empresas de menor tamaño en las regiones y buena parte de las ganancias y riquezas, se pierde en las comunas del gran Santiago. No estamos viendo que el esfuerzo local se refleje en cambios más acelerados en las regiones. Es decir, cambios hay. Hace poco se inauguró el nuevo Hospital de Salamanca, tenemos prácticamente remodelado el borde costero post terremoto y hay avances notorios en muchas áreas de salud, educación y vivienda.

Lo que inquieta es más bien, el ritmo de las transformaciones y la planificación e lo que ocurrirá en el futuro cuando el cobre ya no exista.

En estos días estamos discutiendo un proyecto de ley sobre la creación de un mecanismo de estabilización del precio del cobre que, en resumen, establece una banda de precio para evitar que las fuertes fluctuaciones del metal afecte de manera más negativa a los pequeños productores de las regiones mineras, la nuestra entre ellas.

Se trata de un fondo de 50 millones de dólares para apoyar a la pequeña minería cuando el precio de sustentación del cobre, el cual es definido por el ministerio de Hacienda, esté bajo el precio internacional observado del mineral. Lo manejará Enami en un presupuesto separado y funcionará a modo de “préstamo” que las empresas deberán devolver cuando el precio vuelva al alza.

Hasta ahí todo bien. El tema es que en los próximos años es muy probable que el precio del cobre esté al alza y tengamos un periodo de “bonanza”. Lo que va a pasar después, es un misterio. Tal como funciona la economía global, es muy probable que el precio de nuevo se derrumbe como nos ocurrió al inicio del actual gobierno.

Hay que aprovechar el momento del cobre. Hay que generar investigación y hay que generar conversaciones a nivel regional para proyectar una solución para los tiempos de vacas flacas. Apoyaré decididamente este Fondo de Estabilización, pero sería muy irresponsable confiarnos sólo en este tipo de instrumentos sin emplazar a las autoridades locales a poner un ojo en el futuro.

Nuestra región va a cambiar por varios motivos: va a verse afectada por el cambio climático y tendrá una vocación productiva distinta a la de hoy y tenemos que empezar a prepararnos ahora mismo para que ese tremendo cambio, nos pille desprevenidos.

¿Bien presas? Basta.

Tal vez no haya habido una frase más violenta y más reveladora de lo que realmente piensa la derecha más dura acerca del rol de la mujer en la sociedad, que aquella pronunciada por un senador de la UDI al señalar que las mujeres condenadas por abortos, “bien presas están”. No es mi intención polemizar personalmente con el mentado senador, ni tratar de interpretar si lo que dijo lo dijo a la luz de cierto “contexto”. Mi reflexión va más allá y tiene que ver –insisto- con el rol que una parte del espectro político le asigna a la mujer.

Cuando -en la década de 1930- en Chile comenzó el movimiento de las primeras mujeres que exigían derechos políticos y el sufragio femenino, se produjo un acalorado debate que, a la luz de nuestros tiempos, no encuentra ningún tipo de sustento. Hubo fuerte oposición a la sola idea de que las mujeres pudieran votar, con muchas opiniones basadas en estereotipos y argumentos infundados. Mujeres como Amanda Labarca y Elena Caffarena enfrentaron no sólo la incompreensión de una sociedad que adjudicaba a la mujer un rol hogareño, sino que hay que admitir que debieron hacer frente a una buena dosis de violencia explícita y tacita por parte de quienes consideraban que la política era sólo para hombres.

Nada ha sido fácil para la mujer. En un Censo que se realizó en Chile en 1812, se mostraba que sólo un 10% de las mujeres sabía leer y que un exiguo 8% podía escribir, mientras que recién en 1877 se dictó el decreto Amunátegui que autorizaba los estudios universitarios a las mujeres. Y el voto universal llegó en 1952.

Hoy, con una sociedad que ha avanzado notablemente no sólo en temas de ciencia y tecnología, sino que también en materia de conocimiento y humanismo, no sólo es infundada cualquier diferencia entre hombres y mujeres, sino que además es necesario y justo llevar una agenda política que corrija décadas de agravios e injusticias.

Eso no tiene que ver con la valoración que nuestra sociedad hace del aborto. Chile sigue siendo un país que se opone por motivos morales y de convicción cristiana. Pero hay circunstancias especiales que debemos tener en cuenta para facilitar la despenalización.

En tal sentido, el Gobierno ha enviado un proyecto que no sólo es razonable, sino que de toda justicia, en especial cuando se trata de circunstancias tan dramáticas como la posibilidad de la muerte o una violación.

Es ahí donde la frase “bien presas están”, no hace sino decir basta. Basta, porque no podemos coronar con tal brutalidad, todo lo que hay detrás de una violación. ¿También vamos a llegar a decir “bien violadas están”? Antes de llegar a esos extremos, es necesario que toda la institucionalidad, el Gobierno, las Cortes, el Congreso, el Tribunal Constitucional, hagan una valoración del mensaje que estamos enviando a las mujeres: nadie debe ser obligado a lo impensable, ser objeto de violación y además, convertirse en héroe y mártir, todo en un medio de un drama tan agravante.

La DC está en contra del aborto libre y en eso no ha habido un cambio de postura. Sí hemos concurrido con nuestros votos y apoyo político en estas tres causales de excepción, puesto que ante un hecho cruento, violento, denigrante, simplemente no se puede obligar a nadie a soportar tal carga si la persona no quiere. Debe existir la posibilidad de elegir. Unas pueden elegir abortar, otras podrán elegir otra cosa, no lo sabemos. Y para eso están las leyes, para dar opciones a los ciudadanos de actuar en conciencia, sin imposiciones valóricas de ningún tipo, porque la ley es universal.

Quisiéramos que la derecha no se ampare en el TC para intentar torcer las voluntades democráticas. Pero quisiéramos que ese convencimiento viniera no desde lo meramente jurídico o moral, sino desde la señal que estamos dando al país. La violencia que la sociedad chilena puede ejercer sobre las mujeres puede no terminar nunca si no decimos basta. Es hora de avanzar.

Caja Vecina, salud y economía de baja escala

Son 10 millones de usuarios los que se van a ver beneficiados con la nueva modalidad de FONASA de venta de bonos en las 1.000 Cajas Vecinas de BancoEstado de todo el país. Gracias a un convenio entre el banco y la institución de salud, ahora las personas podrán comprar sus bonos de atención médica con antelación, en cualquiera de las cajas que BancoEstado tiene distribuidas en los barrios.

En nuestra región, la presencia de BancoEstado es clave y juega un verdadero rol social, al acercar el mercado financiero a la región, las comunas y las localidades más apartadas. De acuerdo a datos del propio Banco, en nuestra región tenemos 16 sucursales bancarias tradicionales, 48 cajeros automáticos, 1 sucursal de ServiEstado y 14 Cajas Vecina.

Con esta reforma, ahora los usuarios de FONASA ya no tendrán que ir obligatoriamente a una sucursal para comprar el bono, sino que podrán hacerlo en el almacén del barrio más cercano a su casa. Todos quienes coticen en las modalidades de libre elección en los tramos B, C y D, podrán realizar este trámite en una Caja Vecina. El único requisito es solicitar un número de folio a través del sitio web de FONASA o llamando al número de teléfono, para poder hacer el pago en el negocio de su barrio.

Sin duda que esta es una buena noticia para gente que no siempre tiene ni el tiempo ni la plata para concurrir hasta los centros urbanos más grandes a hacer este tipo de trámites, pero además nos abre la puerta para una serie de otros debates, como por ejemplo, el monopolio de Redbanc en el mercado de las transacciones financieras electrónicas.

Este es un asunto que suele volver al debate público, sin que se avance a alguna fórmula que permita abrir este mercado y permitir que haya más competencia y rebaja de costos. En especial, es muy relevante lo que pudiera pasar en el micro empresas o las empresas

familiares, si se da la opción que caja vecina y BancoEstado puedan entrar al comercio con "dinero de plástico".

Hay muchas empresas que hoy no reúnen los requisitos de costos y mantención para operar con Redbanc, pero que perfectamente podrían operar con otros estándares. En tal sentido, BancoEstado podría dar respuesta a ese segmento de empresarios para los cuales, la posibilidad de entrar al mundo de las operaciones con tarjeta, podría significar un aumento en sus ventas.

Lo que ocurre ahora con la venta de bonos de FONASA, es un ejemplo más de que este tipo de mecanismos no sólo es viable, sino que -además- inmensamente justos para un porcentaje de empresas que suele quedar rezagado de beneficios y facilidades que sí se le dan a los grandes conglomerados económicos. La salud de la economía y del sistema financiero también debiera pasar por introducir más competencia y transparencia, lo que nos anima a pedir que este debate se lleve a cabo y tengamos más opciones que ofrecerle no sólo a los clientes finales, sino que también a las empresas de menor tamaño.

La economía en tiempos de elecciones

El crecimiento es el pie forzado de nuestra economía y en eso, creo que no hay dos opiniones. Cifras que de seguir ahondando en el pesimismo nos pueden llevar a perder la competitividad en la región y en el mundo, y con ello generar los consabidos males que afectan a una economía estancada, como la afectación al empleo.

Conocimos una proyección realista del Banco Central, pero con un nivel que puede mejorar, eso no es ficción. Es cierto que recién salidas del horno las últimas cifras de Imacec son negativas, con recortes de la proyección de crecimiento y llegan en medio de una campaña electoral en ciernes, entonces es natural preguntarse cómo este mal ciclo económico puede ser usado como caballo de batalla en la campaña, arriesgando exacerbar un debate que requiere calma y cabeza fría.

El presidente del Banco Central señaló en su Informe de Política Monetaria que un cambio político no es la solución para revertir las malas cifras del ciclo económico que enfrentamos y que - más bien - se requiere remar hacia revitalizar nuestra estructura productiva, el mercado laboral y por sobre todo, la productividad.

Debemos hablar sin ansiedades, con evidencias sobre la mesa y conscientes de la presencia de la campaña electoral en el horizonte. Actitudes irresponsables, cortoplacistas y mezquinas de algunos candidatos que hacen declaraciones ofreciendo doblar el crecimiento como si fuera magia, le hacen demasiado mal al país.

Esta actitud es peligrosa y va derechamente en contra de lo que se está tratando de lograr con un proceso democrático y donde primen el clima de diálogo y análisis frío que nos permita incentivar una curva de crecimiento al alza.

La tarea es de tal magnitud y abarca asuntos tan complejos y de larga data, que no basta con disparar desde la trinchera ideológica. Por ejemplo, la propuesta de rebajar la jornada laboral, recibió críticas y alabanzas casi por igual. Personalmente, creo que lo relevante es poner el punto en la competitividad, la productividad, el mercado laboral y la calidad de vida de los trabajadores.

Esperemos que de ese debate salgan ideas consensuadas acerca de qué medidas sí pueden revitalizar el mercado del trabajo y la productividad, al tiempo que incentiven la cultura del Bienestar. Pero claro, es necesario ofrecer al país alguna opción de adelantarnos a cifras de empleo cada vez peores y evitar se vuelva algo estructural.

Necesitamos acciones serias, con visión de país, lejos de cualquier populismo. Ello para contrarrestar el hecho de que algunos insisten en que las cifras económicas de este momento son reflejo de las reformas impulsadas por este gobierno: declaraciones cuya liviandad e irresponsabilidad son de una soberbia que asusta.

El bajo crecimiento y el impacto que eso tiene en el empleo, la competitividad y la productividad, es un asunto que como país debemos revertir en un ambiente de unidad, de habilidad técnica, de sinceridad y patriotismo que muchas veces falta en tiempos de elecciones.

Chile debe seguir avanzando

Luego de las elecciones se presenta el escenario que definirá la configuración de las distintas fuerzas políticas. La derecha ya no como un bloque político, sino como partidos y movimientos menos orgánicos que a lo que estábamos acostumbrados. Mientras, el destino de la Nueva Mayoría es ineludible, cambiar rotundamente o morir para renovar la oferta programática.

El PDC debemos ser una oposición activa y constructiva, sobre todo cuando vimos que la campaña obligó a la derecha a abrazar banderas que no estuvieron en sus programas y postulados, lo cual abre una tremenda duda respecto si van a respetar esos ofertones o, si van a volver a sus postulados, tal como ya hemos visto en declaraciones de algunos parlamentarios.

Algunos querrán retroceder en la gratuidad y otros ya estarán pidiendo que haya lucro en la educación universitaria. Intentarán también “corregir” la ley que despenaliza el aborto en tres causales, castigando a la mujer que haya tenido que recurrir a esta dramática situación.

Y así, en muchas otras áreas, intentarán presionar al Presidente electo para llevar las cosas hacia los postulados clásicos de la derecha.

¿Qué harán las bancadas que hoy integran la Nueva Mayoría, qué harán las fuerzas del Frente Amplio? Es una incógnita y legítima preocupación para los votantes de la centro-izquierda y del mundo progresista que verá una amenaza permanente a aquellas áreas en las que se ha avanzado corriendo el cerco.

La derecha no tiene mayoría suficiente para pasar cambios relevantes y debe pactar, pero eso no debe dar pie a retrocesos o claudicaciones frente a derechos ya obtenidos y ganados por la ciudadanía. En ese cuadro político, es claro e ineludible el rol de mi partido.

A mi juicio, la DC debe ser oposición a un gobierno de derecha. Eso no quiere decir que las buenas ideas, las que vayan en el sentido de profundizar cambios sociales y derechos para los más vulnerables, no cuenten con nuestro apoyo. Si un proyecto o cambio legal va en el sentido de profundizar derechos, pues estaremos disponibles.

Pero la peor amenaza que se cierne sobre estas ideas del mundo progresista es la división y la falta de habilidad para lograr el entendimiento de las fuerzas del centro y de la izquierda democrática. Caer en desconfianzas y divisiones insalvables, nos va a llevar no sólo a la posibilidad de perder lo que se ha ganado, sino que abre la posibilidad de que la derecha logre instalarse en el poder por más de un periodo. Eso es real y tiene que ver con que no existe un liderazgo nítido, claro y convocante que pueda tomar estas banderas y generar confianzas al futuro.

La derecha tomó propuestas como la gratuidad, el mejoramiento de las pensiones o la protección de la infancia, pero eso fue en campaña. Ahora hay que ver cuánto se podrá soportar la presión de quienes quieren profundizar el lucro en salud, educación o pensiones, los que quieren indultar a los violadores de los derechos humanos o los que quieren acabar con la agenda de integración en materia de sexualidad y género.

Ahí veremos la integridad de quienes se declaran progresistas y de quienes están dispuestos a dejar las diferencias y matices menores a un lado, por enfrentarnos con quienes tenemos abismos de diferencia en materia de políticas públicas.

Nuestro rol es asegurarle a la ciudadanía que vamos a pelear por mantener aquello que logramos, las áreas en donde se hizo una diferencia esencial para las familias. Es lo que se espera del Chile progresista.

Chile y Perú, escribiendo la historia del futuro

La reunión de gabinete binacional con Perú para discutir la agenda conjunta en torno a los principales problemas y desafíos que tienen ambas naciones con miras a un futuro común, no es sólo un hecho político, es una cita que trasciende, esperamos, estas administraciones hacia el desarrollo de ambos países que se dan cita en Lima.

A esta reunión asiste casi la totalidad de los ministros de Chile y sus respectivas contrapartes peruanas. La intención es tratar diversos temas de coordinación intersectorial para arribar a acuerdos que serán implementados a corto o mediano plazo, dejando atrás décadas de desconfianzas y que dan por superado el diferendo que hace un tiempo nos tuvo enfrentados en La Haya.

El primer paso lo dimos como Comisión de Relaciones Exteriores en trabajo conjunto a principios de año con nuestros pares del Perú, donde se trazó un marco legislativo conjunto en varias materias, entre ellas, la migratoria.

Ahora, la agenda que propusieron la Presidenta Bachelet y el Presidente Kuczynski se centra en temas sociales, seguridad y defensa, comercio y turismo. Además de medio ambiente, energía, minería, e integración fronteriza. Se trata pues de una jornada de trabajo que girará en torno a áreas clave para países que han puesto su norte en el combate a la pobreza y la búsqueda de un crecimiento más equitativo, de la mano de una actividad comercial fuerte, integradora y aperturista.

No es casualidad que ambos mandatarios se han manifestado en contra de las medidas proteccionistas que por estos días son motivo de controversia entre las potencias

mundiales y que tendrán en la Cumbre del G20 un verdadero cara a cara entre quienes quieren un comercio libre y quienes insisten en poner trabas y protecciones.

Es esperanzador entonces que dos países de América Latina estén en esa sintonía, con ese nivel de concordancia y con decisiones bien claras respecto de qué se requiere para lograr un desarrollo equitativo.

Esta cita evidencia la diametral diferencia respecto el entendido de vecindad del actual gobierno boliviano, que con un interés cortoplacista basado en comentarios ofensivos del Presidente Morales, nos obliga a responder a los intentos de Palacio Quemado de demonizar la convivencia.

Es preferible lo primero, lo que estamos haciendo con Perú y que hemos hecho anteriormente con otras naciones del continente, en donde la apuesta está en generar consensos en torno a los desafíos de toda la región y que tienen que ver con el crecimiento, la equidad, el desarrollo social y humano.

Por lo demás, está muy clara la línea divisora entre países que han optado por la democracia, el respeto a la institucionalidad y los derechos humanos, versus aquellos que han caído en populismos y fórmulas que se creían desterradas del barrio.

Chile tiene claro su norte y tiene claro que la colaboración, la seriedad y formalidad en las relaciones, darán mejores frutos que la confrontación.

Lo de Lima es un hito histórico que hasta nos permitirá hacer una apuesta: el resultado será que Chile y Perú estarán en unos años hablando de cooperación para resolver profundos males sociales, mientras que los que han apostado por cerrarse al diálogo, aislarán a su propio pueblo.

Chile y Perú, escribiendo la historia del futuro

Esta semana se realizará, por primera vez en la historia, un gabinete binacional con Perú para discutir una agenda conjunta en torno a los principales problemas y desafíos que tienen ambas naciones con miras a un futuro común. Esto tiene una trascendencia que cuesta expresarla en el papel, pero que tiene enormes consecuencias para el desarrollo de los países que se darán cita en Lima.

A esta reunión asistirá casi la totalidad de los ministros de Chile y sus respectivas contrapartes peruanas. La intención es tratar diversos temas de coordinación intersectorial para arribar a acuerdos que serán implementados en los próximos meses o años, dejando atrás décadas de desconfianzas y que dan por superado el diferendo que hace un tiempo nos tuvo enfrentados en La Haya.

La agenda que propusieron la Presidenta Bachelet y el Presidente Kuczynski se centra en materias referidas a temas sociales, seguridad y defensa, comercio y turismo, medio ambiente, energía, minería, e integración fronteriza. Se trata pues de una jornada de trabajo que girará en torno a áreas clave para países que han puesto su norte en el combate a la pobreza y la búsqueda de un crecimiento más equitativo, de la mano de una actividad comercial fuerte, integradora y aperturista.

No es casualidad que ambos mandatarios se han manifestado en contra de las medidas proteccionistas que por estos días son motivo de controversia entre las potencias mundiales y que tendrán en la Cumbre del G20 un verdadero cara a cara entre quienes quieren un comercio libre y quienes insisten en poner trabas y protecciones.

Es esperanzador entonces que dos países de América Latina estén en esa sintonía, con ese nivel de concordancia y con decisiones bien claras respecto de qué se requiere para sacar a adelante a nuestras naciones.

Pero es también llamativo la diametral diferencia que se ve en la relación que tenemos con Bolivia, basada en comentar twits ofensivos del Presidente Morales, enfrascados en una permanente refriega en los medios de comunicación y respondiendo a los intentos de La Paz de politizar todo lo que tenga que ver con Chile para fines poco claros.

Es preferible lo primero, lo que estamos haciendo con Perú y que hemos hecho. Antes con otras naciones del continente, en donde la apuesta está en generar consensos en torno a los desafíos de toda la región y que tienen que ver con el crecimiento, la equidad, el desarrollo social y humano.

Por lo demás, está muy clara la línea divisora entre países que han optado por la democracia, el respeto a la institucionalidad y los derechos humanos, versus aquellos que han caído en populismos y fórmulas que se creían desterradas del barrio.

Chile tiene claro su norte y tiene claro que la colaboración, la seriedad y formalidad en las relaciones, darán mejores frutos que la confrontación. Lo de Lima es un hito histórico que hasta nos permitirá hacer una apuesta: el resultado será que Chile y Perú estarán en unos años hablando de cooperación al mañana para resolver profundos males sociales, mientras que los que han apostado por cerrarse al diálogo, seguirán donde mismo.

Chile, su selección de fútbol y la política

Este domingo, un país entero estará pendiente de lo que ocurra con nuestra selección de fútbol que jugará, ante la poderosa Alemania, la final de la Copa Confederaciones. Y creo que es muy buen momento para reflexionar sobre un par de cosas que dijo en los días previos, Alexis Sánchez, el delantero que nos deslumbra no sólo con sus jugadas, sino que también con su personalidad.

Alexis dijo dos cosas que tocaron la fibra de millones de chilenos. Contó que para el mundial de 1998, él ni siquiera tenía tele en su casa. Además, con mucha asertividad dijo que si los chilenos no éramos capaces de apoyarnos entre nosotros, nadie iba a hacerlo. Esto está tan ligado a la política que llega a estremecer. Para 1998, cuando Alexis tenía que buscar una casa con televisión para ver a la dupla de Salas y Zamorano, Chile era un país bien distinto al que viven miles de otros Alexis que a lo largo de Chile sueñan también con darle el palo al gato y cambiar sus vidas y las de sus familias.

La diferencia central está en que hoy, este país ha ido creciendo para dar más y mejores herramientas a las familias para sacar a sus hijos adelante. En 1998, la universidad y los colegios se pagaban; en 1998, Chile apenas tenía comercio exterior debido al aislamiento que vivió por culpa de la dictadura.

En los últimos 10 años, los resultados de las pruebas del Simce han ido en aumento, se ha acortado la brecha entre hombres y mujeres en matemáticas, y se ha ido reduciendo la brecha entre niños provenientes de hogares más acomodados respecto de los hogares más humildes.

Todo esto ha ocurrido gracias al esfuerzo de las familias, de los estudiantes y de los profesores. Pero también ha habido una voluntad política para hacer que Chile le dé esas oportunidades a los Alexis, a los Arturos, a los Beausejour... Esa diversidad que muestra nuestra selección, es reflejo de lo que queremos para Chile: una nación que integre, que admire a su gente sin importar su origen y que, por sobre todo, sea capaz de apoyarse unos a otros cuando se trata de sacar tareas colectivas, tareas país.

Sea cual sea el resultado de la selección, debe inspirarnos a mirar el futuro con esa misma épica y pensar que no importa lo que pase en las elecciones, de lo que se trata es de hacer de Chile, un lugar en el que quepamos todos.

Codelco no es botín electoral

Cuando leemos que Codelco es líder mundial en ranking de gobernanza entre empresas estatales, superando a potencias mineras como Reino Unido y Australia, recordamos que esta empresa estatal, ha cumplido un papel estratégico y crucial en el desarrollo y puesta en marcha de toda la política social de los Gobiernos desde la nacionalización del cobre.

No puede explicarse el nivel de desarrollo y la posición actual de Chile en el concierto internacional, sin tener en cuenta el enorme aporte que ha hecho la cuprífera estatal a las arcas fiscales y a desarrollar el perfil minero que ostenta nuestra nación.

Por ello debemos ser cuidadosos al poner en entredicho la competitividad y productividad de la empresa. Porque no es inocuo lo que parece un diferendo jurídico suscitado con la Contraloría General de la República. Los controles a las empresas estatales son procesos que se agradecen, para eso las instituciones funcionan, pero no pueden ser una excusa para que - como buena Oposición, o con aires populistas - busquemos acusar un supuesto despilfarro sólo a raíz de estos procesos. Algunos parecen no darse cuenta que con ello se facilita una sombra de inestabilidad.

Debemos tener en cuenta además, que la ley de Gobierno Corporativo de Codelco ha significado un enorme avance en la modernización y actualización de su gestión operativa, en su proceso de toma de decisiones comerciales y estratégicas y en el control de costos para mantener a la empresa en el top mercado minero mundial. Un primer filtro, la herramienta más adecuada para asegurar el correcto uso de los recursos que pertenecen a todos los chilenos.

En su último directorio, el gobierno solicitó a la cuprera agotar los mecanismos administrativos para concordar con Contraloría una salida al diferendo, sin descartar la vía judicial. Más allá de esa opción, somos varios los que hubiéramos querido una señal algo más nítida y fuerte respecto de Codelco por parte del Ejecutivo y sólo resta hacer fe de que esta estrategia surta efectos en un contexto de extrema desconfianza, muchas veces injustificada.

Codelco debe administrarse de manera análoga a las empresas que son su competencia en el sector privado, por lo que no se le pueden exigir adoptar estándares de servicio público que pondrían en serio riesgo su estabilidad financiera, su desarrollo y proyección futura.

Uno de esos puntos clave tiene que ver con la plena vigencia que tiene el Código Laboral y la negociación colectiva a la hora de establecer todas las relaciones laborales en Codelco, así como la vigencia de la ley de Sociedades Anónimas, para el caso de las obligaciones que pesan sobre directores y máximos ejecutivos. ¿Qué reales intenciones hay detrás de este intento de transformar a Codelco en una enorme maquinaria burocrática en vez de una empresa moderna y ágil?

Esta ofensiva recuerda - curiosamente - aquellas intentonas que lideraron los sectores más neoliberales para privatizar la empresa. Sí, hay que hacer buen uso de los mecanismos de gestión y de los recursos de la empresa, pero sin trastocar lo que es la naturaleza jurídica y el rol que le cabe a Codelco en el desarrollo de Chile. Más aún cuando la actual administración ha hecho transformaciones inéditas en materia de gestión interna, política de proveedores, transparencia e inhabilidades.

Se ha pasado por alto que Contraloría precisó que ha pedido antecedentes a Cochilco y esta entidad ha demorado el trámite, claro, sólo se cuenta con 13 funcionarios para fiscalizar las dos mineras estatales. Si es necesario fortalecer el rol de Comisión Chilena del Cobre, por ejemplo, manos a la obra. Y por supuesto, que el deber de las autoridades de

la empresa sigue siendo administrar la compañía con celo y con eficiencia para seguir con el plan de reducción de costos, por eso no caben las trincheras políticas.

Codelco representa un pilar esencial para el desarrollo y crecimiento de nuestra economía. A veces, el tiempo de campañas hace que cualquier cosa sea usada para lograr algo de figuración y mostrarse como paladines de la rectitud; pero por favor, cuidemos la institucionalidad, que no es un botín electoral.

Un proceso a Fuego Lento

Como PDC hemos hecho noticia por la renuncia de un grupo de militantes y otro resto que se ha declarado “en reflexión”. Cada uno de ellos es importante y siempre es una lástima cuando ya no se tiene la voluntad de pertenecer a un partido. Sin embargo, me sorprende cuando preguntan cuál es el domicilio político del PDC, éste nunca ha estado en cuestión. No podemos por un asunto coyuntural, llevar al partido a un debate artificial respecto situarnos a la Derecha o Izquierda del Centro.

Entonces, surge la necesidad de retomar ser un partido de vanguardia, popular y transversal que busca el desarrollo de las personas en una comunidad de hombres libres donde lo importante es el crecimiento, pero con sentido de equidad, lo que en rigor es hacer de nuestra sociedad un país más solidario. Y no creo que exista en ello diferencia entre los militantes del Partido Demócrata Cristiano, sin embargo nos hemos alejado de ese foco sin darnos el tiempo de pensar. Pues bien, ahora existe ese espacio, no tenemos motivos ni apuro que den cabida a la ansiedad.

Las falsas alarmas generadas porque la mesa anuncia su dimisión cumpliendo las formalidades legales, son parte del clima que podríamos evitar en esta etapa donde es vital el trabajo real y surge de nuevo entonces la necesidad de entregar a cada paso la verdadera connotación política que merece.

El llamado es a separar lo anecdótico de la reflexión y debate que como fuerza política estamos llamados a protagonizar, para dar paso a lo que deben ser nuestras propuestas programáticas hacia el futuro. Este es el tiempo en que es necesario redefinirse, el partido tiene que modernizarse para ponerse a tono con el desafío de Chile en los próximos años en materia social, económica, participación democrática y valórica: eso lo vamos a hacer a través del Congreso Ideológico, y ésta es la instancia, no otra. Espero que ésta sea ratificada como la oportunidad para discutir las diferencias, nos pongamos de acuerdo y recién ahí fijemos posturas respecto otras fuerzas políticas.

La tarea como militantes es exigir a sus representantes poner el foco en lo primordial, no ganamos al colocar a alguien en la cabeza del partido sin tener claro el objetivo, eso es volver a caer en el electoralismo interno que nos desune.

Por ello, lo primero es hacer este debate interno con calma y generosidad, a su tiempo, sin presiones autoimpuestas porque hoy estamos claramente en oposición por la voluntad de la ciudadanía, desde donde debemos apoyar la consolidación que se ha llevado adelante en materia social, y por supuesto, rechazar cualquier retroceso en esa línea que impulse el próximo gobierno.

Migración y la Oportunidad De Crecer

¡Al fin! La gestión de los procesos y flujos migratorios en Chile está sobre la mesa. Es hora de hacernos cargo de una situación postergada, ya sea por desidia, preocupados del crecimiento o bien, de implementar las reformas, y claro, ese es el problema: dejamos fuera desafíos y dinámicas de la movilidad humana como parte de aquello. ¡No podíamos estar más equivocados!

Existe un discurso transversal que busca desarrollo económico, social y fin de la desigualdad. Miramos desde abajo a las sociedades avanzadas en derechos civiles y calidad de vida, pero nos olvidamos que para lograrlo es necesario generar mayor inclusión y oportunidades para todos los que residen en nuestro país.

Hemos escuchado en los últimos días de parte de algunos líderes políticos todo lo contrario, un nacionalismo oportunista, disfrazado de propuestas que recogen parte de lo más indeseable en cualquier sociedad: exclusión, prejuicios y estereotipos sobre los extranjeros. Qué lamentable que propiciemos un ambiente para cultivar la xenofobia afectando nuestra propia cultura.

Preocupa que la solución de parte de aquellos que buscan burdamente hacer campaña de este tema sea asociarlo al “narcotráfico, el contrabando, el crimen organizado o la inmigración ilegal” ofreciendo restricciones de ingreso y expulsiones, sobrepasando el

Estado de Derecho y el ineludible respeto a los convenios y tratados internacionales con plena vigencia en Chile. Entonces, lo que logramos no es otra cosa sino tapar el fenómeno, tergiversando su alcance y manipulando la opinión pública con sentencias infundadas.

Por eso, nada más nefasto que usar este tema como bandera electoral, sin altura de miras y una mínima comprensión para entender que las migraciones se generan por problemas en el país de origen o que independiente de las razones, migrar es derecho de todo ciudadano. Y ello conlleva algo tan básico como que la persona migrante, al igual que cualquier otra, es precisamente sujeto de derecho y portador de esa calidad en cualquier lugar donde se encuentre.

Dentro de ese marco es que Chile está trabajando una propuesta integral, que va más allá de las medidas migratorias fronterizas y las acciones tienen que ser muy coordinadas con los otros países –muchos de ellos de origen y tránsito de nuestra migración- con los cuales nosotros convivimos, particularmente América Latina.

Y la forma de abordar el tema es hablando siempre de una migración irregular y no ilegal, por ejemplo. Ya que para el ingreso irregular-por paso no habilitado sin respetar las normas de migración- lo que corresponde es la aplicación de la ley, con la salvedad del solicitante de refugio. Es crucial entonces tratarla y resolverla como falta administrativa, nunca como un delito, como pretenden hacerlo algunos.

Tampoco podemos permitirnos caer en la tentación de recoger cualquier descontento y crear un problema asociándolo a acciones delictuales. Las cifras oficiales son reflejo de los hechos: los ilícitos denunciados en 2015 que involucran a extranjeros llegaron a 4.299, lo que equivale al 0,3% del total de denuncias registradas por la Fiscalía Nacional. El contraste: los delitos contra inmigrantes aumentaron en 14%.

Como Co-presidente de la Comisión de Migraciones de Eurolat, fui testigo del desafío que existe respecto las consecuencias de las migraciones, sobre todo en niños, niñas y adolescentes migrantes. Alarma que 27 millones de ellos en el mundo estén en esa

situación, exponiéndose a abusos como trata de personas cuando no existe política migratoria.

Por eso es de esperar que esta fiebre de frases sea el primer paso hacia una seria discusión de fondo sobre un mejor manejo de las migraciones en nuestro país. Cómo abordarla también es prioridad en la comunidad internacional, tanto así, que la ONU busca propiciar un Pacto Global para una Migración Ordenada, Segura y Regular, como resultado de la convicción y el consenso de sentar un acuerdo general. Y Chile debe aspirar a lo mismo, una forma permanente de recibimiento de migrantes, garantizando sus derechos, como también el cumplimiento de deberes.

Es crucial tener las reglas claras para el que llega, eso es innegable, pero evitemos sacar cuestionables réditos políticos, pues ello desprestigia y agrede a los valores básicos de la democracia y la justicia social, pues Todo Hombre y Mujer tiene derecho a Ser Persona.

El sentido de Justicia de la Ley

No es artificial nuestra preocupación ante la eventual resolución del Tribunal Constitucional de quitarle las facultades que entregamos por ley al Servicio Nacional del Consumidor. Ello porque los cambios estudiados durante más de tres años en el parlamento buscan perfeccionar la institucionalidad, para que eficazmente se pueda fiscalizar al comercio y sancionar a quienes no cumplen con la prestación de servicios o, cuyos productos son defectuosos: un derecho que va más allá de la controvertida intervención del Tribunal Constitucional.

No se buscó perjudicar al retail con la nueva Ley del Sernac, su fortalecimiento beneficia a todos los actores de la economía, para realmente tener una capacidad de defensa de los derechos de los consumidores y evitar los abusos que se han presentado últimamente con casos de colusión y vivimos a diario a través de reclamos sin respuesta.

Por eso, los trascendidos en la prensa en torno a la eventual eliminación de facultades al Sernac por parte del Tribunal Constitucional, es una alarma.

Otro punto es entender que el Tribunal Constitucional no es legislador, no puede doblegar las decisiones que se adoptan en organismos que sí lo son y tampoco puede pretender dictar normas que son materia de ley y de debate del Congreso Nacional. Éste,

en uso de sus facultades, puso fin a las asimetrías de derechos que caracterizan las operaciones entre comercio y consumidor.

Mientras, el TC estaría definiendo que son los Tribunales los que deberían zanjar estas disputas. Pues eso fue debatido en el organismo que en Chile hace las leyes –el Congreso– y el resultado consideró, apegado a la práctica, que ese tipo de reclamaciones no son ni sencillos, ni baratos y menos expeditos. Fue el legislador el que entendió que la fiscalización debe estar acompañada de sanciones, porque de lo contrario se trataba de letra muerta.

De ser cierto lo que informan los medios, estamos ante una grave situación, ya que se cristalizaría el anhelo de cierto empresariado por mantener una situación de desbalance y debilitamiento de la defensa de los derechos de las personas.

Ante este posible escenario es necesario insistir en defender una normativa que equilibre la cancha y las facultades del Congreso para que el punto en común sea obtener una ley que no lesione los derechos de las personas.

Chile, país que debe seguir avanzando

Luego de las elecciones se presenta el escenario que definirá la configuración de las distintas fuerzas políticas. La derecha ya no como un bloque político, sino como partidos y movimientos menos orgánicos que a lo que estábamos acostumbrados. Mientras, el destino de la Nueva Mayoría es ineludible: cambiar rotundamente o morir para renovar la oferta programática.

El PDC debemos ser una oposición activa y constructiva, sobre todo cuando vimos que la campaña obligó a la derecha a abrazar banderas que no estuvieron en sus programas y postulados, lo cual abre una tremenda duda respecto si van a respetar esos ofertones o, si van a volver a sus postulados, tal como ya hemos visto en declaraciones de algunos parlamentarios.

Algunos querrán retroceder en la gratuidad y otros ya estarán pidiendo que haya lucro en la educación universitaria. Intentarán también “corregir” la ley que despenaliza el aborto en tres causales, castigando a la mujer que haya tenido que recurrir a esta dramática situación.

Y así, en muchas otras áreas, intentarán presionar al Presidente electo para llevar las cosas hacia los postulados clásicos de la derecha. ¿Qué harán las bancadas que hoy integran la

Nueva Mayoría, qué harán las fuerzas del Frente Amplio? Es una incógnita y legítima preocupación para los votantes de la centro-izquierda y del mundo progresista que verá una amenaza permanente a aquellas áreas en las que se ha avanzado corriendo el cerco.

La derecha no tiene mayoría suficiente para pasar cambios relevantes y debe pactar, pero eso no debe dar pie a retrocesos o claudicaciones frente a derechos ya obtenidos y ganados por la ciudadanía. En ese cuadro político, es claro e ineludible el rol de mi partido.

A mi juicio, la DC debe ser oposición a un gobierno de derecha. Eso no quiere decir que las buenas ideas, las que vayan en el sentido de profundizar cambios sociales y derechos para los más vulnerables, no cuenten con nuestro apoyo. Si un proyecto o cambio legal va en el sentido de profundizar derechos, pues estaremos disponibles.

Pero la peor amenaza que se cierne sobre estas ideas del mundo progresista es la división y la falta de habilidad para lograr el entendimiento de las fuerzas del centro y de la izquierda democrática. Caer en desconfianzas y divisiones insalvables, nos va a llevar no sólo a la posibilidad de perder lo que se ha ganado, sino que abre la posibilidad de que la derecha logre instalarse en el poder por más de un periodo. Eso es real y tiene que ver con que no existe un liderazgo nítido, claro y convocante que pueda tomar estas banderas y generar confianzas al futuro.

La derecha tomó propuestas como la gratuidad, el mejoramiento de las pensiones o la protección de la infancia, pero eso fue en campaña. Ahora hay que ver cuánto se podrá soportar la presión de quienes quieren profundizar el lucro en salud, educación o pensiones, los que quieren indultar a los violadores de los derechos humanos o los que quieren acabar con la agenda de integración en materia de sexualidad y género.

Ahí veremos la integridad de quienes se declaran progresistas y de quienes están dispuestos a dejar las diferencias y matices menores a un lado, por enfrentarnos con quienes tenemos abismos de diferencia en materia de políticas públicas.

Nuestro rol es asegurarle a la ciudadanía que vamos a pelear por mantener aquello que logramos, las áreas en donde se hizo una diferencia esencial para las familias. Es lo que se espera del Chile progresista.

Cómo hacer mal las cosas

La renuncia del equipo económico del Gobierno, en medio de un show mediático que duró casi una semana, es una de las señales más insólitas que ha vivido una coalición de gobierno. ¡Tuvieron que pasar 27 años para ver cómo un gobierno removía por segunda vez a su ministro de Hacienda en la misma administración!

Ciertamente no es una noticia buena, ciertamente no es una señal adecuada para la ciudadanía y el mercado. Aunque también hay que admitir que cuando no hay acuerdo y alineamiento entre la máxima autoridad del país y sus ministros, es francamente imposible seguir el tranco. No era presentable que secretarios de Estado polemizaran a través de la prensa sobre qué hacer en materia de crecimiento y cuidado del medio ambiente.

El cambio abrupto del gabinete ya pasó. Habrá tiempo para hacer análisis y hay que ser sinceros en admitir que no hay tiempo para corregir los errores, pues el gobierno está llegando a su recta final. En lo que queda de tiempo, es menester concentrarse en sacar

un buen proyecto de presupuesto, responsable y realista, además de enfrentar la negociación con el sector público para el reajuste salarial.

Ambos temas son esenciales para dar las señales adecuadas al país en el sentido de cuidar estos brotes de recuperación que están llegando. El índice de producción industrial anotó un importante avance y las cifras del desempleo estuvieron por debajo de las expectativas del mercado, lo que hace pensar en una leve recuperación en ciernes, de la mano de la mayor actividad minera y manufactura.

Y eso es lo paradójico. Fue justamente un proyecto minero el que provocó esta crisis, luego de que una iniciativa tan relevante para la reactivación económica y que cumplía con las aprobaciones de los organismos técnicos, termina siendo rechazado. Es que no se entiende que el cuidado al medio ambiente hipoteque el crecimiento tan necesario en este minuto.

También hay que notar la falta de tacto político que posibilitó llevar esta diferencia hasta un escenario de crisis. ¿Por qué no intervinieron los partidos? ¿Por qué no se recurrió a los líderes políticos de la coalición? Nunca lo sabremos en realidad, pero lo que sí conocemos de sobra, es que situaciones como ésta no es novedad, pero siempre hubo la suficiente amistad política y conjunción de liderazgos para llegar a acuerdos y mantener el orden.

Nos ayudaría reflexionar cuánto nos importa la gobernabilidad, cuánto nos importa la estabilidad y cuánto nos importan las reglas claras en materia de conducción económica. Esta es una muestra de cómo hacer mal las cosas, en un momento en que lo que más se necesita es liderazgo. Nadie pedía otra cosa que el respeto de la institucionalidad medioambiental, pero terminamos en medio de una crisis de conducción política artificial y auto inferida.

Ahora debemos buscar el espacio para reparar el daño hecho, no sé si hay voluntad de parte del equipo presidencial para recuperar el capital perdido, pero este episodio nos muestra que la gobernabilidad es un asunto delicado que requiere de mucho talento.

Estamos al debe en establecer una adecuada jerarquía de prioridades y eso sí que nos puede pasar la cuenta en esta elección.

Con Codelco no se juega

Codelco ha cumplido un papel estratégico y crucial en el desarrollo y puesta en marcha de toda la política social de los Gobiernos desde la nacionalización del cobre. No puede explicarse el nivel de desarrollo y la posición actual de Chile en el concierto internacional, sin tener en cuenta el enorme aporte que ha hecho Codelco a las arcas fiscales y a desarrollar el perfil minero que ostenta nuestra nación.

Y es precisamente ese estatus político, social y económico, el que se pone en entredicho cuando se juega con la competitividad y productividad de la empresa. Quienes han estado directa o indirectamente intentando cambiar el régimen de administración, parecen no darse cuenta de la amenaza que siembran sobre el desarrollo de Chile.

La ley de Gobierno Corporativo de Codelco ha significado un enorme avance en la modernización y actualización de su gestión operativa, en su proceso de toma de decisiones comerciales y estratégicas y en el control de costos para mantener a la

empresa en el top mercado minero mundial. Esa es la herramienta más adecuada para asegurar el correcto uso de los recursos que pertenecen a todos los chilenos. De hecho, si no fuera por Codelco, Chile sería un país bien distinto.

En su último directorio, el gobierno solicitó a la cuprera agotar los mecanismos administrativos para concordar con Contraloría una salida al diferendo, sin descartarse la vía judicial. Más allá de esa opción, somos varios los que hubiéramos querido una señal algo más nítida y fuerte de defensa de Codelco por parte del Ejecutivo y sólo resta hacer fe de que esta estrategia surta efectos en un contexto de extrema desconfianza, muchas veces injustificada.

Codelco debe administrarse de manera análoga a las empresas que son su competencia en el sector privado, por lo que no se le pueden exigir adoptar estándares de servicio público que pondrían en serio riesgo su estabilidad financiera y su desarrollo y proyección futura.

Uno de esos puntos clave tiene que ver con la plena vigencia que tiene el Código Laboral y la negociación colectiva a la hora de establecer todas las relaciones laborales en Codelco, así como la vigencia de la ley de Sociedades Anónimas, para el caso de las obligaciones que pesan sobre directores y máximos ejecutivos. ¿Qué reales intenciones hay detrás de este intento de transformar a Codelco en una enorme maquinaria burocrática en vez de una empresa moderna y ágil?

Esta ofensiva recuerda –curiosamente- a aquellas intentonas que lideraron los sectores más neoliberales para privatizar la empresa. Sí, hay que hacer buen uso de los mecanismos de gestión y de los recursos de la empresa, pero sin trastocar lo que es la naturaleza jurídica y el rol que le cabe a Codelco en el desarrollo de Chile. Más aún cuando la actual administración ha hecho transformaciones inéditas en materia de gestión interna, política de proveedores, transparencia e inhabilidades.

A Codelco hay que defenderla, cuidarla, fortalecerla, no desestabilizarla ni sembrar la duda respecto de un supuesto despilfarro de recursos del cual hasta ahora no hay ningún respaldo ni evidencia. Por supuesto que el deber de las autoridades de la empresa sigue

siendo administrar la compañía con celo y con eficiencia para seguir con el plan de reducción de costos.

Codelco representa un orgullo para Chile, para su gente y un pilar esencial para el desarrollo y crecimiento de nuestra economía. A veces, el tiempo de campañas hace que cualquier cosa sea usada para lograr algo de figuración y mostrarse como paladines de la rectitud; pero por favor, con Codelco no se juega.

Contumacia en Palacio Quemado

Una imagen de no creer, militares y agentes aduaneros bolivianos fueron detenidos por carabineros en territorio chileno, se investiga su participación en el robo de camiones, mientras permanecen detenidos.

Situación no sólo preocupante, sino insólita, considerando que el Gobierno paceño - lejos de mostrar diligencia en condenar lo que a todas luces es un delito de sus conciudadanos en territorio chileno - enaltece la acción del grupo que violenta nuestra frontera y además insulta a nuestras autoridades. Actitud de Morales y su ministro de Defensa Nacional justo en la víspera de otro hito en la demanda interpuesta por el gobierno para lograr soberanía marítima.

Qué insensatez de parte de las autoridades bolivianas que vuelven a construir un hecho político desde lo que parece un show mediático, que ahora es policial, utilizando uniformados y civiles. Una estrategia en escalada.

Ahora buscan llevar el caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acusan secuestro e indican que es otra agresión de Chile, cuando lo único que está acreditado es que estas personas fueron detenidas en nuestro territorio ingresando de manera ilegal, agrediendo a chilenos para robar mercadería.

Ya estamos algo habituados a esta seguidilla de declaraciones pintorescas de nuestro vecino. Pero este caso tiene una particular complicación, ya que las consecuencias de las acciones de los agentes bolivianos son sancionadas en la ley chilena como delito. Esto ahora no sólo es un tema diplomático, sino que también judicial.

Es decir, si son encontrados culpables, estas personas no podrán abandonar Chile sin cumplir una condena mayor. Esto conlleva un aumento en la tensión diplomática con la Paz, pero lo que no puede ocurrir es que la insensatez incesante de Bolivia, nos lleve a incumplir lo que dice nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué podríamos hacer excepciones en el procesamiento penal de gente que cometió delitos tan graves al interior de nuestras fronteras?

Imposible. Primero, porque la ley lo impide, y segundo, porque la paciencia ya se agotó con Bolivia.

Ahora queda dejar que la justicia haga su trabajo sin presiones de ningún tipo. Es entendible que esto generará más roces con Evo Morales y que habrá nuevas declaraciones destempladas, pero la Fiscalía debe terminar su trabajo y los Tribunales deben fallar.

Solo luego que las instituciones hagan su tarea, podremos evaluar cómo se cumplen las eventuales condenas y si procede o no, tomar otras medidas como la expulsión. Por de pronto, hay que garantizar tranquilidad a las instituciones para que se realice un juicio

imparcial, transparente y ajustado a derecho, pero sin que las declaraciones de dirigentes irresponsables del otro lado de la frontera, inhiban la labor de nuestro aparato judicial.

Lamentablemente Morales insiste en una estrategia que sobrepasa la demanda que interpuso para reivindicar su causa por mar boliviano. Y lo hace a un alto precio, avalando un hecho delictual en soberanía chilena, no conforme con ello, pasa a llevar el Estado de Derecho.

Es evidente su incongruencia, buscando conflicto con Chile para legitimar sus propósitos de seguir en el poder. Insisto, lamentable, porque no sólo daña la relación de dos pueblos y países vecinos, sino que daña y separa a la región y ese sueño bolivariano que pregona y del cual alimenta su propia causa a nivel internacional, lo que terminará aislando al pueblo boliviano y por muy poco a cambio.

Cuando la evidencia no es suficiente

“Durante los últimos meses, la actividad económica local ha evolucionado acorde con lo previsto. El mayor impulso externo se ha ido consolidando, con condiciones financieras que permanecen favorables, socios comerciales en promedio algo más dinámicos y mejores términos de intercambio”. Con esta frase se inicia el Informe de Política Monetaria del Banco Central, dando cuenta de que la economía chilena está en firme recuperación, hecho que se corrobora con varios indicadores independientes y objetivos que se han dado a conocer.

El Índice de Producción Industria creció 5% en 12 meses, con un extraordinario desempeño del Índice de Producción Minera de un 10,5%. El crecimiento interanual del cobre alcanzó el 13% y en general, la minería metálica lo hizo 10,8% en 12 meses. También creció la producción de Electricidad, Gas y Agua, que anotó alzas en cada una de las categorías.

El Comercio había mostrado en agosto de este año un alza de 4,9% en 12 meses y las ventas de supermercado anotaron alza de 2,4% también en un año. El comercio al por menor en ese mismo mes mostraba un alza de un 6%, donde las ventas de automóviles han sido la sorpresa con un aumento de casi un 40%.

Para no agobiar con cifras, el lector puede consultar las ganancias del retail, las AFP, las Isapres y la Banca. Se llevará una sorpresa: todas han aumentado. Bueno, ¿y el candidato de la derecha sigue diciendo que el país está estancado?

¿Qué pasa cuando las evidencias no son suficientes? A pesar de que las cifras, las estadísticas y los números muestran una realidad que no tiene nada que ver con lo que la derecha acusa, el candidato insiste en afirmaciones falsas que los medios reproducen sin ningún cuestionamiento.

No está relacionado con la economía, pero cuando Piñera deslizó la temeraria e irresponsable tesis del fraude electoral en la primera vuelta, lo que vimos fue una reacción contundente de las fuerzas democráticas, pero una parquedad de algunos medios que debe ser cuestionada. El titular que vimos fue “Piñera denuncia fraude” cuando debió ser “Piñera, sin evidencia, denuncia fraude”.

Algo parecido ocurre en el tema del crecimiento y la marcha de la economía, donde me atrevo a decir que el titular es “Piñera, a pesar de las evidencias, insiste en que la economía está mal y que sólo crece por la expectativa de ser electo”.

Todo falso. El presidente del BC señaló que la recuperación del PIB “se apoya en un escenario externo favorable, el fin del ajuste de la inversión minera y habitacional, la ausencia de desbalances macroeconómicos relevantes y una política monetaria claramente expansiva”.

Además, el ente emisor fue enfático en señalar que estas proyecciones no toman en cuenta el factor político, desechando por lejos la tesis piñerista de que la recuperación le es adjudicable. Chile está mejor por el esfuerzo y el trabajo del país en conjunto con las autoridades.

Por supuesto que el crecimiento no es el que todos quisiéramos, pero es loable que una economía tan basada en el modelo extractivo y tan dependiente de la volatilidad de los commodities, haya seguido creciendo pese al mal ciclo económico. Queremos más y eso requiere un cambio profundo de modelo, de morada y de compromiso.

Se ha dicho en varios tonos y en distintos momentos, pero si no somos capaces de dar valor agregado a nuestras exportaciones o si no vamos a diversificar nuestro producto, no vamos a llegar muy lejos. Y cuando se agote el cobre o alguna otra economía le encuentre un sustituto más eficiente y menos contaminante, ¿qué vamos a hacer?

Ese es el tipo de debate y liderazgo que Chile necesita. El crecimiento va a seguir siendo nuestro principal dolor de cabeza si no resolvemos la ecuación de cómo obtener más con cada vez menos. Y ahí está la evidencia ante nuestros ojos: hay recuperación, esa recuperación es magra y ahí está nuestra matriz productiva y nuestros índices de capital humano. Es cosa de tomarlos, analizarlos y empezar a planear algo que esté más allá de los eslóganes facilistas de la campaña.

Cuando sí corre la garantía

Para ejercer un derecho no hay que pedir permiso. Así lo dijo el ministro de Economía al aprobarse el proyecto de ley que fortalece las facultades del Sernac, iniciativa que fue una de los compromisos del Gobierno y que finalmente pudimos sacar adelante, pese a la oposición de muchos.

Es difícil entender que haya tanta resistencia a la idea de cuidar, respetar y defender los derechos de los consumidores, de las personas que tienen pocas capacidades de enfrentar a gigantes del retail o a grandes conglomerados económicos.

Hasta ahora, lo que ocurre es que las personas sólo dependen de la buena voluntad de las empresas para intentar obtener alguna reparación o siquiera una respuesta ante un incumplimiento, falla o negligencia. Es una relación absolutamente desequilibrada y hasta abusiva, pero para algunos, eso debe ser así.

Al entrar en vigencia, la protección de los derechos de los consumidores estará garantizada por un ente regulador de verdad. En especial en el área del comercio que es donde se produce el mayor número de los reclamos. Hasta ahora, casi el 90% de los reclamos contra las empresas ni siquiera es respondido. Ese es uno de los cambios.

Costó aprobar esta legislación porque sigue la oposición a que se establecieran regulaciones mínimas, aduciendo que con ello hay riesgo para la permanencia de los pequeños comercios. Nada más falso. Si bien se aumentaron las multas, es el juez quien decidirá sus montos y alcance, dependiendo de la condición del proveedor, ya que es evidente que no es lo mismo que responda un pequeño negocio versus un gigante del retail.

Hay avances notables y que tienen que ver con la posibilidad de entablar demandas colectivas reales y sumar a esas acciones, las que se pudieran deducir de las demandas personales, de modo de buscar reparación material y moral a los daños que se produzcan a los consumidores cuando hay fallas o faltas de servicios como los que se vivieron con los cortes de electricidad.

Es entendible que las empresas se hayan opuesto tan tenazmente, es menos entendible que la oposición siempre se ponga del lado de las empresas y no de la gente en algunas de estas legislaciones. Pero lo relevante es que se ha cumplido un compromiso y hemos dado un paso importante para que las compañías y sectores económicos cumplan sus con responsabilidades.

Por lo demás, si las empresas hacen sus negocios con responsabilidad y respetando los derechos de los consumidores, entonces jamás serán requeridas por el Sernac.

Y por último, a quienes defiende el modelo social de mercado, les debe quedar claro que siempre, el cliente (más que la razón), tiene derechos.

De París a Santa Olga

El desolador panorama que han ido dejando los incendios forestales que afectan a nuestro país, son resultado de una combinación fatal: negligencia inexcusable de personas y empresas, intencionalidad en algunos casos, una sequía prolongada, ausencia de mecanismos de control y planificación de este tipo de tragedias y una institucionalidad forestal completamente sobrepasada. Como telón de fondo de todo esto, está el proceso de cambio climático mundial al que no siempre se le toma en serio.

Chile es uno de los países que menos aportan en materia de emisión de gases de efecto invernadero, pero es uno de los que sufre las mayores consecuencias. Las estimaciones de los paneles de expertos y de las Naciones Unidas sobre el tema, no son alentadoras para Chile. Ya tenemos los efectos de sequías prolongadas, incendios y cambios paulatinos en los climas locales, lo que inevitablemente tendrá un efecto económico irreversible.

El Congreso de Chile ya ratificó el Acuerdo de París sobre cambio climático. Este instrumento multilateral busca el compromiso de los países para mantener el aumento de la temperatura media global muy por debajo de los 2°C, y continuar extremando los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5°C respecto de los niveles que se tenían en la era preindustrial.

Como país, ya presentamos lo que será nuestra contribución en el periodo 2020-2030, y que es reducir en un 30% las emisiones por unidad PIB. Si contamos con ayuda internacional, incluso podríamos llegar al 45%. Entre otras cosas, la más llamativa es la intención de reforestar 100 mil hectáreas con bosque nativo principalmente.

A esto se suma la agenda de energía que nos planteamos en este gobierno y que apunta a un plan de largo plazo para dotar a Chile de energía cada vez más limpia y menos dependiente de combustibles fósiles, inestables en el precio y muy contaminantes.

Es así que este debate que se dio de manera muy intensa en París, termina aplicándose en Vichuquén, Santa Olga, Curepto, Navidad, Los Vilos y tantas otras localidades afectadas por estos incendios. Es cierto que el origen de las llamas deben ser investigadas para sancionar a los responsables, pero el tema de fondo y la causa última sigue ahí: el cambio climático.

Chile ha hecho lo suyo y ha comprometido su esfuerzo en esta tarea mundial, pero lo cierto es que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la poca voluntad de los países más contaminantes del Asia, ponen en duda que logremos las metas en los plazos establecidos. En rigor, contra ese panorama hay poco que podamos hacer.

La clave parece estar en el reordenamiento de la economía nacional, buscar nuevos focos de desarrollo, cambiar nuestra matriz productiva, ajustar nuestra agricultura y nuestra matriz energética, para intentar que los efectos inevitables, sean menos costosos para nuestra economía y para nuestras familias. No podemos detener solos el calentamiento global, pero podemos hacer ajustes que eviten este tipo de tragedias como las que hemos visto. Y eso sí que está en nuestras manos.

El verdadero desafío

Difícil no recoger el guante ante la multitudinaria marcha pidiendo terminar con las AFP como sistema de ahorro previsional. La imagen instaló en la calle el diagnóstico que parte de la clase política hace años alerta respecto que el sistema de AFP fracasó, lo que debiera emplazarnos a sincerar la voluntad política de hacer cambios.

Fracasó básicamente porque la promesa de la derecha económica que planteó este sistema en los años 80, era que las tasas de reemplazo estarían alrededor del 70 por ciento, cuando la realidad es que los jubilados actualmente están recibiendo menos del 30 % de sus sueldos, una vez que pasan a retiro programado.

Inexplicable entonces la postura de quienes no ven la real necesidad de superar este sistema que profundiza los niveles de desigualdad ayudado por la inestabilidad laboral y los bajos niveles de ingreso.

Algo se avanzó al establecer el sistema de pensiones básicas solidaria que permitió que alrededor de un millón 300 mil personas que no tenían posibilidad de recibir algún tipo de pensión, lo hicieran. Ello con alto costo que asumió el Estado de 2.500 millones de dólares. No es suficiente sin duda.

Desde el Partido Demócrata Cristiana se hizo una propuesta que hoy se retoma: que los cotizantes pudieran retirar una parte de sus ahorros para destinarlo a la compra de vivienda y solventar en algo lo indigno del sistema, otorgando la oportunidad de asegurar un techo una vez ya jubilado. Todo parte de la búsqueda de alternativas, porque el tema previsional es el mayor desafío como sociedad y no podemos hacernos los lesos.

Entonces, surgen soluciones a este sistema que no incentiva finalmente la responsabilidad del ahorro voluntario y descansa en la exclusiva responsabilidad del trabajador, sin ningún rol de la empresa, de ahí la necesidad de retomar el sistema tripartito, la solución debe ser mixta con mayor aporte de los propios ahorrantes, de los empleadores y del Estado a través de este mecanismo. Por cierto, además mayor fiscalización y sanciones, para castigar a quienes hacen uso indebido de los fondos.

Mientras, se postula el retorno al sistema de reparto cuya experiencia falló al permitir que los ahorros individuales pasaran a ser colectivos, quedando en la nebulosa el tipo de jubilación que le corresponde a cada cual y marcando un régimen injusto al alero de la exigencias que a muchos dejaron sin pensión.

Si bien la creación de una AFP estatal va a generar una mayor competencia en el sector, con tasas de rentabilidad de fondos de pensiones un tanto más altas, y tendiente a corregir el sistema de cálculo para las pensiones. Y ante quienes proponen barrer con el sistema de raíz, me pregunto, ¿tendrán estos fondos el mismo valor al momento de liquidarlos ante un colapso absoluto del sistema de AFP?

Entonces, me uno a las palabras respecto que no parece haber una solución mágica, o “una bala de plata” para las AFP. Pero ojo, que esto no significa que el sistema tenga que quedarse tal como está. Ello es inviable.

Y así lo hemos propuesto y exigido que el sistema sea evaluado y reestructurado, pero no a costa de la pobreza de la gente ni del actuar irresponsable de grupos que por mucho que griten, no necesariamente tienen la verdad.

Surge entonces la duda respecto a la oportunidad que gatilla la marcha: ¿La idea de algunos de instalar un discurso populista?; ó ¿la concepción real de que la previsión social es un derecho y no netamente un negocio?

Si este último es el punto neurálgico de la manifestación ciudadana, enhorabuena! Hagámonos cargo, en serio, como lo hemos hecho con las reformas impulsadas a raíz de la demanda recogida cuando planteamos ser gobierno como Nueva Mayoría.

Doble estándar

La prohibición de ingreso que decretó el régimen de Cuba contra la camarada Mariana Aylwin es aún incomprensible por parte del régimen de Castro, ya que atenta contra la relación con nuestro país.

Y es que el viaje tenía por objeto participar de un homenaje al ex Presidente Patricio Aylwin, una de las figuras políticas más respetadas por Chile en el proceso de retorno a la democracia, haciendo más condenable esta agresión contra una persona que ejerció como parlamentaria y como ministra del Estado de Chile.

Pero lo más preocupante de todo esto, es la reacción que tuvo el Partido Comunista chileno que en vez de ponerse del lado de los demócratas, en vez de ponerse del lado de su propio Gobierno que condenó este hecho, se puso del lado de un régimen dictatorial.

Y no es sólo Cuba, sino que frecuentemente tenemos que ver este tipo de dudas profundas respecto del valor de la democracia en otros gobiernos de su signo político con los que al parecer siente un compromiso ideológico más profundo que impide recordar que el respeto a la democracia y los Derechos Humanos no admite matices.

La disensión en política es una garantía fundamental de las personas, más aun en un mundo global, libre y democrático como al que aspiramos la mayoría de los países. Sin embargo, eso no se ve en Cuba.

Quisiéramos que ese entusiasmo y esa lealtad estuvieran más bien con el gobierno de la Presidenta Bachelet y con los partidos de la Nueva Mayoría, que es el conglomerado político donde hoy el PC tiene su domicilio. Por el contrario, los comunistas de Chile se hicieron eco de declaraciones destempladas del régimen castrista que acusó a Mariana Aylwin de complotar contra el orden interno de Cuba.

Esta situación constituye un aliciente para todos los sectores que quieren un debilitamiento de la Nueva Mayoría como proyecto político.

¡Cuesta entender que el Partido Comunista chileno siga apoyando una dictadura tan retrógrada y abusadora de los derechos humanos! ¡Ellos, que sufrieron directamente los embates de una dictadura cruel como la que sufrimos en Chile! ¡Quién entiende!

Cuando se es demócrata, se es siempre demócrata. Lo que hizo Cuba fue grave y no se puede bajar el perfil a esta situación y si eso sigue sin ser entendido por el PC, nos obliga a elevar el tono de los reclamos y de las demandas, porque la defensa de la democracia y los derechos de las personas, son un tema irrenunciable para la DC.

Dominga, que las instituciones funcionen

Cuando se afirma que en Chile las instituciones funcionan, no es un cliché. Qué relevante es que ello se aplique y respete. El ejemplo último de las consecuencias de obviar aquello es lo sucedido con el proyecto Dominga, antes y después del rechazo por la Comisión de Evaluación Ambiental, formada por 12 organismos técnicos, incluidos Seremis y el Intendente de la Región de Coquimbo.

Es cierto, el proyecto a emplazarse en la comuna de La Higuera genera posturas encontradas, como en cada decisión de esta naturaleza y como es de esperar.

Pero el desarrollo de la votación fue conocido por todos, lo que incluyó acceso a la prensa, y nos permitió seguirla en vivo y en directo, conociendo los argumentos de las autoridades locales, una a una. No se trató de una decisión entre cuatro paredes, por cierto. No obstante aquello, se buscó crear suspicacias cuando el resultado de esta sesión no nos dejó satisfechos.

Ello sólo consigue pasar a llevar el proceso que sigue su curso, terceras instancias que debieran decidir ahora - esperamos en los tiempos estipulado s- el futuro de este proyecto, con tal de no ahondar aún más en la incertidumbre respecto del funcionamiento de la institucionalidad ambiental, las garantías en inversión y la seriedad del proceso.

Más allá de los resultados de la votación, sin duda que insistir en acusaciones de presiones políticas, algunas sin mayores fundamentos, es la peor manera de enfrentar este tema, que no necesita mayor dilatación.

Necesitamos dar certeza jurídica de que en Chile se cumplen las leyes y que los proyectos se pueden sacar adelante si es que cumplen con los mínimos estándares ambientales exigidos. Dominga podría generar empleo, no sólo en la comuna de La Higuera, sino que en Coquimbo, La Serena, en Ovalle, en Illapel y no podemos desperdiciar esa opción, condenando el proyecto a priori.

El rechazo en la Comisión de Evaluación Regional es sólo un paso dentro de lo contemplado en la institucionalidad ambiental y ahora le corresponde al comité de ministros pronunciarse respecto al fallo.

Las implicancias políticas que ha tenido este caso, como la extraña participación del ex Presidente Piñera, las supuestas y poco creíbles presiones del Gobierno o las amenazas de parlamentarios a los funcionarios que están mandatados a ejercer su rol, hay que dejarlas atrás y enterrarlas en la arena política. Lo que se debate en la autorización de minera Dominga tiene que ver con criterios técnicos que deben ser evaluados en su mérito.

Por cierto que el cuidado al ecosistema del lugar se debe resguardar, es un tesoro invaluable, pero este proyecto no se acerca a las áreas de influencia de las zonas protegidas por lo que se debe reevaluar y autorizar las faenas que no tienen impacto en la vida que llevan las especies de la reserva situada a kilómetros.

Por cierto que la región de Coquimbo necesita desarrollo, empleo y dinamismo en su economía. También necesita cuidar sus tesoros naturales, reserva única en el mundo. Lograr el equilibrio adecuado es parte de la responsabilidad de las mismas autoridades que formamos parte de la institucionalidad, no contaminemos el proceso con visiones a corto plazo.

El anhelo del Túnel Agua Negra

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció esta semana que las proyecciones de crecimiento de la economía chilena para este año volvían a caer, de 2,1% a sólo un 1,5%. El mismo organismo prevé que para toda América Latina y el Caribe habrá una contracción económica de un 0,5% en 2016, completándose dos años de leves caídas.

No es un misterio que la economía no va bien y que la constante caída en el precio del cobre está poniéndonos en una situación fiscal muy incómoda, que nos obliga a redoblar esfuerzos y a ser mucho más creativos e innovadores para retomar la senda del crecimiento y el empleo.

El comercio y la integración son dos caras de una moneda que puede ayudarnos a enfrentar de mejor manera este mal momento. La posibilidad de retomar el proyecto de corredor oceánico y mejorar el paso de Agua Negra en nuestra región, es clave para generar mecanismos permanentes de integración y facilitación del comercio.

La región de Coquimbo es un polo de turismo y de exportaciones que se vería inmensamente favorecido si hay un incremento del tránsito por este paso. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) –a través de su embajador en Chile Koldo Echebarría, señaló su interés en financiar el proyecto de Túnel Agua Negra, durante este año.

Si se concreta el ofrecimiento del BID de transformarse en un ente facilitador de las medidas técnicas que se requieren para poner en marcha esta iniciativa, se trata de una de las medidas de incentivo a la reactivación más relevantes para nuestra región en años. Tanto el Gobierno regional como el CORE han desplegado una intensa agenda en este ámbito y no están errados, ya que una mejor conectividad internacional, redundará en más turistas, más comercio y más creación de valor para nuestra economía regional.

Estamos hablando de conectar nuestros caminos, nuestros campos, nuestras playas y nuestros servicios con una población de millones de habitantes de Brasil, Argentina,

Paraguay y Uruguay. Se trata de oportunidades de consolidación de nuestra industria de servicios y de la opción de abrir mejores condiciones para el emprendimiento.

Ahora falta que las instituciones del Estado se pongan a tono y sintonicen de manera expedita y eficiente este esfuerzo internacional de financiamiento e integración, para que tengamos en el futuro no muy lejano uno de los pasos fronterizos más modernos e integradores de Chile.

El Auge de la salud en Chile

El Plan Auge debe ser una de las políticas públicas más aplaudidas y queridas en todo el país. Fue fruto de la visión progresista que se tuvo durante el gobierno del Presidente Lagos y que ha ido profundizándose hasta el día de hoy, permitiendo literalmente salvar cientos de miles de vidas que antes se perdían por falta de recursos o por trámites administrativos.

Este año, el Gobierno emitió un decreto para incluir mejoras a 10 problemas de salud: hepatitis C, VIH, disrafias espinales, accidente cerebro vascular en mayores de 15 años, ruptura de aneurismas cerebrales, Parkinson, enfermedad renal crónica, depresión en mayores de 15, hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro y tratamiento de hipoacusia en menores de 4 años. Las mejoras implican un presupuesto de 30 mil millones de pesos para beneficiar de manera directa a unas 70 mil personas.

Los nuevos recursos permitirán mejores coberturas para tratamientos, incorporar nuevos tratamientos y procedimientos curativos que eviten la mortalidad de las personas con estas enfermedades.

Esto no es casualidad, ya que a pesar de todas las cosas que se dicen en tiempos de campaña y de innumerables críticas sin fundamentos, Chile ha experimentado avances extraordinarios en materia de salud pública. De acuerdo al Foro Económico Mundial, Chile ocupa el puesto número 8 en el mundo de los países más eficientes en el cuidado de la salud. El ranking es encabezado por Hong Kong, Singapur, España, Corea del Sur, Japón, Italia, Israel, Chile, Emiratos y Australia.

En nuestra región hemos visto mejoras significativas en infraestructura, lo que va de mano con políticas públicas que tienen como objetivo contar con una ciudadanía más sana y con más derechos en materia de acceso a la salud. Chile puede dar saltos aún más significativos, sin duda, pero al menos debemos ser capaces de reconocer que se ha hecho mucho y que estamos mejor que hace unos años.

De seguro va a escuchar por estos días que la salud está mal y que otros han hecho más, pero eso no es verdad. El tema es definir qué queremos para el futuro: discursos y parafernalia o trabajo y mejoramientos concretos. Es eso lo que está en juego y la gente sabrá valorar estos logros y entender que la salud –al igual que otras áreas- no es un negocio, sino un derecho.

El cliente es rey

Para ejercer derechos no hay que pedir ni favor ni menos permiso. Así lo dijo el ministro de Economía al aprobarse el proyecto de ley que fortalece las facultades del Sernac, iniciativa que fue una de las promesas del Gobierno y que finalmente pudimos sacar adelante, pese a la oposición de muchos.

Es difícil entender que haya tanta resistencia a la idea de cuidar, respetar y defender los derechos de los consumidores, de las personas que tienen pocas capacidades de enfrentar a gigantes del retail o a grandes conglomerados económicos.

Hasta ahora, lo que ocurre es que las personas sólo dependen de la buena voluntad de las empresas para intentar obtener alguna reparación o siquiera una respuesta ante un incumplimiento, falla o negligencia. Es una relación absolutamente desequilibrada y hasta abusiva, pero para algunos, eso debe ser así.

Lo que hemos hecho con este proyecto es que la protección de los derechos de los consumidores esté garantizada por un ente regulador de verdad. En especial en el área del comercio que es donde se produce el mayor número de los reclamos. Hasta ahora, casi el 90% de los reclamos contra las empresas ni siquiera es respondido. Eso va a cambiar desde la promulgación de la ley.

Costó aprobar esta legislación porque ha habido mucha presión de retail y los mayoristas por oponerse a que se establecieran regulaciones mínimas, aduciendo que con ello se ponía en riesgo la permanencia de los pequeños comercios. Nada más falso. Si bien se aumentaron las multas, es el juez quien decidirá sus montos y alcance, dependiendo de la condición del proveedor, ya que es evidente que no es lo mismo que responda un pequeño negocio versus un gigante del retail.

Hay avances notables y que tiene que ver con la posibilidad de entablar demandas colectivas reales y sumar a esas acciones, las que se pudieran deducir de las demandas personales, de modo de buscar reparación material y moral a los daños que se produzcan

a los consumidores cuando hay fallas o faltas deservicios como los que se vivieron con los cortes de electricidad.

Es entendible que las empresas se hayan opuesto tan tenazmente, es menos entendible que la oposición siempre se ponga del lado de las empresas y no de la gente en algunas de estas legislaciones. Pero lo relevante es que se ha cumplido un compromiso y hemos dado un paso importante para que las compañías y sectores económicos cumplan sus con responsabilidades.

Por lo demás, quien nada malo hace, nada debe temer. Si las empresas hacen sus negocios con responsabilidad y respetando los derechos de los consumidores, entonces jamás serán requeridas por el Sernac. Y por último, a quienes defienden el modelo social de mercado, les debe quedar más claro que nadie que siempre, el cliente es el rey.

El derecho universal a opinar

No podemos dejar pasar este nuevo hito hacia el perfeccionamiento de la democracia, luego que se aprobara con 110 votos a favor y una abstención el proyecto que permite a los chilenos que viven en el extranjero ser parte de las elecciones de autoridades. De esta forma, la iniciativa quedó lista para ser promulgada y entrará en vigencia en las próximas elecciones de 2017.

Y es que ha sido un anhelo de muchísimos años, desde el fin de la dictadura, el que los compatriotas que residen en el exterior participen de manera activa en las decisiones electorales representativas de nuestro país.

Varias batallas ganadas: primero, contra los prejuicios; segundo, contra la intransigencia de algunos, y tercero, contra aquellos que, legítimamente, estimaban inconveniente que también tomaran decisiones electorales quienes no vivían en nuestro país, aquellos que no estaban en el día a día, lo que hacía suponer desconexión con Chile.

Razones con tintes de excusas, porque digamos las cosas como son: el prejuicio tenía mucho que ver con que la cantidad de chilenos que vivían en el extranjero producto de la dictadura era superior entre un signo político y otro, lo que motivaba un perjuicio electoral.

Esa es parte de la historia de este proyecto, que ha evolucionado a medida que las condiciones y la situación fueron cambiando y avanzando, y ya no se justifica la postergación bajo aquella premisa, ni hacer diferencias entre chilenos y su derecho a opinar.

¿Quiénes son los chilenos que se encuentran fuera? Se trata de personas guiadas por razones de trabajo, estudio, culturales o sociales. Constituyen nuevas generaciones. El país

se ha abierto al mundo. Nuestros sectores económicos están invirtiendo en el exterior. El desarrollo de negocios hace posible el movimiento de gente que va a representarnos o a desarrollar tareas profesionales en otros ámbitos, y juzgo lógico y razonable que, con uno, dos, tres, cinco años en un lugar, pueda participar en estos procesos.

Me permito destacar del texto que el proceso eleccionario se llevará adelante de la manera tradicional y en forma similar a como se efectúa dentro del territorio nacional, buscando mantener la tradición de la materialidad del voto; es decir, se vota con papeletas, en mesas dispuestas para el efecto y con control ciudadano del proceso.

Además, las elecciones se desarrollarán el mismo día y dentro de los horarios que para cada país establezca el Consejo Directivo del Servicio Electoral.

Y se regula el cambio de domicilio. Este punto es relevante, porque insisto en el recuerdo que a partir de los años 90 existía el prejuicio de que quienes vivían afuera tenían solo una tendencia. Ello, indudablemente, ha ido cambiando de manera sustancial con la globalización.

Han sido varios los cambios en el texto y, por supuesto, cabe agradecer el cambio de postura de algunos colegas que hasta hace algunos años se oponían tenazmente a la iniciativa, lo que estimo bueno en un momento en que el país necesita una mayor participación electoral.

Creo que el debate que se está llevando a cabo en la opinión pública respecto de si el voto es voluntario, también presenta relevancia en el caso de nuestros compatriotas que viven en el extranjero.

Pero para llegar a esta unanimidad hemos recorrido un largo trecho, convenciéndose el Parlamento de un punto tan crucial como determinar la igualdad a través del voto. Es cierto, ha sido un proceso largo, con pasos previos como la reforma constitucional efectuada por la ley N° 20.748 donde se reconoció a los ciudadanos chilenos, que cuenten

con derecho a sufragio y se encuentren en el extranjero, la posibilidad de votar desde el exterior en elecciones presidenciales, primarias presidenciales y plebiscitos nacionales.

Y vamos a tener que seguir avanzando, porque a mi juicio el ideal es que el sufragio se pueda expresar -espero que en algún momento lo logremos- en los comicios locales, regionales y parlamentarios. Porque es lo natural, no podemos dejar truncada esta evolución.

Este es un momento significativo para la vida democrática de Chile, y se repone un derecho legítimo, que deberíamos haber implementado ya hace varios años.

El futuro de las pensiones en sus manos

En Chile, el promedio de las pensiones que paga el sistema de AFP bordea apenas los 200 mil pesos. Es tal la mala evaluación que tiene esta industria, que cada vez que se hace una encuesta para ver el grado de adhesión que hay hacia las administradoras de fondos de pensiones, éstas son evaluadas negativamente y gana espacio la idea de terminar con este sistema para reemplazarlo por otro.

Es por eso que el video que circuló esta semana donde se muestra a ejecutivos de una de esas AFP, en una fiesta lujosa en un yate, con alcohol y comida a destajo, no hace sino ahondar la indignación de la gente.

La Ministra del Trabajo de inmediato solicitó que la Superintendencia de Pensiones oficiara a todas las administradoras, para recordarles algo muy básico y esencial: las comisiones que pagan los trabajadores de Chile son para bien administrar los fondos de jubilación; no para pagar fiestas, ni menos para publicitar tales fiestas en la cara de gente que recibe pensiones indignas.

Las cotizaciones son para administrar los fondos y hacerlos rendir lo más que se pueda, para que esos fondos —que de paso alimentan los succulentos bonos de los altos ejecutivos— entreguen un mínimo de sustento a la familia de quienes dieron su vida trabajando.

Hemos dicho hasta al cansancio que la ciudadanía tiene serios cuestionamientos a la legitimidad y la gestión de las AFP. Es por eso que el Gobierno determinó enviar una reforma que crea un Nuevo Ahorro Colectivo que tendrá un carácter público y que estará

centrado en una mirada solidaria que revierta la mala evaluación que pesa sobre la jubilación privada.

Para nosotros, es clave y crucial que en tiempos de campaña, se debata este tipo de cosas y que los distintos proyectos muestren a la ciudadanía su mirada. Para el mundo progresista, las AFP no están cumpliendo su propósito y es por eso que ha apoyado en líneas gruesas esta iniciativa. Al otro lado, la cosa no es tan clara. De hecho, el que fuera ministro del Trabajo del gobierno anterior, es el presidente de la cuestionada AFP. En la práctica, tras nuestros actos hay visiones muy distintas de lo que entendemos que debe ser el sistema previsional. Para unos, es un negocio más.

La pregunta que surgirá tras las elecciones es cuál será la relación que tendrá el futuro Gobierno con las AFP y otras industrias que son percibidas como abusivas por la ciudadanía. Eso, ahora depende de usted.

Gobierno dice no a Dominga ¿Y ahora qué?

Tras la negativa del Gobierno a la concreción del proyecto minero Dominga en la región de Coquimbo, se hizo presente la necesidad de un plan gubernamental para revertir el más de 10% de cesantía que hay en la comuna de La Higuera y el 7,8% de desocupación regional, la segunda más alta del país.

Suponemos que el Comité de Ministros tuvo a la vista dentro de los antecedentes, los potenciales puestos de empleo que se podrían producir al materializarse este proyecto de respetar, claro está, la normativa de impacto ambiental.

Y es que ante la premura, que quedó en evidencia, de cumplir con el paso siguiente en este proceso, no somos pocos los que creemos que la institucionalidad medioambiental no está siendo suficientemente validada al tomar decisiones que no se explican desde el punto de vista técnico. Si Dominga tenía la aprobación del organismo que certifica la viabilidad medioambiental de la iniciativa, que es el SEA, entonces no se entiende que el comité de ministros tenga una opinión diametralmente opuesta.

Algo no cuadra. Pero más allá de si es Dominga, otros proyectos mineros u otros proyectos energéticos, lo que tenemos que resolver es cómo permitimos que las regiones más afectadas por problemas de desempleo y crecimiento, puedan optar también a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

La gente de la región de Coquimbo, debe hacer grandes esfuerzos por permanecer en sus pueblos y localidades, muchas veces con problemas estructurales de sequía o de poco acceso a elementos tan fundamentales como agua potable para consumo humano.

Si no es una sequía, son lluvias catastróficas. Si no es la falta de servicios, son los problemas de conectividad. La calidad de vida de los habitantes de la región, salvo la Serena, está por debajo de la media nacional y eso se sigue agravando cuando no hay empleo, no hay desarrollo y no hay incentivos a la inversión.

Las reglas deben ser claras y si no lo están, hay que aclararlas más. En lo personal no me interesa el proyecto A o B, lo que me preocupa es que gente de mi región - en la que nací y crecí - tenga las mismas oportunidades de surgir que las que viven en otros lugares de Chile que tienen empleo y desarrollo. Es fácil oponerse a todo desde la comodidad de una casa con todos los servicios que trae la modernidad, pero la vida se ve distinta desde territorios en donde no hay empleo, poca conectividad o agua potable incluso.

Ningún proyecto de desarrollo industrial va a tener impacto cero y es entendible que existan detractores y gente a favor, pero para eso están los organismos encargados de certificar desde una mirada técnica, si se cumplen las exigencias de la ley en materia de impacto ambiental. Pero es irracional pensar que el crecimiento es incompatible con el cuidado del entorno, pues eso hipoteca desde ya el desarrollo, no sólo de las comunas de la región de Coquimbo, sino que el del país entero.

El muro no es la verdadera amenaza

Por estos días, Chile ha sido destacado –junto con Argentina- como uno de los países que mejor ha enfrentado desde el punto de vista de la ética, la creciente amenaza del racismo, la xenofobia y el proteccionismo que se está instalando en el Estado Unidos desde la llegada el Presidente Trump. Eso a colación del gesto que la Presidenta Bachelet y el Presidente Macri hicieran al conmemorarse la Batalla de Chacabuco, una operación militar conjunta entre chilenos y argentinos que tuvo como resultado la independencia total de nuestro país.

Fue un hito noble y hermanable: dos países, dos pueblos se unieron en pos de la libertad, el respeto a la autodeterminación de las nacientes repúblicas en contra del absolutismo. En general, Latinoamérica está dando cuenta de esfuerzos por aumentar los niveles de integración y de cooperación, lo que va justamente con sentido contrario de lo que vemos en las declaraciones y primeras acciones de la nueva administración norteamericana. Pero no son los únicos.

Vemos con preocupación cómo las fuerzas de extrema derecha en Europa han ido ganando terreno de la mano de la explotación del miedo, la xenofobia y la intolerancia. No tan lejos, el candidato de al derecha propuso no hace mucho poner trabas a la

inmigración, lo que da cuenta de una situación preocupante cuando pensamos en los derechos humanos.

El tema es que la amenaza de Trump no está dado sólo por construir un muro, poner prohibiciones al ingreso de ciertos países, imponer chantajes comerciales a las empresas para impedir que se hagan plantas de autos en México, entre otras medidas. La verdadera amenaza podría estar por venir y tiene que ver con los desastrosos efectos que una política extrema de proteccionismo podría tener sobre las economías emergentes, entre ellas la nuestra.

¿Qué pasas si un día EE UU decide no comprar más fruta chilena para privilegiar la producción interna? ¿Y el cobre y el vino y muchos otros productos? El asunto del famoso muro con México es en realidad un muro contra América Latina –ya se ha dicho varias veces- pero parece ser que nadie ha salido a denunciarlo explícitamente ni nadie parece estar haciendo algo para enfrentar esta potencial crisis.

Algunos economistas han planteado que el actual ciclo económico va a estar marcado por el fin de la era del crecimiento y que más bien, vamos a tener burbujas de crecimiento o crecimientos más acotados y contenidos. Eso va de la mano de fenómenos cada vez más recurrentes en países desarrollados y en vías de desarrollo, como el envejecimiento de la población, la reducción de la competitividad de las empresas privadas.

Es ahí donde opera el Estado y no el mercado: tenemos que usar transferencias públicas para corregir la profunda desigualdad, generar más justicia social con la gratuidad o la reforma laboral, entre otras cosas.

Según algunos expertos, la reactivación de la economía que planea Trump requiere mucho más que levantar un muro e impedir que una empresa automotriz se mueva de México a Estado Unidos. El plan del mandatario es que las empresas estadounidenses creen más empleos dentro EE UU y aumentar la inversión interna en infraestructura.

Todo esto está por verse porque cualquier renegociación de tratado de comercio exterior no toma meses y sus eventuales efectos no son inmediatos, lo que nos lleva a la necesaria

duda: ¿en el afán por cumplir ese programa no se podrán cometer errores fatales para economías tan expuestas como la nuestra?

Si esto se produce, la verdadera amenaza de los cambios de Trump podrían estar en que las actuales reglas del comercio exterior quedarían en entredicho y eso nos obligaría a echar una mirada profunda a nuestra cadena de valor y a lo que estamos haciendo como país, para buscar cómo diversificar nuestra matriz productiva y los mercados de destino de nuestros productos.

El muro es, a estas alturas, el menor de los problemas que se asoman en el horizonte de un Estados Unidos impredecible.

El Presupuesto es más que plata

En un esfuerzo de meses y tras largas jornadas de trabajo, acuerdo y debate, logramos aprobar el Presupuesto 2018, que tendrá como principal énfasis, hacerse cargo de cumplir los compromisos que el país y en particular el Gobierno había comprometido. Hay temas que son urgentes, como la situación que enfrenta el SENAME, la gratuidad o la continuidad del plan de obras en salud.

Los ajustes que se hicieron al Presupuesto que envió al Gobierno, no tocaron la estructura general y el crecimiento proyectado del 3,9. Lo más importante: tampoco se aumentó el gasto fiscal para financiar el mayor número de parlamentarios, lo que da cuenta de la voluntad del Congreso por mejorar la gestión y la transparencia y credibilidad de esta función.

Y cuando parte de la campaña electoral de la segunda vuelta se refleja en los constantes ataques de la derecha, acusaciones absurdas de intervencionismo, es bueno recordar por qué es tan importante para nosotros defender lo que se ha hecho.

En materia de educación, el presupuesto de \$10.413.859 millones representa un incremento de 6,3% respecto del año anterior. Esto es más que una fría cifra, se trata de

que vamos a cumplir con el aumento de la gratuidad establecida en la ley de inclusión con lo que se podrá beneficiar a más del 85% de la matrícula financiada por el Estado.

En el problema de la infancia, gracias a la presión del Congreso se logró disponer 4 mil millones de pesos adicionales para el sistema de protección de menores que en total representarán unos 323 mil millones de pesos para los programas destinados a menores. Con los recursos adicionales se financiarán 2.148 plazas adicionales en el Programa de Reparación de Maltrato, por ejemplo.

Y sí, podríamos seguir enumerando áreas clave y centrales para el desarrollo de las familias y los territorios, como el acuerdo al que llegamos para fortalecer los programas de Agua Potable Rural que contaba originalmente con \$75.433 millones, y que se aumentó en \$27.000 millones adicionales.

Pero el Presupuesto es más que cifras, más que plata, más que acuerdos. El Presupuesto es una forma de mirar el país, de entender sus urgencias y de gestionar las dificultades.

Nosotros aprobamos un presupuesto que es responsable y que busca apuntalar la economía y el crecimiento que ya está dando muestras concretas de reactivación hace rato. El Índice de Producción Industrial de un 5% en 12 meses, muestran que Chile ya viene creciendo y es hora de tomar medidas para cuidar y resguardar ese crecimiento.

Aprobamos un presupuesto en el que se aseguró la gratuidad y muchos otros programas y beneficios sociales que la gente quiere y necesita que sean mantenidos y defendidos en el tiempo. Sería terrible que un retroceso prive de derechos que ya están conquistados, a las familias que ya reciben estos beneficios.

Las prioridades del Presupuesto están sobre la mesa: salud, educación, niñez vulnerada, vivienda y muchas otras áreas, donde el 69,4% del Presupuesto total de la nación es inversión social.

Es el sello que le dimos al erario, el sentido que tiene un gobierno de mirada progresista que cree que lo mejor para un Chile que se pronunció mayoritariamente por esta visión, es que continúe un gobierno de signo progresista. Es cosa de sumar.

El rol del Estado ante el VIH

Las alarmas se encendieron en el Gobierno, organismos de la salud y en los medios de comunicación: los casos de contagio con el VIH han aumentado un 66% en los últimos 6 años en todo Chile. En 2016 se registraron más 4 mil 900 casos y se estima que este año terminará con cerca de 5 mil 200 infectados.

Este asunto es de la mayor importancia ya que por años Chile entero ha mantenido una estrategia de “avestruz”, escondiendo la cabeza en el suelo no queriendo ver y enfrentar con total decisión un fenómeno tan complejo como éste.

Las cifras del Ministerio de Salud apuntan a que hay 61 mil personas que están en riesgo de contagiarse con la enfermedad, lo que no hace sino más patente que se debe hacer algo urgente para frenar su avance.

Hay medidas anunciadas, como la veta y aplicación de autotest y la entrega de fármacos que podrían evitar el contagio, pero es evidente que el problema no podemos seguir atacándolo cuando ya es tarde.

Y aquí cada cual tiene que asumir sus propias responsabilidades, pero cada vez que se ha intentado hacer una campaña explícita y abierta para frenar el avance del VIH, hay sectores que se han opuesto férreamente. Recordemos que hubo canales de televisión que no querían que se exhibiera en sus pantallas estas campañas donde se hablaba del uso del condón o conductas sexuales riesgosas, ad portas de entrar al siglo XXI.

Por eso, llama poderosamente la atención cuando esos mismos sectores se oponen a que el Estado juegue un rol en materia de educación y orientación en la diversidad sexual, pero ahora culpan al Gobierno por no haber hecho campaña contra esta pandemia. O sea, más Estado cuando nos conviene no más.

Lo peor de todo, es que esta enfermedad ahora es controlable y no necesariamente mortal. Eso no significa que debamos relajar los esfuerzos y no hacer lo que debe hacer un Gobierno: hacer campañas de salud que informen con total claridad los riesgos a los que puede enfrentarse la población. Las convicciones personales, religiosas o morales son precisamente eso, personales y lo que debe hacer el Estado, es dictar políticas públicas más allá de las preferencias de las personas.

Aún hay oportunidad de enmendar el rumbo e iniciar verdaderas acciones que protejan la salud de la población y en especial de nuestros jóvenes. Y ahora que todos coincidimos que el Estado sí tiene un rol, hemos de esperar que nadie se sonroje por decir que hay que usar condón.

El sentido de Justicia de la ley

No es artificial nuestra preocupación ante la eventual resolución del Tribunal Constitucional de quitarle las facultades que entregamos por ley al Servicio Nacional del Consumidor. Ello porque los cambios estudiados durante más de tres años en el parlamento buscan perfeccionar la institucionalidad, para que eficazmente se pueda fiscalizar al comercio y sancionar a quienes no cumplen con la prestación de servicios o, cuyos productos son defectuosos: un derecho que va más allá de la controvertida intervención del Tribunal Constitucional.

No se buscó perjudicar al retail con la nueva Ley del Sernac, su fortalecimiento beneficia a todos los actores de la economía, para realmente tener una capacidad de defensa de los

derechos de los consumidores y evitar los abusos que se han presentado últimamente con casos de colusión y vivimos a diario a través de reclamos sin respuesta.

Por eso, los trascendidos en la prensa en torno a la eventual eliminación de facultades al Sernac por parte del Tribunal Constitucional, es una alarma.

Otro punto es entender que el Tribunal Constitucional no es legislador, no puede doblegar las decisiones que se adoptan en organismos que sí lo son y tampoco puede pretender dictar normas que son materia de ley y de debate del Congreso Nacional. Éste, en uso de sus facultades, puso fin a las asimetrías de derechos que caracterizan las operaciones entre comercio y consumidor.

Mientras, el TC estaría definiendo que son los Tribunales los que deberían zanjar estas disputas. Pues eso fue debatido en el organismo que en Chile hace las leyes, el Congreso, y el resultado consideró, apegado a la práctica, que ese tipo de reclamaciones no son ni sencillos, ni baratos y menos expeditos. Fue el legislador el que entendió que la fiscalización debe estar acompañada de sanciones, porque de lo contrario se trataba de letra muerta.

De ser cierto lo que informan los medios, estamos ante una grave situación, ya que se cristalizaría el anhelo de cierto empresariado por mantener una situación de desbalance y debilitamiento de la defensa de los derechos de las personas.

Ante este posible escenario es necesario insistir en defender una normativa que equilibre la cancha y las facultades del Congreso para que el punto en común sea obtener una ley que no lesione los derechos de las personas.

Las verdades tras la elección de gobernadores

Para nadie es un misterio, que el conglomerado oficialista está a prueba. Cada decisión que hoy se tome, puede fortalecer o debilitar la opción de gobernabilidad que ofrecemos al país versus la Derecha.

También es verdad que la decisión en la Junta de nuestro Partido Demócrata Cristiano, de llevar candidata propia a la primera vuelta, significó para el bloque PS-PPD una traba en la negociación del pacto parlamentario. Es parte de las consecuencias que debemos asumir y enfrentar.

Quien toma palco ante aquello es la Derecha, que sin ningún mérito saca provecho de estas diferencias y al parecer logra aparentar que es un bloque monolítico, pese a que su

principal candidato tiene que -día por medio- entregar explicaciones por nuevos antecedentes que demuestran su tendencia a esquivar impuestos a través de paraísos fiscales.

En qué estamos que poco hacemos por preservar, cuidar y proyectar el trabajo del gobierno, nuestro gobierno, y los compromisos que adoptamos ante el país. Por los cuales fuimos elegidos. ¿Qué nos hace pensar que la agenda legislativa pendiente la podemos condicionar a los vaivenes de la contienda presidencial?

Me parece una excusa el argumento de que no es el momento para alinear el bloque, e incluso las características del texto enviado por el Ejecutivo. Lo que presenciamos es que a priori, nos quieren imponer a los parlamentarios regirnos a un escenario electoral. Hoy el escenario no está para ello. No corresponde.

El Partido Demócrata Cristiano ha estado abogando por un proceso de descentralización como compromiso fundamental para el avance hacia una colectividad cada vez más democrática, y ello pasa por la elección directa de las autoridades regionales, que sabemos, bastante han ya condicionado nuestros socios.

Esta Reforma, que incluye la ley sobre elección de los gobernadores fue un compromiso adoptado por la propia Presidenta y en el cual hemos trabajado largamente para dar respuesta a la demanda de más de la mitad del país que vive fuera de Santiago.

Los argumentos para postergar esta tramitación son un mero eufemismo.

Una iniciativa como esta, es un desafío país, un proyecto que sobrepasa las agendas cortoplacistas de los partidos o los propios candidatos y ese proyecto tiene que ver con el programa al que nos comprometimos a apoyar. La verdadera responsabilidad política pasa por respetar el espíritu de nuestros principios y por honrar compromisos; eso es lo que nos ha caracterizado como coalición política por décadas y lo que ha dado gobernabilidad a Chile: la confianza y la lealtad.

No son dos trincheras. No hemos dejado de compartir el sueño de un Chile más solidario y justo.

El adversario real está en la Derecha que quiere todo lo contrario al eje centro izquierda. Entonces, es hora de hablar con verdades y cumplir la palabra empeñada.

El verdadero sentido de la Junta Nacional PDC

La tentación de varios es instalar que tras esta nueva Junta Nacional de la Democracia Cristiana, prácticamente saldremos con la elección presidencial ganada. Que basta proclamar a nuestra presidenta del PDC, Carolina Goic y partir rumbo a la primera vuelta.

Y como dice el refrán, no por madrugar amanece más temprano, aún hay mucho camino que recorrer, muchas tareas que cumplir y demasiado trabajo que hacer para siquiera pensar que podremos seducir de nuevo al electorado nacional sin antes hacerse cargo de dos asuntos esenciales. Primero, despejar cuál es nuestro aporte al país, a través de una propuesta programática, cuáles son nuestras recetas para resolver las urgencias sociales que a nivel país aún nos apremian y, si vamos a respaldar el curso de las reformas que

hasta ahora se han implementado. Lo segundo, debemos resolver cuál será nuestro domicilio político. ¿Vamos a seguir en una coalición de centro izquierda, a emprender el camino propio o, acaso sucumbir a la apuesta por aliados de derecha?

Son dos temas de fondo, que definen el futuro de la DC en las próximas décadas, que van a determinar la trascendencia y el legado que nuestro partido ha entregado a Chile desde su fundación. Un paso en falso y esto perfectamente puede terminar en el declive de las ideas democratacristianas.

Puesto así, la candidatura es un asunto casi incidental, pues si nuestro partido tiene una propuesta programática robusta, una sólida política de alianzas y el proyecto político en el que vamos a trabajar, la candidatura no sólo saldrá de manera natural, sino que además tendrá un discurso certero, transparente y claro frente a la ciudadanía. Como siempre, se trata de no poner los bueyes delante de la carreta.

Acá la disyuntiva no es si vamos o no a primera vuelta. Suena bonito, suena aguerrido, suena provocador, pero ¿vamos solos a primera vuelta, sin acuerdo parlamentario, sin acuerdo programático, sin coalición, sin alianzas, así, sin nada?

Nuestra obligación es resolver qué opina el PDC frente a lo que resta de la Reforma Educacional y la gratuidad, qué hay que hacer para corregir el sistema de AFP que tiene la ciudadanía muy molesta, o qué se puede hacer para reactivar la economía y el crecimiento. ¿Tenemos opinión frente a cómo mejorar el sistema de salud que ha mostrado una de sus peores caras por estos días, o la corrupción a todo nivel, o la colusión de los mercados?

Es preocupante que ante la evidente fatiga anímica del partido, unos vean la oportunidad para arrastrarnos a una aventura individualista, pero la identidad no se consigue sin votos, sin representación parlamentaria, sin capacidad de influir y liderar. Si hay algo que nuestro partido puede aportar a Chile es su capacidad de garantizar estabilidad política, social y económica, porque somos la bisagra política natural entre el mundo progresista de la izquierda y el mundo progresista del centro.

Ahí está nuestro valor agregado, eso que ningún otro partido tiene, es una característica nuestra que nos hace únicos no sólo en Chile sino que en el mundo.

Esas decisiones las debe tomar el partido, con una configuración directiva que le reste presión a quien asuma la candidatura, de modo que las decisiones sean colectivas, integradoras y consensuadas entre todas las sensibilidades internas. La resolución acerca de cómo vamos a participar del proceso programático y de selección del candidato o candidata presidencial del que será el bloque político que enfrente a la derecha, no es una decisión que debamos imponérsela a Carolina Goic, nuestra carta presidencial. Sería injusto e inapropiado.

Lo central es que esta Junta se transforme en una herramienta de unión, de convocatoria a las fuerzas progresistas del centro que han confiado en la DC y que están a la espera de ideas nuevas, atrevidas y seductoras para Chile. El aislacionismo no es una actitud que haya estado en el centro de nuestra gestión y convivencia política. No es momento de traicionar lo que hemos sido durante décadas: un partido que ha generado unión y puntos de encuentro entre los chilenos.

Elecciones PDC ¿y ahora qué?

El hecho que el 65.6% de los camaradas que acudieron el domingo a las urnas se manifestaron a favor que la actual directiva del Partido Demócrata Cristiano, es una señal potente del valor y fortaleza de los procesos internos de democracia participativa de nuestro partido.

Fue un favoritismo contundente, pero no podríamos hablar sino de lo que ganaron los propios militantes y el PDC, al abrir el debate a las ideas con la existencia de otras dos listas, un hecho que denota la cabida que tienen ellas también dentro del partido. Y es que - a pesar de las diferencias - mantenemos una fraternidad y hermandad que ya se

quisieran otras colectividades. Eso hay que defenderlo y resaltarlo, hemos sabido buscar los acuerdos.

Bien por nosotros, bien por la actual mesa, bien por la DC, pero... ¿Y ahora qué?

Pasada la euforia, hay que hacerse cargo de los problemas y falencias que dejó al descubierto esta elección. Lo primero es reconocer que la participación en general está pasando por una crisis en nuestro país y que este fenómeno también nos ha tocado ampliamente como partido.

En estos comicios, votaron 20.593 mil militantes, lo cual no es sinceramente una noticia excelente para ningún miembro de la DC.

Con estos números... ¿cómo vamos a cumplir con el desafío de renovar la confianza de la ciudadanía en un candidato de la Nueva Mayoría, si no logramos movilizar ni siquiera a nuestros propios partidarios? Es imperativo que, si bien es un problema transversal a todos los partidos, debe ser abordado con acciones concretas que propongan soluciones a corto y mediano plazo.

Lo otro inevitable y obvio para la DC es el tema presidencial. Ya con Guillier, Lagos, Insulza y Piñera corriendo como candidatos, es natural que el partido se sienta con la urgencia de levantar una figura. Este proceso debe responder a las instancias oficiales internas con la claridad de que nuestro domicilio político es el mundo progresista, socialcristiano y democrático.

Sabemos que hay sectores y camaradas muy entusiasmados - al fragor de la elección de ayer - con llevar candidato a la primera vuelta, tensionar la relación con la Nueva Mayoría e -incluso- tentar a la suerte con la idea de poner fin a la coalición en la que hemos estado desde el retorno a la democracia. Nada en política debe hacerse con la cabeza caliente ni menos al calor de momentos políticos puntuales; se requiere mucha calma y serenidad para entender bien cuáles son las tareas que tenemos de cara a lo que viene.

Nuestra primera tarea es lograr que los militantes vuelvan a participar en todas las instancias de trabajo del partido, partiendo por la elección de nuestras autoridades.

Así también hay que abordar el tema de nuestra representación en las organizaciones sociales que - seamos sinceros - es un asunto de primera prioridad, más aún cuando vemos que en las principales organizaciones sindicales, gremiales, universitarias, hace rato que la DC no juega un papel conductor. ¿Cómo vamos a soñar con dirigir a nuestra coalición si no logramos amasar liderazgos territoriales y sociales relevantes?

Hay que modernizar al partido promoviendo el liderazgo juvenil, regional, multicultural y femenino. Eso nos dará espacios para levantar propuestas de visión de país y sociedad en cada ámbito de la vida de Chile, la economía, la educación, la integración de los pueblos originarios y muchas otras áreas en donde la DC antes tenía una idea clara y hoy solemos tener más divergencias.

Una vez realizadas estas tareas, cuando podamos ofrecer nuevas y grandes ideas a nuestros compatriotas, nos será mucho más fácil encontrar personas y liderazgos que encarnen esa idea de país que queremos.

Lo otro, eso de apurarse por levantar candidatos, marcados simplemente por la coyuntura, es un claro síntoma de que no entendemos para qué estamos en política.

¿Emergencia permanente?

Esta semana, el Gobierno dio a conocer una serie de medidas de apoyo a las personas y a las pymes que se vieron afectadas por las lluvias que afectaron tanto a la región de Coquimbo como a Atacama. Al igual que ha ocurrido en otras zonas y por otras emergencias, esta vez es el turno de nuestra región de recibir algunos de los mecanismos de los que dispone el gobierno para ayudar a las personas que tuvieron algún grado de daño.

La declaración de zona de catástrofe en ambas regiones ha permitido facilitar algunas acciones que -sin duda- van en el sentido correcto, como la suspensión del cobro de intereses por contribuciones o condonaciones dependiendo del caso, o la postergación de pago de cuotas de créditos hipotecarios con el BancoEstado. También se han facilitado algunos trámites como el pago o declaraciones del IVA.

Pero surgen muchas dudas respecto de qué va a pasar cuando venga la nueva emergencia. Esta vez puede ser otro terremoto, otra lluvia o las heladas tras las precipitaciones. El cambio del clima es algo evidente hace ya años y pareciera que esos cambios son más rápidos que nuestras reacciones, por muy paradójico que esto suene.

El Ministro de Hacienda anunció en Santiago medidas que dispondrán el SII, Tesorería o BancoEstado en ayuda de las personas o las empresas que sufrieron daños con el temporal. Pero esta sensación de emergencia permanente es la que no deja de tranquilizar a las personas a las empresas y a los gobiernos comunales.

Este es uno de las consecuencias más molestas de no tener una institucionalidad más robusta para enfrentar los efectos de los desastres naturales y de no tener una legislación que dé más atribuciones y poder a los gobiernos regionales. En cierto modo, esa es una de las deudas que tiene parte de la Nueva Mayoría al no llegar a un acuerdo para facilitar el proyecto de ley sobre elección de los Gobernadores Regionales.

Las lluvias más intensas ya pasaron, pero ahora se prevén posibles daños a la agricultura debido a las heladas e inundaciones en los cultivos. Este es un sector particularmente afectado en nuestra región, antes por la sequía y ahora por las lluvias excesivas.

Por todo esto, tenemos que tener un debate con Santiago acerca de cómo hacemos para que las regiones no sólo estén más preparadas para responder a los desastres, sino que tengan luego herramientas más estables, más específicas y más pertinentes para ayudar a

su gente, una vez que llegue el momento de reconstruir. De lo contrario, la “emergencia permanente” hará que la ciudadanía sienta que pese a la respuesta rápida a una catástrofe, la parte lenta es la reconstrucción y reposición de lo perdido porque siempre depende de Santiago.

En Chile no sobra nadie

El Senado despachó el proyecto que facilita la inclusión laboral de personas con discapacidad, por lo que la iniciativa estaría lista para ser promulgada por la Presidenta Bachelet. En resumen, esta nueva ley reserva el 1% de los puestos de trabajo en empresas públicas y privadas con más de 100 trabajadores, para personas con capacidades diferentes.

Se trata de una norma que repara el trato injusto que por años ha tenido una parte no menor de la población nacional y que nos permitirá abrir espacios de superación de la pobreza. Sí, porque tristemente la discapacidad física y mental, va de la mano con la pobreza.

En Chile, el 20% de la población tiene algún grado de discapacidad. Del total de ellos, el 25% pertenece a la población más vulnerable, económicamente hablando. En nuestra región, son poco más de 109 mil personas discapacitadas, la mayoría mujeres y más del 42%, mayores de 60 años.

Fue unánime el apoyo a esta nueva legislación lo cual refleja que el país sí entiende lo que hay que hacer en materia de igualdad, inclusión y equidad. Es muy difícil no encontrar acuerdo cuando se trata de iniciativas tan sentidas y necesarias para la ciudadanía.

Y no es menor, porque en la Región de Coquimbo hay más de 7 mil 700 personas discapacitadas entre los 18 y 44 años de edad, que son justamente el sector al que apunta preferentemente esta ley y que podrían verse beneficiadas directamente con estos cupos de trabajo.

El cuerpo legal consagra la no discriminación en el Estatuto Administrativo e incluye a quienes reciben una pensión de invalidez. También acaba con la discriminación salarial, derogando las normas que permitían pagar menos del sueldo mínimo a quienes tuvieran algún grado de discapacidad mental.

Con esto estamos dando una señal de integración muy potente, instando a las empresas a hacer un esfuerzo de inclusión reservando el 1% de sus puestos de trabajo para quienes tengan alguna discapacidad. ¿Se imagina la alegría que esto podría traer a personas que hoy están en sus casas, muchas veces haciendo nada, tener la opción de postular a un empleo?

De eso se trata cuando hablamos de que este gobierno está llevando adelante una agenda de transformación social. Éste y otros proyectos priorizados, buscan llevar más justicia

social a todos los sectores del país. Lo hicimos en educación, en la reforma tributaria y ahora en el mercado laboral.

En Chile no sobra nadie y los necesitamos a todos para trabajar más, producir más y generar más riqueza y crecimiento. Pero para todos.

En defensa de Codelco

Da pena escuchar y leer tal cantidad de imprecisiones y opiniones desinformadas acerca de cómo opera, cómo se gestiona y qué ocurre al interior de una empresa minera de tal

magnitud como es Codelco. La asonada de críticas que han aparecido en las últimas semanas a la principal cuprífera del mundo, recuerdan aquellas intentonas que lideraron los sectores más neoliberales para privatizar la empresa que ha sido el motor del desarrollo de Chile y principal aportante a la política social de todos los Gobiernos.

Codelco es una empresa del Estado, pero empresa al fin y al cabo. Quienes han estado directa o indirectamente intentando cambiar los mecanismos de control y de administración, parecen no darse cuenta de la amenaza crucial que siembran sobre el desarrollo de Chile. Muchos hubiéramos querido ver una acción algo más clara y decidida del Gobierno para zanjar cuanto antes este clima de incertidumbre que se está generando.

Es extraña y sospechosa esta súbita preocupación por los mecanismos de administración que tiene Codelco, sus decisiones directivas en torno a los altos ejecutivos, su política laboral o hasta cosas tan nimias como el uso de piezas gráficas para informar de sus campañas al personal minero. Quienes conocen y han estado al interior de las faenas, saben perfectamente que el principal medio de comunicación y alineamiento laboral en terreno son los diarios murales, los afiches y las gráficas. De ahí que llama tanto la atención el profundo desconocimiento e irresponsabilidad de quienes criticaron la inversión en las gráficas de Hervi, como si se hubieran estado botando recursos de la empresa.

Hay una Ley de Gobierno Corporativo de Codelco que ha significado un enorme avance en la modernización y actualización de una empresa que está, constantemente, obligada a mejorar su competitividad, regular su gestión y ajustar sus costos para mantenerse en el mercado. Y esa ley está plenamente vigente y es la mejor herramienta para asegurar el correcto uso de los recursos de los chilenos.

El Gobierno tal vez se equivocó al descartar de plano un proyecto o mecanismo que ratificara el marco normativo y el modelo de gestión de la empresa, de modo de impedir que las exigencias de Contraloría pongan en riesgo la competitividad de la compañía. Codelco debe administrarse de manera análoga a las empresas que son su competencia

en el mundo privado, por lo que no se le pueden exigir adoptar estándares de servicio público que pondrían en serio riesgo su futuro.

Una de esos puntos clave tiene que ver con la plena vigencia que tiene el Código Laboral y la negociación colectiva a la hora de establecer todas las relaciones laborales en Codelco, así como la plena vigencia de la ley de Sociedades Anónimas, para el caso de las obligaciones que pesan sobre directores y máximos ejecutivos.

A Codelco hay que defenderla, cuidarla, fortalecerla, no desestabilizarla ni sembrar la duda respecto de un supuesto despilfarro de recursos que queda en denuncias al voleo, pero que no tienen ningún respaldo ni evidencia. Por supuesto que el deber de las autoridades de la empresa sigue siendo administrar la compañía con celo y con eficiencia para seguir con el plan de reducción de costos. Pero el camino no es dañar la imagen de la empresa sobre la base de opiniones desinformadas o malintencionadas.

Codelco representa un orgullo para Chile, para su gente y un pilar esencial para el desarrollo y crecimiento de nuestra economía. A veces, el tiempo de campañas hace que cualquier cosa sea usada para lograr algo de figuración y mostrarse como paladines de la rectitud; pero por favor, con Codelco no se juega.

Entre Tongoy y Los Vilos

Durante esta semana pudimos ver el nuevo rostro de la Caleta Tongoy, luego de que el Ministro de Obras Públicas entregara el muelle, los atracaderos, un remozado paseo peatonal y estacionamientos. Estas flamantes dependencias forman parte de un plan nacional que involucró 151 proyectos a lo largo del borde costero de Chile y que en total demandaron una inversión que supera los 354 mil millones de pesos.

De esta forma se va cumpliendo la palabra empeñada en materia de reconstrucción tras el terremoto y maremoto que nos afectó de manera tan dura en 2015.

Lo de Tongoy es emblemático ya que se trata de un lugar maravilloso, preferido por miles de compatriotas que llegan desde todos los puntos del país a disfrutar de la naturaleza, la belleza del paisaje y de su gastronomía, ampliamente reconocida.

Estamos beneficiando directamente a unos 900 pescadores y a otras 2 mil 200 personas que trabajan directa o indirectamente en faenas relacionadas con el borde costero, desde la pesca hasta el turismo.

Tongoy cambió para mejor. Las obras de contención de maremotos podrá dar garantías de que futuros eventos naturales, no comprometerán de manera tan importante a la capacidad productiva de nuestras costas. No podemos evitar los terremotos o los tsunamis, pero podemos hacer que su impacto sea menor y acotado.

El Gobierno invirtió 9 mil millones de pesos en reponer y mejorar la infraestructura que se perdió en 2015, lo que nos motiva a aprovechar estas oportunidades y reinstalar a nuestra región y en especial la zona comprendida entre Tongoy y Los Vilos, como un polo de turismo natural, con buena gastronomía, buenos servicios y buenos destinos, para atraer turistas dispuestos a gastar tiempo y dinero en nuestra zona y no en otra.

En tal sentido, es importante que la autoridad regional no se contente con recibir estas obras, cortar las cintas y luego dejar el tema botado. Se requiere que estas mejoras vayan acompañadas de un plan, una estrategia o al menos una reunión que permita coordinar los esfuerzos de la industria del turismo y la pesca, el turismo y la agricultura, entre otras, para dar coherencia a los millones que el gobierno está invirtiendo tanto en el borde

costero como en las zonas del interior. De lo contrario, nos quedaremos a mitad de camino.

Falso mesías

COLUMNAS PUBLICADAS DEL H. SENADOR JORGE PIZARRO SOTO. AÑO 2017

La economía chilena está recuperando la memoria de cómo crecer. En rigor, no ha dejado de hacerlo aunque sea de manera muy acotada y a pesar del mal ciclo económico. Pero las cifras entregadas por el Imacec en materia de actividad industrial y las del Banco Central, reflejan que Chile crecerá más sí o sí el año que viene, independiente de quién gane las elecciones.

Por supuesto que ha costado mucho y que no han sido meses particularmente buenos, pero no podemos olvidar que tenemos una economía completamente abierta al mundo y que cualquier distorsión que se genere en los mercados, tiene efectos notorios en nuestra economía. Al inicio de este gobierno, se registraron la caída del precio del cobre y el desplome de nuestras exportaciones a socios comerciales clave.

Nada de este menor rendimiento está relacionado con las reformas impulsadas por el Gobierno, esa es una inexplicable razón que algunos de los grupos económicos han buscado instalar con claro sesgo político.

El director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard confirmó esta semana que las reformas no fueron la causa de la menor actividad en Chile. A su juicio, el cobre y la falta de alternativas de exportación, la necesaria diversificación, son las dos razones más poderosas para explicar el pobre desempeño del crecimiento.

De esto se ha hablado de manera tímida y sin mucho convencimiento, pues es más fácil echarle la culpa al gobierno, seguir descansando en el modelo exportador de commodities y no atreverse a buscar otras ofertas, otros mercados y más valor agregado a nuestra producción.

En su informe de Política Monetaria, el Banco Central proyectó una aceleración de la economía que la ubicaría en un rango del 1,25 al 1,75 por ciento para este año y, para 2018, ese rango sube al 2,5 y 3,5 por ciento. Eso va de la mano de un mejor precio del cobre, la recuperación de la inversión y la política monetaria expansiva que impulsa el instituto emisor. Pero hay también otros fenómenos que también ayudan a este mejor clima y proyecciones.

El BC estima que en los meses que siguen, la inversión retomará las tasas de crecimiento similares a las del PIB y que la productividad de sectores no relacionados con la explotación de recursos naturales también mostrarán mejores números. Junto con eso, el efecto de una mayor inmigración, más incorporación de mujeres a la fuerza laboral y un mejoramiento en la calidad del empleo, están permitiendo que Chile pueda ir compensando el paulatino, pero sostenido envejecimiento de la población.

En suma, nuestro PIB tendencial aumenta gracias a una conjunción de eventos que incluye un mercado laboral de mejor calidad gracias a los programas gubernamentales para capacitar mano de obra acorde con las necesidades del mercado, a una mayor participación laboral femenina gracias a las políticas públicas de incentivo de contratación de mujeres y de cuidado de la infancia, a una mayor presencia de inmigrantes que cubren cupos de empleo que los chilenos ya no quieren y gracias a mejores resultados de indicadores objetivos, como la inversión y el rendimiento de los sectores productivos.

¿Qué tiene que ver todo esto con la elección presidencial que aún no ocurre? Nada. Menos aún puede llegar a afirmarse con un mínimo de seriedad que este mejor resultado es por la “expectativa” en el crecimiento de la economía.

Lo que debe ponernos contentos como país es que hemos sido capaces entre todos, trabajadores y empresas, sector público y privado, de superar este huracán de malas cifras económicas que caracterizó este año 2017. Pero querer sacar las castañas con la mano del gato, es francamente poco justo con el país y su gente.

No existe mesías en política. Todo es fruto del trabajo y el esfuerzo de un país que quiere ser tratado con la verdad, con justicia social y con proyectos políticos serios y no con propaganda.

Feriados más, feriados menos

Actualmente y descontando aquellos feriados que se derivan de las elecciones generales y primarias, Chile tiene 17 feriados en el año de los cuales ,6 son irrenunciables. La mitad corresponden a fiestas religiosas y cada cierto tiempo tenemos este debate acerca de si es o no populista e irresponsable, declarar más feriados como el 2 de enero próximo.

La idea del Gobierno de declarar feriado este 2 de enero fue algo desprolija, con un secretismo que no era necesario ya que se trata de un tema para nada polémico. Más confuso se volvió el tema, cuando finalmente terminamos aprobando un proyecto que ya estaba en el Congreso.

Pero más allá de las formas, creo que es una iniciativa que puede ayudar a mejorar el ánimo del país. Y de paso, me parece que no se producirá ninguna hecatombe en la economía por el hecho de decretar un feriado que tendrá efectos muy acotados en el desempeño del IMACEC.

Por lo demás, soy de los que creen que la economía debería estar al servicio de la gente y no la gente al servicio de los indicadores. Entendemos que la derecha económica y política sienta que todo el país debe cuidar sus cifras y sus desempeños para así asegurar las ganancias, pero por favor... un poco de humanidad no le hace mal a nadie.

Nosotros como Nueva Mayoría, sí creemos en la igualdad -a diferencia de la UDI- y pensamos que es bueno que los trabajadores y trabajadoras de todo Chile puedan optar a los niveles de descanso que tienen los niveles gerenciales de las empresas. Porque en los feriados, es usual que los altos ejecutivos se tomen su merecido descanso, mientras el nivel operario, debe aportar a la economía para no dañar los índices, ¿no?

Otra cosa es que podamos dar un debate serio en torno a reducir el número de feriados para aumentar los días de vacaciones legales y así compensar a la ciudadanía. Hay algunas fiestas que de seguro tienen una raigambre muy grande en la ciudadanía, en especial las

religiosas, pero tenemos un desafío que supera a estas creencias que por muy legítimas que sean, a veces terminan provocando daños a largo plazo en el crecimiento. Y el crecimiento va en beneficio de todos y todas.

Y ojo, es imperioso que en ese diseño se piense en entregar el beneficio a todos los trabajadores, no sólo a los que tienen contrato sino que también a los que están bajo otros regímenes contractuales, siempre que se cumplan con las normas que la ley vaya a definir.

Es cierto que los feriados estimulan a ciertos sectores de la economía, como el turismo y el comercio familiar o de barrio, pero ese impacto es aún marginal y no necesariamente relevante para el conjunto de la actividad, por lo que perfectamente podemos ampliar la disponibilidad de vacaciones para que la gente tenga más descanso, que ese descanso sea mejor planificado y no al azar y que permita a las familias a hacer mejor uso del tiempo juntos.

Creo que hay que excluir de este debate a las fiestas locales, a los feriados regionales, porque se trata de festividades que costó mucho tiempo que fueran consideradas por el Gobierno central y porque no tienen un impacto a nivel país. Este debate debe darse con altura de miras ya que vamos a tener que sacrificar feriados civiles y religiosos con tal de dar más vacaciones. Todos se van a sentir afectados, pero acá hay que pensar en el beneficio para el país en su conjunto: más días hábiles significa más productividad, más crecimiento y, por ende, más recursos y más empleo.

Tenemos una tremenda oportunidad para ordenar este tema y otorgar un beneficio de vacaciones que permita ampliar los derechos de las personas. Es así como vemos el uso de la economía, así vemos el ejercicio de la acción política en pos de la igualdad de trato y la dignidad de las personas, diametralmente opuesto a lo que la derecha piensa.

Gobierno dice no a Dominga. ¿Y ahora qué?

Hemos de suponer que tras la negativa del Gobierno a la concreción del proyecto minero Dominga en la región de Coquimbo, hay un plan gubernamental para revertir el más de 10% de cesantía que han en la comuna de La Higuera y el 7,8% de desocupación regional, la segunda más alta del país.

También tendremos que suponer que los ministerios que votaron en contra de la instalación del proyecto, van a anunciar alternativas que nos permitan atraer desde otras vías los 2 mil500 millones de dólares en inversión que se acaban de perder para la región, o los más de 5 mil millones de dólares que se han frenado en estos 8 años en la misma zona.

No somos pocos los que creemos que la institucionalidad medioambiental no está siendo suficientemente validada al tomar decisiones que no se explican desde el punto de vista técnico. Si Dominga tenía la aprobación del organismo técnico que certifica la viabilidad medioambiental de la iniciativa, que es el SEA, entonces no se entiende que el comité de ministros tenga una opinión diametralmente opuesta.

Algo no cuadra. Pero más allá de si es Dominga, otros proyectos mineros u otros proyectos energéticos, lo que tenemos que resolver es cómo permitimos que las regiones más afectadas por problemas de desempleo y crecimiento, puedan optar también a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. La gente de la región de Coquimbo –muchas veces- deben hacer grandes esfuerzos por permanecer en sus pueblos y localidades, muchas de ellas con problemas estructurales de sequía o de poco acceso a cosas tan elementales como agua potable para consumo humano.

Si no es una sequía, son lluvias catastróficas. Si no es la falta de servicios, son los problemas de conectividad. La calidad de vida de los habitantes de la región, salvo la Serena, está por debajo de la media nacional y eso se sigue agravando cuando no hay empleo, no hay desarrollo y no hay incentivos a la inversión.

Ningún proyecto de desarrollo industrial va a tener impacto cero y es entendible que haya detractores y gente a favor, pero para eso están los organismos encargados de certificar desde una mirada técnica, si se cumple con las exigencias de la ley en materia de impactos

ambientales. Pero es irracional pensar que crecimiento son incompatibles con el cuidado del entorno, pues eso hipoteca desde ya el desarrollo no sólo de las comunas de la región de Coquimbo, sino que el del país entero.

Las reglas deben ser claras y si no lo están, hay que aclararlas más. En lo personal no me interesa el proyecto A o B, lo que me preocupa es que gente de mi región –en la que nací y crecí- tenga las mismas oportunidades de surgir que las que viven en otros lugares de Chile que tienen empleo y desarrollo. Es fácil oponerse a todo desde la comodidad de una casa con todos los servicios que trae la modernidad, pero la vida se ve distinta desde territorios en donde no hay empleo, poca conectividad o agua potable incluso.

Integrar y no segregar en educación

Nuestra región es una de las que inauguró el sistema de admisión escolar, lo que pondrá fin a la odiosa selección que hasta ahora debían sufrir niños y sus familias. Este nuevo sistema garantiza el derecho de las familias a ser ellas las que elijan el colegio que quieren para sus hijos y no al revés.

Ya no se permitirán las entrevistas privadas, evaluaciones y exigencias de antecedentes financieros o religiosos a los papás al momento de postular, terminando así con cualquier atisbo de discriminación contra los alumnos o sus familias.

Esto forma parte de la reforma educacional en lo referido a la inclusión escolar y en cómo aseguramos como país, que la educación es ante todo un derecho y no un privilegio al que se deba postular sobre la base de ciertas condiciones. El sistema funciona sobre una plataforma on line en el sitio www.sistemadeadmisionescolar.cl, en el cual las familias pueden postular a sus hijos para los cursos de prekínder, kínder, primero y séptimo básico, y primero medio en establecimientos municipales y particulares subvencionados de Tarapacá, Coquimbo, O'Higgins y Los Lagos.

De acuerdo al Ministerio de Educación, para este año ya hay 81 mil postulaciones para 2 mil 174 establecimientos y, en 2018, se van a sumar otras 10 regiones para terminar de estar operativo en todo el país en 2019.

En el sitio, hay información acerca de los colegios, los proyectos educativos, las actividades extra programáticas o los reglamentos internos y asuntos referidos a infraestructura o aranceles, para los casos en que no haya gratuidad.

Hay que despejar dos cosas esenciales. Primero, los casos de filas y esperas toda la noche para conseguir un cupo de matrícula, no están relacionados con la ley de inclusión y, de hecho, esas situaciones van a terminarse con la implementación del sistema, ya que ahora bastará hacer el trámite desde el sitio web. Lo segundo, es que la discriminación, por plata o por estatus se acaban en Chile. Acá lo que importan son los niños y no los prestigios de los colegios.

Por supuesto que habrá que evaluar el sistema una vez que veamos en la práctica cómo opera, pero lo más importante es mantener el espíritu de esta ley y que tiene que ver con

la dignidad de las familias y de los estudiantes. Ante la ley somos todos iguales y es necesario que seamos capaces de defender este logro y entender que una sociedad más justa e inclusiva, se construye sobre la base de la integración y no desde la segregación.

Las competencias regionales

COLUMNAS PUBLICADAS DEL H. SENADOR JORGE PIZARRO SOTO. AÑO 2017

La elección de los gobernadores regionales en 2020 ya es prácticamente una realidad y sólo resta ponerse de acuerdo en el traspaso de las competencias que tendrán los gobiernos de las regiones y los mecanismos mediante los cuales haremos la entrega de las facultades que hoy tienen la autoridad central.

Si bien la campaña presidencial ha puesto algo de pausa a la tramitación que está casi lista, la Comisión Mixta ya se encuentra a pocos pasos de despejar un acuerdo definitivo, pese a algunas voces que insisten en criticar la medida. Ya despejamos asuntos cruciales como la duplicidad de cargos, un mecanismo que asegure mínima la coherencia entre las estrategias regionales y las políticas públicas nacionales, la administración de los recursos o las inhabilidades que pesarán sobre los postulantes a los cargos.

No ha sido fácil. Uno de los temas más complejos es cómo vamos a constituir áreas de gestión que deben tener una coordinación muy estrecha con los ministerios sectoriales que son los que, en definitiva, llevan a cabo el desarrollo de los proyectos en regiones. Las adecuaciones que se requieren en materia de reglamentos, planos reguladores y otras áreas normativas han sido exhaustivamente tratadas en el Congreso. Ahora, es tiempo de dar luz verde definitiva.

Si bien no tenemos consenso en todo y es difícil que así sea, sabemos que las competencias deben estar traspasadas de manera efectiva antes de 2020 cuando se verifique la elección.

Ahora bien, sin duda alguna que es una gran noticia que hayamos sido capaces de aprobar una reforma tan profunda y tan decidora para la regionalización y la descentralización. La elección de los gobernadores regionales y el traspaso de competencias de gestión en áreas como Vivienda, Transporte o Desarrollo Social, serán sin duda un tremendo aporte a mejorar los niveles de desarrollo de las regiones y de su gente.

Creo que es un tremendo avance y hay que reconocerlo. En el futuro, sin embargo, me parece que hay que hacer la verdadera revolución en materia de traspasar poder de decisión a las regiones y eso está directamente ligado a la forma en que se construye el presupuesto nacional.

Hoy, todo pasa por decisiones que se toman en el Ministerio de Hacienda, Presidencia y el comité político de La Moneda. Y está bien, pues es ese el ordenamiento político que hoy tenemos.

No es una crítica, sino un planteamiento que me gustaría que se debatiera y se abriera a la discusión: abrir porcentajes o áreas presupuestarias que puedan ser priorizadas o definidas por las regiones. Es triste decirlo, pero el verdadero poder político, el verdadero poder de decisión es el de quien determina dónde se gasta y en qué se gastan los recursos de todos los chilenos.

Me parece que es razonable conversar sobre este tema y estudiar fórmulas que a futuro nos permitan generar nichos en los que las regiones tengan algo más de voz acerca de dónde destinar recursos para el desarrollo de obras públicas, instrumentos de desarrollo humano o tecnológico. Después de todo, es en regiones donde mejor se sabe dónde aprieta el zapato.

La DC, un partido protagonista de los cambios del gobierno

COLUMNAS PUBLICADAS DEL H. SENADOR JORGE PIZARRO SOTO. AÑO 2017

¿Quién dijo que Chile no ha avanzado? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo a quienes insisten en contar medias verdades, que reiteran que las reformas han sido un retroceso para el país? ¿Es acaso un retroceso para la señora Eugenia, de la Serena que tiene a sus cuatro hijos estudiando gratis en la enseñanza superior? ¿Es un retroceso para Tania Huenul que pasó de vender 400 mil pesos a 56 millones mensuales gracias a la ayuda de un programa de gobierno orientado a microemprendedoras como ella?

El discurso de la derecha se cayó a pedazos. La cuenta pública de la Presidenta fue tan sólida, clara y transparente que no dejó espacios para la campaña que los partidos de derecha tenían planeada desde hace días.

¿Querían compararse?

Dijeron que se había crecido más con Piñera que en estos años. Sí, pero la letra chica es que lo hicieron con un precio del cobre que era casi el doble del que le tocó a este gobierno. El empleo por cuenta propia aumentó mucho más en el gobierno anterior que en este. En su período, dictaron apenas, casi de mala gana, una ley laboral, versus las 28 del gobierno de la Nueva Mayoría.

Tan sólo en el problema de las pensiones marcamos un abismo de diferencia con la derecha que ha postulado como única solución a las bajas jubilaciones, que los chilenos tienen que trabajar más años y alargar “su vida útil”. La Presidenta Bachelet señaló que la reforma que ofreció la Nueva Mayoría a Chile permitirá un aumento inmediato de 20 por ciento en las jubilaciones de los pensionados de AFP, lo que representa no sólo un legado clave para el futuro, sino que además es una muestra de cómo se escuchó una demanda ciudadana muy sentida.

Los avances han sido notorios. La línea 7 del metro, los más de 500 mil compatriotas de zonas aisladas o rurales y en todo Chile, que utilizan servicios de transporte subvencionados por el Estado, el proyecto de ley de matrimonio igualitario, el nuevo Plan Araucanía que busca enfrentar el tema de fondo a la violencia rural en la zona, los 21 hospitales que estarán contruidos al final del periodo, la extensión de la gratuidad en la

educación para cientos de miles de familias de todo Chile, la creación de 325 mil empresas - 60 mil más que en la administración anterior -, una tasa de desempleo de 6,5% que está por debajo del promedio histórico a pesar del mal momento económico, y un largo etcétera, son los “porfiados hechos”, que demuestran cuanto se ha avanzado, de manera concreta, en estos últimos cuatro años.

Y dentro de este auspicioso panorama, es que la DC ha aportado no sólo con votos, sino que con ideas, entusiasmo, propuestas y defensa del programa de gobierno de la Presidenta Bachelet.

Hemos puesto lo mejor del partido para apoyar estas reformas y para mejorarlas con nuestra mirada de centro, que sin duda es un aporte importante a esa gobernabilidad de la que habló la mandataria durante su último discurso en el Congreso.

Es esto lo que debemos preservar, cuidar y proyectar. Una mirada humanista de la economía, las leyes y el Estado de Derecho. La derecha, sus partidos y sus personeros, han tenido la desfachatez de decir que vienen a terminar con las reformas, a acabar con la gratuidad, a retroceder en la reforma laboral y educacional, en restar derechos ya ganados.

Es eso lo que se juega en este nuevo periodo electoral, donde más allá de las candidaturas independientes de la Nueva Mayoría, lo que cuenta es defender esta obra que le ha cambiado la vida a las familias chilenas, y que en la Cuenta Pública de la Presidenta Bachelet, tuvimos la oportunidad de constatar, de manera fehaciente y concreta.

La derecha se quedó sin discurso luego de la demoledora demostración de la Presidenta. Ahora es nuestra responsabilidad política entender a este nuevo Chile, ofrecerle una continuidad de estas políticas, una proyección de este concepto de que los chilenos somos sujetos de derechos, y no meros consumidores. Que queremos más derechos sociales y no más bienes de consumo.

Fue una sólida cuenta pública, alentadora, optimista, con sello de progresismo. En ella se pudo visualizar el marcado de nuestra coalición. En resumen, una cuenta pública para un Chile que cambió sin vuelta atrás, para bien de todos y cada uno de sus habitantes.

La DC, un partido protagonista de los cambios del gobierno

¿Quién dijo que Chile no ha avanzado? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo a quienes insisten en contar medias verdades, que reiteran que las reformas han sido un retroceso para el país? ¿Es acaso un retroceso para la señora Eugenia, de la Serena que tiene a sus cuatro hijos estudiando gratis en la enseñanza superior? ¿Es un retroceso para Tania Huenul que pasó de vender 400 mil pesos a 56 millones mensuales gracias a la ayuda de un programa de gobierno orientado a microemprendedoras como ella?

El discurso de la derecha se cayó a pedazos. La cuenta pública de la Presidenta fue tan sólida, clara y transparente que no dejó espacios para la campaña que los partidos de derecha tenían planeada desde hace días.

¿Querían compararse?

Dijeron que se había crecido más con Piñera que en estos años. Sí, pero la letra chica es que lo hicieron con un precio del cobre que era casi el doble del que le tocó a este gobierno. El empleo por cuenta propia aumentó mucho más en el gobierno anterior que en este. En su período, dictaron apenas, casi de mala gana, una ley laboral, versus las 28 del gobierno de la Nueva Mayoría.

Tan sólo en el problema de las pensiones marcamos un abismo de diferencia con la derecha que ha postulado como única solución a las bajas jubilaciones, que los chilenos tienen que trabajar más años y alargar “su vida útil”. La Presidenta Bachelet señaló que la reforma que ofreció la Nueva Mayoría a Chile permitirá un aumento inmediato de 20 por ciento en las jubilaciones de los pensionados de AFP, lo que representa no sólo un legado clave para el futuro, sino que además es una muestra de cómo se escuchó una demanda ciudadana muy sentida.

Los avances han sido notorios. La línea 7 del metro, los más de 500 mil compatriotas de zonas aisladas o rurales y en todo Chile, que utilizan servicios de transporte subvencionados por el Estado, el proyecto de ley de matrimonio igualitario, el nuevo Plan

Araucanía que busca enfrentar el tema de fondo a la violencia rural en la zona, los 21 hospitales que estarán contruidos al final del periodo, la extensión de la gratuidad en la educación para cientos de miles de familias de todo Chile, la creación de 325 mil empresas - 60 mil más que en la administración anterior -, una tasa de desempleo de 6,5% que está por debajo del promedio histórico a pesar del mal momento económico, y un largo etcétera, son los “porfiados hechos”, que demuestran cuanto se ha avanzado, de manera concreta, en estos últimos cuatro años.

Y dentro de este auspicioso panorama, es que la DC ha aportado no sólo con votos, sino que con ideas, entusiasmo, propuestas y defensa del programa de gobierno de la Presidenta Bachelet.

Hemos puesto lo mejor del partido para apoyar estas reformas y para mejorarlas con nuestra mirada de centro, que sin duda es un aporte importante a esa gobernabilidad de la que habló la mandataria durante su último discurso en el Congreso.

Es esto lo que debemos preservar, cuidar y proyectar. Una mirada humanista de la economía, las leyes y el Estado de Derecho. La derecha, sus partidos y sus personeros, han tenido la desfachatez de decir que vienen a terminar con las reformas, a acabar con la gratuidad, a retroceder en la reforma laboral y educacional, en restar derechos ya ganados.

Es eso lo que se juega en este nuevo periodo electoral, donde más allá de las candidaturas independientes de la Nueva Mayoría, lo que cuenta es defender esta obra que le ha cambiado la vida a las familias chilenas, y que en la Cuenta Pública de la Presidenta Bachelet, tuvimos la oportunidad de constatar, de manera fehaciente y concreta.

La derecha se quedó sin discurso luego de la demoledora demostración de la Presidenta. Ahora es nuestra responsabilidad política entender a este nuevo Chile, ofrecerle una continuidad de estas políticas, una proyección de este concepto de que los chilenos somos sujetos de derechos, y no meros consumidores. Que queremos más derechos sociales y no más bienes de consumo.

Fue una sólida cuenta pública, alentadora, optimista, con sello de progresismo. En ella se pudo visualizar el marcado de nuestra coalición. En resumen, una cuenta pública para un Chile que cambió sin vuelta atrás, para bien de todos y cada uno de sus habitantes.

La economía en tiempos de elecciones

El crecimiento es el pie forzado de nuestra economía y en eso, creo que no hay dos opiniones. El mal desempeño y este lento despegue, nos está haciendo perder competitividad en la región y en el mundo, y nos está generando los consabidos males que afectan a una economía estancada, como la afectación al empleo.

Y para colmos, este mal momento –con un Imacec negativo, con recortes de la proyección de crecimiento- llega con una campaña electoral en ciernes lo que gatilla la natural inquietud acerca de cómo este mal ciclo económico puede ser usado como caballo de batalla en la campaña, arriesgando exacerbar un debate que requiere calma y cabeza fría.

El presidente del Banco Central señaló en su informe de política monetaria que un cambio político no es ningún seguro para revertir las malas cifras del ciclo económico que enfrentamos y que -más bien- se requiere un acuerdo país que nos haga revitalizar nuestra estructura productiva, el mercado laboral y por sobre todo, la productividad.

Hay que sentarse a hablar de manera desapasionada, con evidencia sobre la mesa y con la campaña bien en el horizonte. Actitudes irresponsables, cortoplacistas y mezquinas de algunos candidatos que hacen declaraciones ofreciendo doblar el crecimiento como si fura magia, le hacen demasiado mal al país. Esta actitud es peligrosa y va derechamente en contra de lo que se está tratando de lograr: que el clima de diálogo y análisis frío nos permita incentivar una curva de crecimiento al alza.

La tarea es de tal magnitud y abarca asuntos tan complejos y de larga data, que no basta con disparar desde la trinchera ideológica o desde la orden de partido. Un ejemplo: la propuesta de la diputada Vallejo de rebajar la jornada laboral, recibió críticas y alabanzas casi por igual. Personalmente, tengo muchas dudas frente al tema, pero sí es muy relevante que alguien ponga el tema de la competitividad, la productividad y el mercado laboral sobre la mesa.

Si vamos a descartar la idea, no es para “ganarle el gallito al PC”, sino para esperar que de ese debate salgan ideas consensuadas acerca de qué medidas sí pueden revitalizar el mercado del trabajo y la productividad. De verdad, espero que ese debate se dé, para ofrecer al país alguna opción de adelantarnos a cifras de empleo cada vez más malas y que podrían volverse estructurales.

Otro ejemplo: usar las cifras del Imacec para culpar a las reformas del peor desempeño de la economía. La verdad, esas declaraciones son de una liviandad, de una irresponsabilidad y de una soberbia que asustan. EL candidato de la derecha cree que todo vale, que todo es cancha y que su objetivo de quedarse con la Presidencia una vez más, le da carta blanca para decir lo que sea. En Alemania se usa la palabra *Schadenfreude* para describir algo así como “la alegría que se siente ante el sufrimiento o mal destino de otro” y eso es lo que precisamente hace Piñera cada vez que habla de Chile: Decir que todo está mal, para hacer creer a la gente que él hará que todo salga bien. ¡Insólito!

Afortunadamente, Chile parece estar en otra sintonía. Y esperamos que ese optimismo y esa mirada algo más fresca, puedan permear al debate político de estos meses que vienen. El tema del bajo crecimiento y el impacto que eso tiene en el empleo, la competitividad y la productividad, es un asunto que como país debemos debatir, en un ambiente de unidad, de habilidad técnica, de sinceridad y patriotismo que muchas veces falta en tiempos de elecciones.

La economía en tiempos de elecciones

El crecimiento es el pie forzado de nuestra economía y en eso, creo que no hay dos opiniones. Cifras que de seguir ahondando en el pesimismo nos pueden llevar a perder la competitividad en la región y en el mundo, y con ello generar los consabidos males que afectan a una economía estancada, como la afectación al empleo.

Conocimos una proyección realista del Banco Central, pero con un nivel que puede mejorar, eso no es ficción. Es cierto que recién salidas del horno las últimas cifras de Imacec son negativas, con recortes de la proyección de crecimiento y llegan en medio de una campaña electoral en ciernes, entonces es natural preguntarse cómo este mal ciclo económico puede ser usado como caballo de batalla en la campaña, arriesgando exacerbar un debate que requiere calma y cabeza fría.

El presidente del Banco Central señaló en su Informe de Política Monetaria que un cambio político no es la solución para revertir las malas cifras del ciclo económico que enfrentamos y que - más bien - se requiere remar hacia revitalizar nuestra estructura productiva, el mercado laboral y por sobre todo, la productividad.

Debemos hablar sin ansiedades, con evidencias sobre la mesa y conscientes de la presencia de la campaña electoral en el horizonte. Actitudes irresponsables, cortoplacistas y mezquinas de algunos candidatos que hacen declaraciones ofreciendo doblar el crecimiento como si fuera magia, le hacen demasiado mal al país.

Esta actitud es peligrosa y va derechamente en contra de lo que se está tratando de lograr con un proceso democrático y donde primen el clima de diálogo y análisis frío que nos permita incentivar una curva de crecimiento al alza.

La tarea es de tal magnitud y abarca asuntos tan complejos y de larga data, que no basta con disparar desde la trinchera ideológica. Por ejemplo, la propuesta de rebajar la jornada laboral, recibió críticas y alabanzas casi por igual. Personalmente, creo que lo relevante es poner el punto en la competitividad, la productividad, el mercado laboral y la calidad de vida de los trabajadores.

Esperemos que de ese debate salgan ideas consensuadas acerca de qué medidas sí pueden revitalizar el mercado del trabajo y la productividad, al tiempo que incentiven la cultura del Bienestar. Pero claro, es necesario ofrecer al país alguna opción de adelantarnos a cifras de empleo cada vez peores y evitar se vuelva algo estructural.

Necesitamos acciones serias, con visión de país, lejos de cualquier populismo. Ello para contrarrestar el hecho de que algunos insisten en que las cifras económicas de este momento son reflejo de las reformas impulsadas por este gobierno: declaraciones cuya liviandad e irresponsabilidad son de una soberbia que asusta.

El bajo crecimiento y el impacto que eso tiene en el empleo, la competitividad y la productividad, es un asunto que como país debemos revertir en un ambiente de unidad, de habilidad técnica, de sinceridad y patriotismo que muchas veces falta en tiempos de elecciones.

La insensatez incesante de Bolivia

Era de no creer: militares y agentes aduaneros bolivianos fueron detenidos por Carabineros en territorio chileno, participando además de un robo de camiones. Esta situación no sólo es insólita, sino además denota una total insensatez de parte de las autoridades bolivianas que vuelven a construir retórica desde un caso que es policial.

Ahora hay amenazas de llevar el caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acusan secuestro de los hechores, indican que es otra agresión de Chile, cuando lo único que está acreditado es que estas personas fueron detenidas en nuestro territorio y más encima, robando.

Ya estamos algo habituados a esta seguidilla de declaraciones pintorescas de nuestro vecino, pero eso no significa que no se nos colme la paciencia. Pero este caso, tiene una particular complicación, ya que las consecuencias de las acciones de los agentes bolivianos, tiene duras sanciones en la ley chilena. Estos ahora no sólo es un tema diplomático, sino que también judicial.

Cuando este Gobierno impulsó la modificación a la ley de armas en 2015, se buscaba terminar con cierta tolerancia contra quienes portaban armas de manera ilegal. Pues bueno, cuando estas personas fueron sorprendidas en territorio nacional, lo hicieron portando armas que bajo cualquier punto de vista, son ilegales.

Antes de las modificaciones a la ley, cuando a alguien lo encontraban con un porte ilegal, lo que se hacía es que se aplicaban multas. Eso cambió y hoy la Fiscalía está obligada a perseguir un delito considerado como grave por el actual marco legal y los inculpadados, se exponen hasta 5 años de cárcel.

Si además del porte ilegal de armas, se suma otro delito igual de grave que, en el caso de estos bolivianos es el robo de mercadería y de vehículos, la pena podría alcanzar hasta los 20 años que se suman a la pena anterior.

Es decir, si son encontrados culpables, estas personas no podrán abandonar Chile sin cumplir una condena mayor. Esto va a suponer un aumento en la tensión diplomática con la Paz sin lugar a dudas, pero lo que no puede ocurrir es que la insensatez incesante de Bolivia, nos lleve a incumplir lo que dice nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué podríamos hacer excepciones en el procesamiento penal de gente que cometió delitos tan graves al interior de nuestras fronteras?

Imposible. Primero, porque la ley lo impide, y segundo, porque la paciencia ya se agotó con Bolivia.

El gobierno debería mantenerse al margen de la situación que enfrentan estos agentes del país altiplánico y dejar que la justicia haga su trabajo sin presiones de ningún tipo. Es entendible que esto generará más roces con Evo Morales y que habrá nuevas declaraciones destempladas, pero la Fiscalía debe terminar su trabajo y acusar, por un lado, y los Tribunales deben fallar.

Solo luego de que las instituciones hagan su tarea, podremos evaluar cómo se cumplen las eventuales condenas y si procede o no, tomar otras medidas como la expulsión. Por de pronto, hay que garantizar tranquilidad a las instituciones para que se realice un juicio imparcial, transparente y ajustado a derecho, pero sin que las declaraciones de dirigentes irresponsables del otro lado de la frontera, inhiban la labor de nuestro aparato judicial.

La responsabilidad compartida ante emergencias

En 1957 fue la última vez en que había llovido casi 100 milímetros en un solo día; 60 años después, cayeron más de 62 milímetros entre jueves y viernes, acercándose a cifras históricas y que mostraron lo complejo que es para nuestra zona, contener tanta agua de una sola vez Y eso, a pesar de que arrastramos una sequía prolongada.

Descontando las lamentables muertes que se produjeron durante el temporal, la región lo soportó de buena manera. El sistema de protección civil –que reúne a organismos de gobierno y no gubernamentales- actuó de manera coordinada, realizando las evacuaciones preventivas en aquellos casos en los que era mejor adelantarse a una posible emergencia.

Salvo casos muy puntuales, como el del embalse Recoleta, en general toda la infraestructura mayor de la región aguantó las crecidas provocadas por estas lluvias, inusuales para una zona en la que llueve 12 milímetros en promedio al año.

ONEMI y la Intendencia lideraron el proceso de control y coordinación de los más la policía, bomberos, fuerzas armadas y personal de emergencias de MOP que monitorearon minuto a minuto cada punto que mostraba eventuales riesgos para la población.

Esto muestra que hemos ido aprendiendo de errores anteriores y de desastres que la naturaleza le impone a Chile, cada vez con más frecuencia. Esto podría ser mucho mejor si tuviéramos ya en funcionamiento la nueva ONEMI, proyecto que está siendo tramitado en el Congreso.

Ahora bien, podemos tener las mejores legislaciones, los mejores recursos o equipos de emergencia, pero si eso no va acompañado de una actitud responsable y de autocuidado de parte de todos, es poco lo que se puede hacer para salvaguardar la vida de las personas y la propiedad.

Me refiero a que se debe tomar conciencia sobre no construir ni viviendas, ni empresas, ni instalaciones peligrosas, en zonas de riesgo. Siempre se deben tomar las precauciones y adelantarse a posibles desastres provocados por fuerzas de la naturaleza, pero que podrían mitigarse si se hace buena ingeniería y nueva prevención.

Del mismo modo, si la gente construye sus casas en terreno no regularizados, en tomas no autorizadas o actúa de manera imprudente ante una emergencia, es muy probable que se produzcan daños a la propiedad e incluso a la vida. Todos tenemos que poner de nuestra parte, porque no todo es responsabilidad de un gobierno o del gobierno comunal.

Estar preparados y responder a una situación de catástrofe, es responsabilidad tanto de las autoridades como de la propia sociedad civil. El tema es tomar esto en serio y asumir cada uno su cuota de responsabilidad. Después, echarle la culpa al otro, es lo más fácil.

La sinceridad en campaña

A fines del mes pasado fueron publicados los resultados de las asignaciones y renovaciones de la gratuidad, becas y Fondo Solidario. En el país, serán 260 mil las familias las que accederán a la gratuidad, lo que representa el 50% de los hogares más vulnerables, cifra que subirá al 60% en 2018. El resto de las familias recibirán o becas o recursos del Fondo Solidario para así poder asegurar la continuidad de estudios en la enseñanza superior.

En nuestra región, se logró duplicar el número de alumnos beneficiarios pasando de 5 mil a 11 mil, los cuales podrían aumentar levemente después de que terminen los plazos para las apelaciones.

Pero más allá de los detalles, lo relevante es que estamos presenciando una transformación gigantesca: hemos transformado un bien de consumo, un bien que se transa en el mercado, en un derecho social. En Chile, 1 de cada cuatro estudiantes podrá ir a una institución de enseñanza superior –Universidad, Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica- sin tener que pagar.

Hoy, las familias con menos recursos ya no tienen que elegir cuál de sus hijos va a estudiar y cuál no. Ahora tenemos un mecanismo que garantiza el derecho a la educación, a surgir y a obtener una profesión, no importando si se tienen recursos económicos.

El candidato de la derecha salió esta misma semana a criticar la gratuidad y a anunciar que, de ganar la elección, no va a extender este beneficio. Es que a la derecha le molesta profundamente que un bien de consumo ahora sea un derecho; no está de acuerdo, violenta sus principios y va en contra de su mirada ideológica de cómo debiera ser Chile.

Lo que corresponde es que en tiempos de campaña, las cosas se digan por su nombre y que cada sector se haga cargo de sus propias definiciones. La DC ha abogado por ocuparse primero de la calidad e ir avanzando de manera responsable hacia la entrega de recursos a las familias, para así hacer posible que obtener un título, no dependa de la capacidad de pago, sino de la capacidad intelectual.

Sólo pedimos que la sinceridad lidere las palabras de las candidaturas y que la honestidad sea el sello de la campaña. Es un paso indispensable para ir recuperando la confianza y la credibilidad de la ciudadanía, que de verdad quiere volver a creer en la política, porque ve que en cosas tan claves como la educación de sus hijos, la política tiene mucho que decir.

Las verdades tras la elección de gobernadores

Para nadie es un misterio, que el conglomerado oficialista está a prueba. Cada decisión que hoy se tome, puede fortalecer o debilitar la opción de gobernabilidad que ofrecemos al país versus la Derecha.

También es verdad que la decisión en la Junta de nuestro Partido Demócrata Cristiano, de llevar candidata propia a la primera vuelta, significó para el bloque PS-PPD una traba en la negociación del pacto parlamentario. Es parte de las consecuencias que debemos asumir y enfrentar.

Quien toma palco ante aquello es la Derecha, que sin ningún mérito saca provecho de estas diferencias y al parecer logra aparentar que es un bloque monolítico, pese a que su principal candidato tiene que -día por medio- entregar explicaciones por nuevos antecedentes que demuestran su tendencia a esquivar impuestos a través de paraísos fiscales.

En qué estamos que poco hacemos por preservar, cuidar y proyectar el trabajo del gobierno, nuestro gobierno, y los compromisos que adoptamos ante el país. Por los cuales fuimos elegidos. ¿Qué nos hace pensar que la agenda legislativa pendiente la podemos condicionar a los vaivenes de la contienda presidencial?

Me parece una excusa el argumento de que no es el momento para alinear el bloque, e incluso las características del texto enviado por el Ejecutivo. Lo que presenciamos es que a priori, nos quieren imponer a los parlamentarios regirnos a un escenario electoral. Hoy el escenario no está para ello. No corresponde.

El Partido Demócrata Cristiano ha estado abogando por un proceso de descentralización como compromiso fundamental para el avance hacia una colectividad cada vez más democrática, y ello pasa por la elección directa de las autoridades regionales, que sabemos, bastante han ya condicionado nuestros socios.

Esta Reforma, que incluye la ley sobre elección de los gobernadores fue un compromiso adoptado por la propia Presidenta y en el cual hemos trabajado largamente para dar respuesta a la demanda de más de la mitad del país que vive fuera de Santiago.

Los argumentos para postergar esta tramitación son un mero eufemismo.

Una iniciativa como esta, es un desafío país, un proyecto que sobrepasa las agendas cortoplacistas de los partidos o los propios candidatos y ese proyecto tiene que ver con el programa al que nos comprometimos a apoyar. La verdadera responsabilidad política pasa por respetar el espíritu de nuestros principios y por honrar compromisos; eso es lo que nos ha caracterizado como coalición política por décadas y lo que ha dado gobernabilidad a Chile: la confianza y la lealtad.

No son dos trincheras. No hemos dejado de compartir el sueño de un Chile más solidario y justo.

El adversario real está en la Derecha que quiere todo lo contrario al eje centro izquierda. Entonces, es hora de hablar con verdades y cumplir la palabra empeñada.

Las cuentas de la luz y las paradojas de una buena noticia

Se suponía que era una gran noticia y ciertamente lo es. La entrada en vigencia de la Ley de Equidad Tarifaria permitirá reducir la cuenta de la luz en casi 5 millones de viviendas, lo que se traduce en la práctica en una rebaja mensual promedio cercana al 20% al 80% de los hogares de todo el país.

Se entiende que esta ley se aplicará de manera retroactiva, lo que en algunos casos se traducirá en que las familias pagarán cero peso durante tres meses, para luego estabilizarse a los nuevos valores que regirán para los clientes domiciliarios. Insisto, es una buena noticia, pero no para todos. Hay sectores de Chile que no sólo no recibirán ninguna rebaja, sino que por el contrario, tendrán alzas no menores en la cuenta de la luz.

En Arica la caída será de un 16%, en Biobío 36%, en la Araucanía un 45% menos y en Aysén un 52%. Pero en Coquimbo, la región que represento, se registrará un alza de un 2,7%. Lo más llamativo, es que esta ley fue pensada para llevar justicia a aquellas comunas que han debido hacer sacrificios y aceptar la instalación de plantas de generación eléctrica en sus territorios.

Eso es lo curioso, ya que en la región de Coquimbo se concentra uno de los mayores polos de generación de electricidad en base a energía eólica, el 70% de los 1.305 MW instalado en Chile.

En zonas como Monte Patria habrá un alza de un 14% y de un 11% en Combarbalá, al igual que en Ovalle donde se registra un alza de un 9%. Todas estas comunas no son centros urbanos con altos ingresos, ni menos aún comunas que tengan grandes privilegios o facilidades en otras áreas que pudieran considerarse como “compensación” ante el alza.

Se dijo que esta ley traería un alivio a aquellas familias que enfrentaban una situación económica complicada y que entregaba a la vez un reconocimiento rebaja tarifaria a las comunas que aportan a la generación eléctrica. Eso no pasó con mi región en ninguno de los dos casos, porque se trata de sectores que muestran altos índices de rezagos socioeconómico y que aportan al desarrollo energético de Chile.

Es una pena que la región de Coquimbo, que es un emblema de la generación eléctrica, sea “castigada” con un alza en las cuentas de la luz en medio de una buena política pública que es esta ley de equidad tarifaria. Se nos puede decir que hasta ahora el nivel de precios ha estado ligeramente por debajo del que debería haber sido y que la actual tarifa es una corrección versus lo anterior, pero ese argumento no hace sentido en familias que hacen enormes esfuerzos por salir adelante en condiciones por lo general adversas. Mi región enfrenta problemas serios de acceso al agua potable, conectividad o desarrollo social y, sin duda. Un alza en las cuentas de servicios básicos, no es una buena noticia nunca.

Hay que ver cómo se comporta esta equidad tarifaria y ver si puede ser extensiva a todo el territorio nacional, en la medida en que el precio de la energía siga cayendo de la mano de licitaciones más competitivas y de la introducción de energía más barata como la energía solar, la eólica o la geotermia, que por definición, son energías renovables “gratis” desde el punto de vista de que el combustible es libre de pago, como lo es la luz del sol, el viento o el calor residual de la tierra.

Lo que debe importarnos de todos modos, es que acá hubo una buena política pública y hubo voluntad de sacar este acuerdo en un tema en donde por lejos, se han mostrado avances sustantivamente mejores y más notorios que en el gobierno anterior.

Las deudas con la seguridad laboral

El derrumbe en la mina Delia II en Chile Chico y un accidente en una construcción en la comuna de San Miguel, dejaron un triste saldo: dos mineros atrapados y un obrero muerto, respectivamente. La seguridad laboral es uno de esos temas que nos recuerdan cuán lejos estamos de las economías más avanzadas y que no basta con la exigua fiscalización que tiene el Estado, sino que se requiere de un compromiso mucho más serio de parte de las propias empresas.

El gobierno tuvo que recurrir a la declaración de Estado de Excepción Constitucional ante la incapacidad de la empresa de conducir de manera eficiente las labores de búsqueda.

Es decir, un accidente que es responsabilidad de privados, termina –como siempre– resolviéndolo el Gobierno, tal como ocurrió con el accidente en la mina San José y el rescate de los 33 de Atacama. ¡Y más encima, algunos desubicados critican como si esto se tratara de un show mediático!

En nuestra región y según datos de la Mutual de Seguridad, la tasa de accidentes laborales en las pequeñas y medianas empresas, disminuyó un 14% entre los años 2010 y 2016. La reducción se puede atribuir a las medidas que promovió la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de este gobierno.

A contar de la ratificación del Convenio 187 de la OIT, se ha ido paulatinamente aumentando la inversión en prevención, seguridad y salud laboral. El hecho de que

nuestra región muestre tales avances en un segmento que suele quedar rezagado de las buenas noticias, es indicativo de que ha habido un real involucramiento de la comunidad en mejorar estos estándares, para beneficio de nuestros trabajadores.

Demás está decir que son muchos los accidentes laborales que son total y completamente evitables si se adoptaran medidas de prevención, seguridad, pero también si se aplicaran bien las normas de respeto a los derechos laborales. En sectores como el transporte, la agricultura o la minería, este tema cobra especial importancia, al punto que debería ser tema casi obligado de las negociaciones colectivas.

Debemos apostar por la prevención y por el respeto de la normativa de protección laboral. No queremos más mineros enterrados, obreros muertos o personas afectadas por cumplir con su trabajo. Esto depende en buena parte de las propias empresas, ante una fiscalización que es insuficiente.

Las ideas de derecha no van con la DC

El 2 de julio es la fecha en que teóricamente los chilenos podrían ir a las urnas para participar de las primarias legales y así definir los candidatos que irían a la elección presidencial de noviembre. Es un ejercicio de profunda convicción democrática, donde se deposita una enorme cuota de confianza a la gente para que participe desde el primer momento en la toma de decisiones de los conglomerados políticos.

De hecho, el país invirtió grandes esfuerzos y recursos para contar con esta herramienta, también como parte de una agenda que permitiera ir recuperando el prestigio y confianza en la política.

Lamentablemente, el debate hasta ahora al interior de la DC se ha centrado en mantener la tensión con la Nueva Mayoría respecto de si seremos parte o no de la primaria del sector. Ni el tono ni el fondo de la discusión nos está haciendo bien a ninguna de las partes, principalmente porque después de tanto discurso y debate en el Congreso, ahora aparecen varios que no creen en que las primarias legales sean un instrumento que valide nuestra forma de hacer política frente a la ciudadanía.

La campaña electoral está llevando a la DC a una situación francamente incomprensible: terminar siendo el único partido que no está dispuesto a medirse en una primaria.

La derecha ha anunciado hasta ahora su voluntad de elegir a su candidato en una primaria, lo mismo han hecho los partidos PPD, PS y Radicales quienes han insistido en el

uso de esta herramienta. Por otro lado, el Frente Amplio al menos está debatiendo la opción de una consulta ciudadana si no pueden cumplir con los requisitos de la primaria legal.

¿Y la DC? No somos pocos los que hemos insistido en el partido que la primaria nos permite mantener unida a la coalición, nos permite allanar el camino a un pacto programático y electoral que sea responsable y viable para cada partido.

El riesgo del fin de la Nueva Mayoría no tiene que ver tanto con el fin de una lista parlamentaria y si el debate se reduce a eso, quiere decir que la Nueva Mayoría no es más que una máscara, cosa que rechazo de plano. Un quiebre en nuestra alianza pone en riesgo el proyecto político en el que hemos trabajado, pone en riesgo las reformas que han cambiado la vida a miles de familias y le abre las puertas a una derecha que sí aparece ante la opinión pública como ordenada y capaz de llegar a acuerdos.

Arrogarse la representación de todo el electorado DC dando por hecho que votarán por tal o cual candidato en las elecciones, no sólo es un error de cálculo sino que de lectura. La DC no votará por quienes creen que la educación es un bien de consumo, la DC no vota por quienes proponen que la única solución al tema de las pensiones es que la gente trabaje más años. Suponer que el electorado DC preferirá las ideas del neoliberalismo antes de un proyecto de centro izquierda del que hemos formado parte y en que hemos puesto también nuestro sello, habla de lo poco conectada con el partido que están algunas voces que ligeramente anuncian el apoyo a Piñera.

La DC no es neoliberal, la DC no cree que los derechos sociales deban reemplazarse por un “ticket de cambio”. La DC cree en ciudadanos más que en consumidores. Esa impronta la hemos dejado impresa en cada proyecto de ley y cada reforma que se ha aprobado en el Congreso y en las Presidencias que hemos ejercido desde el retorno a la democracia.

Por eso, el mejor camino para una DC que quiere influir y que quiere seguir proponiendo y aportar al desarrollo de Chile, es seguir formando parte de un pacto político que ofrezca a nuestros compatriotas un país más inclusivo y justo. Las ideas de derecha, van para otro lado.

Las verdades tras la elección de gobernadores

Para nadie es un misterio, que el conglomerado oficialista está a prueba. Cada decisión que hoy se tome, puede fortalecer o debilitar la opción de gobernabilidad que ofrecemos al país versus la Derecha.

También es verdad que la decisión en la Junta de nuestro Partido Demócrata Cristiano, de llevar candidata propia a la primera vuelta, significó para el bloque PS-PPD una traba en la negociación del pacto parlamentario. Es parte de las consecuencias que debemos asumir y enfrentar.

Quien toma palco ante aquello es la Derecha, que sin ningún mérito saca provecho de estas diferencias y al parecer logra aparentar que es un bloque monolítico, pese a que su principal candidato tiene que -día por medio- entregar explicaciones por nuevos antecedentes que demuestran su tendencia a esquivar impuestos a través de paraísos fiscales.

En qué estamos que poco hacemos por preservar, cuidar y proyectar el trabajo del gobierno, nuestro gobierno, y los compromisos que adoptamos ante el país. Por los cuales fuimos elegidos. ¿Qué nos hace pensar que la agenda legislativa pendiente la podemos condicionar a los vaivenes de la contienda presidencial?

Me parece una excusa el argumento de que no es el momento para alinear el bloque, e incluso las características del texto enviado por el Ejecutivo. Lo que presenciamos es que a priori, nos quieren imponer a los parlamentarios regirnos a un escenario electoral. Hoy el escenario no está para ello. No corresponde.

El Partido Demócrata Cristiano ha estado abogando por un proceso de descentralización como compromiso fundamental para el avance hacia una colectividad cada vez más democrática, y ello pasa por la elección directa de las autoridades regionales, que sabemos, bastante han ya condicionado nuestros socios.

Esta Reforma, que incluye la ley sobre elección de los gobernadores fue un compromiso adoptado por la propia Presidenta y en el cual hemos trabajado largamente para dar respuesta a la demanda de más de la mitad del país que vive fuera de Santiago.

Los argumentos para postergar esta tramitación son un mero eufemismo.

Una iniciativa como esta, es un desafío país, un proyecto que sobrepasa las agendas cortoplacistas de los partidos o los propios candidatos y ese proyecto tiene que ver con el programa al que nos comprometimos a apoyar. La verdadera responsabilidad política pasa por respetar el espíritu de nuestros principios y por honrar compromisos; eso es lo que nos ha caracterizado como coalición política por décadas y lo que ha dado gobernabilidad a Chile: la confianza y la lealtad.

No son dos trincheras. No hemos dejado de compartir el sueño de un Chile más solidario y justo.

El adversario real está en la Derecha que quiere todo lo contrario al eje centro izquierda. Entonces, es hora de hablar con verdades y cumplir la palabra empeñada.

Latinoamérica no es un pueblo al sur de EEUU

En los 80, el grupo de rock Los Prisioneros hizo famosa su canción “Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos” que reflejaba muy bien cómo era la relación de los países del área respecto de los dictámenes de Washington, lo que a su vez era resultados de los resabios de la Guerra Fría. Efectivamente, durante décadas, América Latina sufrió la intervención directa de EEUU inclusive derribando gobiernos mediante golpes de estado financiados por la CIA y poniendo dictaduras títeres funcionales a la potencia del norte.

Han pasado varios años y el orden mundial es muy distinto, ya no con dos potencias que se reparten el mundo, sino con una serie de bloques políticos que representan cosas bien distintas en el concierto político internacional. Incluso, dentro del mismo EEUU, las visiones contrapuestas entre un Barack Obama - aperturista y profundamente democrático - y Donald Trump, que apoya el encierro y el proteccionismo a ultranza, han hecho que ese país se vuelva un agente de discordia difícil de llevar para las diplomacias de estos tiempos.

Ya no sólo se trata de Rusia y Estados Unidos, ahora también se trata de China y de la Europa liderada por Alemania, que es hoy el símbolo más nítido de la defensa de la democracia, los derechos humanos, la tolerancia y la lucha contra todo tipo de odio y discriminación. Ahora también tenemos al radicalismo islámico que cierne una amenaza global al mundo civilizado.

En suma, ya no hay dos polos, sino muchos focos que nos obligan a mantener una posición clara, coherente y nítida respecto de las cosas y temas que nos importan como nación.

Una señal de eso, es la respuesta que el Gobierno y la Presidenta entregaron a la imposición que el Vicepresidente de EEUU pretendía con Chile respecto de las relaciones que tenemos con Corea del Norte y Venezuela. Fue un rotundo No.

Tal como lo hiciera años atrás el ex Presidente Lagos cuando Tony Blair quería que Chile apoyara la guerra sin fundamentos contra Irak, Chile ha demostrado que en materia de relaciones internacionales, no se deja amedrentar por otros países, por muy potencias que sean.

Tenemos definiciones claras: no apoyamos golpes de Estado, no apoyamos intervenciones militares, no apoyamos derrocamientos basados en mentiras u operaciones de fachada, no apoyamos la violación a los derechos humanos cualquiera que sea el lugar o gobierno.

Por lo mismo, Chile debe ejercer ese rol con más ímpetu cada vez que vemos situaciones en donde los derechos fundamentales de las personas son violados. Puntualmente en Venezuela, cualquier uso de la fuerza externa o interna no haría más que acelerar el proceso de instauración de una dictadura para Maduro. Pero eso no quiere decir que debamos ser tolerantes y contemplativos con el fuerte deterioro de la convivencia y la democracia en ese país.

Ya no somos un pueblo al sur de los Estados Unidos que acata las órdenes que emane el presidente de turno en la Casa Blanca. Ahora somos un conjunto de naciones que aprendió la dolorosa huella del intervencionismo de la Guerra Fría y que ante eso, ha optado por defender la institucionalidad y el imperio del derecho internacional.

Puesto así, más que nunca cobra sentido esta idea de que Chile es y será siempre un asilo contra la opresión.

LEGISLAR PARA LA GALERÍA

Actualmente, hay dos formas perjudiciales para el trabajo y los resultados del proceso legislativo: discutir leyes en caliente o hacerlo para la galería.

Lamentablemente, el debate de la agenda corta antidelincuencia acusa la presencia de ambos vicios. Por años y a diario, percibimos el recrudecimiento de hechos delictivos con formas cada vez más violentas de atentados contra las personas y la propiedad. Es por eso necesario que tengamos altura de miras para tratar el tema, no apostar por un debate sólo marcado por la contingencia. Dentro del Parlamento, actualmente podemos encontrarnos con congresistas que sí están legislando para la galería respecto las modificaciones al texto sobre control preventivo de identidad. Esto no tiene nada que ver con la detención por sospecha. Insistir en esa caricatura es actuar con ligereza ante el trabajo legislativo.

La Nueva Mayoría está formada por quienes nos opusimos -durante el régimen de Augusto Pinochet- a la detención por sospecha por constituir un elemento de estigmatización de los más vulnerables y una falta flagrante a los Derechos Humanos. Y eso no ha cambiado; tal disposición pretende defender los derechos individuales, incluyendo una serie de garantías y facilidades para cumplir con un trámite tan sencillo como que la policía pueda certificar debidamente la identidad de una persona.

Esta práctica no conlleva criminalización; busca resolver el serio problema de las miles de órdenes de detención pendientes y, además, elevar la percepción de seguridad en la ciudadanía. La norma estudiada establece una serie de resguardos para evitar eventuales abusos y dotar a Carabineros de una herramienta que permita verificar la identidad de una persona a través de protocolos explícitos para su actuar. Esto es una prueba palpable de que hemos aprendido sobre los errores del pasado, y es a la vez una deuda pendiente que debemos saldar con la ciudadanía.

Por eso insisto; no caigamos en la tentación de legislar para la galería. Parece muy popular, muy rentable acusar el fin de las libertades personales, la claudicación ante un fantasmal "Estado policial". Esto es una completa irresponsabilidad. Un Estado policial, como el instaurado por la dictadura, es el que permitió la operación de grupos uniformados al margen de toda ley. Nada de eso está en debate hoy en día. El ojo fiscalizador del Estado se ubica sobre cada acción de los cuerpos policiales, por lo que cada abuso o falta de criterio será perseguido con igual ahínco que la propia lucha contra la delincuencia.

Parece ser que se pierde de vista que el aumento de la criminalidad es en sí misma una pérdida de la libertad de las personas, de transitar por la calle con seguridad, y en cambio habitar verdaderas jaulas. Es importante que pongamos ante todo los intereses de la mayoría de la población por sobre otras consideraciones. La lucha contra el delito es una prioridad y en ese sentido, se plasman las garantías necesarias para un correcto debate legislativo, porque existe un problema real que resolver ante el aumento de éstos. No hay tiempo para desfigurar la discusión.

Urge dar soluciones al país y asumir nuestra responsabilidad política.

Parece muy popular, muy rentable, acusar el fin de las libertades personales, la claudicación ante un fantasmal "Estado policial".

Ley de medicamentos: no más "aspirinas"

Por estos días, estamos debatiendo en el Congreso el proyecto de ley que fomenta la disponibilidad de los medicamentos genéricos bioequivalentes en el mercado farmacéutico, de modo de entregar más y mejores opciones a las personas para tener un mejor acceso a la salud. Bien sabemos que Chile se caracteriza por ser uno de los países de América con los precios más altos en los medicamentos, hecho que se ha visto agravado con conductas como la colusión de las farmacias que se vio hace unos años, por ejemplo.

En lo esencial, este proyecto establece que las recetas médicas deberán prescribir los medicamentos según su denominación común internacional, para fortalecer la promoción del uso de los genéricos y no los productos con marcas específicas que suelen ser más caros. Las farmacias, por ende, tendrán la obligación de informar al público las alternativas de medicamentos intercambiables, de modo de garantizar el derecho a elegir de manera libre e informada.

Asimismo, la iniciativa regula áreas claves como el fraccionamiento de medicamentos, o la imposición a los laboratorios a publicar los precios de sus productos y los descuentos que pesan sobre ellos ante compras masivas, así como el deber de los productores, importadores o distribuidores de productos farmacéuticos, de informar sobre cualquier

situación que altere el abastecimiento de medicamentos, ya sea por decisión voluntaria o por circunstancias especiales de mercado.

Estas normas resumen de buena manera el espíritu de la ley que se está tramitando en el Congreso y que hasta ahora, ha tenido el apoyo mayoritario de las bancadas de los partidos de la Nueva Mayoría y el rechazo de buena parte de la oposición.

Lo relevante es que todo lo que hemos estado promoviendo en este cuerpo legal, tiene por objeto mejorar los niveles de información con que cuenta el consumidor y en especial los pacientes. Esta no puede ser una industria opaca, con áreas oscuras ni menos con falencias en materia de transparencia.

Chile paga uno de los precios más altos por los medicamentos en el continente y es por ello que fue necesario intervenir. Aquí, todos los sectores involucrados en el tema deben poner de su parte para llevar mejores precios y mejores oportunidades de comercialización de productos tan claves para la salud de la población. El foco debe estar puesto en las personas, en su salud y no en negocios de laboratorios o proveedores, por muy legítimos que sean.

Nadie está poniendo en cuestión la legitimidad de esta industria, pero lo que corresponde a un Gobierno es velar por el acceso de la gente a medicamentos más baratos y de buena calidad. Es que ahí es donde chocan las visiones del mundo progresista frente a la derecha: para nosotros, los medicamentos no son un bien más de consumo ni un producto más que se vende en el mercado.

Si fuera así, los más pobres tendrían que conformarse con “aspirinas” para enfrentar dolencias complejas y eso es tremendamente injusto y condenable desde un punto de vista ético y político. Esta legislación es un intento por emparejar la cancha y traer algo de equilibrio a un sector en donde muchas veces, tener plata es la diferencia entre la vida y al muerte. Una vez más, estamos reduciendo los espacios de abusos contra las personas.

Lo que se juega este domingo es el tipo de país de nuestras familias a futuro. No se trata de lo inmediato, sino del legado a los chilenos, porque gobernar es más que administrar el Estado.

Ejerciendo el derecho a voto, eres parte de las decisiones respecto al tipo de país que quieres, más allá del signo político. El voto debe ser informado respecto a qué opción es la que permite construir condiciones de vida mejor, un Estado que sea capaz de garantizar derechos básicos como salud, educación y vivienda.

Y es que al contrario de lo instalado en el colectivo, el quehacer en política tiene menos que ver con partidos o cuoteo, y sí con el tipo y calidad de trabajo que tendrán las personas en las grandes ciudades y en los pequeños pueblos, con el acceso al agua de los agricultores, con las medidas para apoyar a los pequeños mineros o a los emprendedores.

En la política se define si vamos a usar nuestros recursos para generar riqueza o dejar pasar el desarrollo por la vereda del frente.

Fue la política la que permitió impulsar las energías renovables, la construcción de hospitales y centros de salud.

Fue la política la que dio más opciones a las mujeres de defender sus derechos reproductivos y reforzar sus derechos como madre trabajadora.

Eso es lo que se juega este domingo. Y no votar, no interesarse, es renunciar a participar del debate acerca de cómo y hacia dónde va el país, si las cosas se están haciendo bien y sobre cómo estas decisiones afectan nuestras vidas.

Es renunciar a ser parte activa del proceso para hacer las mejoras que se requieren.

Porque si exigimos cambios, lo mínimo es ejercer el más básico de los derechos y obligaciones civiles, como lo es el sufragio.

No votar es dejar que otros decidan por mí.

No votar es ratificar lo mismo que se critica: que su voz no vale nada. Eso es lo que hay que combatir.

Los consumidores primero

El proyecto que fortalece al Servicio Nacional del Consumidor se va a aprobar. No sólo porque ya queda muy poco de su tramitación en el Congreso, o porque fue un compromiso de nuestro programa, sino que principalmente porque es una herramienta necesaria, dado los constantes casos en que el comportamiento de algunas empresas ha contravenido una larga tradición de honestidad y transparencia que ha caracterizado al mercado chileno.

Esta iniciativa sufrió un innecesario retraso, inexplicable incluso a la luz del cambio de ministro, pues esta iniciativa es en sí misma un buen proyecto, discutido largamente, y que ya tenía el acuerdo unánime de los comités parlamentarios para despacharlo completamente.

No dudo que la Presidenta de la República entiende la relevancia de mejorar la legislación que protege los derechos de las personas como consumidores, más aún cuando no se apagan los ecos de las sonadas colusiones que han protagonizado empresas que tienen ingresos enormes. Por eso es que está más que claro que octubre será el mes en que terminemos su tramitación y tengamos un nuevo compromiso cumplido.

Dos cosas esenciales pasarán con esta nueva ley. Por un lado, las empresas estarán obligadas a responder los reclamos de los usuarios a diferencia de lo que ocurre hoy que, sólo depende de la voluntad del empresario hacerse cargo de las demandas que haga una persona o un grupo de consumidores. Además, se extiende el plazo de tiempo en que se puede hacer reclamaciones lo que permitirá reducir los desincentivos que hoy en la práctica limitan los reclamos de las personas.

Lo segundo importante, es que el Sernac dejará de ser un organismo decorativo, un “león sin dientes”, para obtener facultades sancionatorias en casos en los que se defraude la fe pública y se atropellen los derechos de la gente que paga por un servicio o un bien.

Para eso, el proyecto también contempla el aumento de multas y dotar de todas las herramientas para impedir malas prácticas de parte de empresas que no cumplan con las condiciones mínimas que ofrecen a sus clientes.

Por supuesto que hay sectores que no quieren que se avance en estas materias. Pues es ya una norma que cada vez que las empresas son interpeladas o compelidas a dar fiel cumplimiento a la ley y sus obligaciones respecto de sus externalidades, es un sector el que acusa el golpe.

Sabemos que no se pueden oponer de manera pública y clara a una idea tan nítida de defensa de las personas. Lo contrario sería un suicidio político, pero es necesario dejarlo en claro, no han sido sectores de derecha los que han impulsado la idea de empoderar a los consumidores, sino todo lo contrario.

Y es por eso que se requiere que el Gobierno entregue las señales adecuadas a la ciudadanía: es el sector de centro izquierda el que ha empujado esta agenda, con la oposición innecesaria de ciertos grupos empresariales. Lo claro es que si una empresa cumple sus deberes, es honesta en su trato con sus clientes, se hace cargo de las consecuencias de sus acciones, entonces no debe temer absolutamente nada con la nueva ley.

El comercio descansa única y exclusivamente en una idea: la buena fe de que lo que estoy recibiendo a cambio de mi dinero, es justamente lo que se me ha ofrecido. Sin engaños, sin letra chica.

Hay espacios para observaciones de última hora, pero para lo que no hay espacios es para renunciar a legislar sobre los abusos. Ya la gente no hace vista gorda a las malas prácticas y engaños. Para muchos, el consumo puede ser una cosa de lo más normal, pero para millones de personas, los recursos que se destinan a las cosas esenciales de la vida moderna, son escasos y no se pueden dar el lujo de pagar sobrepagos, o pagar por productos y servicios deficientes.

Es hora de poner al consumidor primero. Y hay que hacerlo ya.

Manejo económico pro empleo

El Ministerio de Obras Públicas pasó de tener un presupuesto en 2014 de 5 mil millones de pesos a más de 26 mil millones en 2016. Esto ha posibilitado tener una respuesta muy contundente en materia de mejoramiento de infraestructura pública, productiva y habilitante para el desarrollo económico del país y de nuestra región en particular.

Esto es particularmente relevante cuando celebramos un nuevo Día del Trabajo, puesto que estas cifras, estos dineros se traducen en puestos de trabajo, directos e indirectos que han permitido aminorar los efectos del mal ciclo económico que nos golpea. Tal vez la gente no lo sepa, pero en el periodo 200-2013 –cuando estaba el gobierno anterior- el crecimiento de los países a los cuales les vendemos nuestras exportaciones fue de más de 7% en promedio. Hoy, en este periodo, esos mismos países han crecido poco más de un 1%, por lo que comparar ambas situaciones no sólo es inexacto, sino injusto.

Como el ciclo económico que le ha tocado a este gobierno es malo, se ha tratado de revertirlo con inversión pública en obras que son de largo aliento. Nuestra región las ha visto y ha tenido importantes cambios.

Algunos ejemplos: se han levantado 16 caletas pesqueras, las obras del Túnel de Agua Negra, más de 1.000 kilómetros de caminos rurales o básicos, la doble vía La Serena Vallenar o la ejecución de la doble vía en la ruta Ovalle La Serena, que estará lista en 2018.

En el Congreso se logró aprobar la ley impulsada por este Gobierno servicios sanitarios rurales que va a favorecer a las familias que dependen de los más de 189 sistemas de agua potable rural. Esto es especialmente relevante en una región como la nuestra que tiene serios problemas de sequía y de acceso al agua en zonas aisladas. Hay muchas más obras que son esenciales para nuestra zona, como los embalses, caminos, reposición de infraestructura hospitalaria o proyectos de vivienda, que han conformado una buena batería para evitar que los efectos en el empleo en la región sean más duros de lo que ya han mostrado.

Esta es la muestra de cómo se responde a los ciclos de la economía cuando a un gobierno le importa la gente, más que el mercado. La economía va a mejorar en año que viene sin importar mucho quien gane la elección y por eso es tan interesante saber qué coalición será capaz de mantener ese enfoque puesto en la gente, en los derechos o en esfuerzos por mantener el trabajo. ¡Es cosa de escuchar a los candidatos para darse cuenta!

Un ejemplo: nosotros hemos dicho que queremos instaurar la gratuidad universitaria por ley; otros, que quieren volver a eso de que la educación es un bien de consumo. Es que eso pasa cuando se tienen dos visiones tan distintas del manejo económico: uno pro empleo, pro derechos y otro pro mercado y nada más que mercado.

Maquinaria pesada para la economía local

Éste ha sido un año complejo en materia económica, tanto para la región como para el país en su conjunto. Esta semana el Ministro de Economía hizo su cuenta pública en Guanaqueros y fue él mismo el que llamó la atención acerca de que tenemos que hacer más para impulsar nuestra diversificación productiva y, por esa vía, el crecimiento y el empleo.

Es cierto que el ministro detalló algunas de las acciones que el Gobierno está haciendo en materia de apoyo a las pymes, al emprendimiento y a la capacitación, junto con otros proyectos que pudieran generar algo de innovación en áreas como la acuicultura.

En tal sentido, los programas de Centros de Negocios y Barrios Comerciales de Sercotec, los espacios de co-work que impulsa Corfo y otras iniciativas similares, sin duda que representan un impulso y una ayuda para la pequeña empresa, pero cuando hablamos de crecimiento e gran escala y empleo de calidad, bien remunerado, pareciera ser que requerimos esfuerzos mayores.

La vocación productiva de la región de Coquimbo sin duda que descansa en rubros que generan gran cantidad de trabajo directo e indirecto, como la pesca, el turismo, la agricultura y –de manera especial- la minería. En tal sentido, lo que ocurrió con minera Dominga pone una gran cuota de incertidumbre respecto de si estamos permitiendo que las regiones persigan su vocación productiva, sin interferencias desde Santiago.

Las obras de reconstrucción tras el terremoto nos permitieron recuperar y prácticamente normalizar nuestra producción pesquera. Resta resolver el problema de la escasez de agua para una agricultura y ganadería más intensas y sopesar cuál va a ser el papel de la minería en nuestra región.

Es que no podemos aspirar a grandes cifras de crecimiento de nuestra actividad local, si seguimos apostando a trabajo de hormiga o contentándonos con esfuerzos pequeños y de baja escala. Acá necesitamos maquinaria pesada para impulsar el crecimiento y el empleo, de lo contrario estaremos trabajando mucho con resultados de bajo impacto.

Confiamos en que este gobierno y el que siga, van a entender esa necesidad y van a cooperar con medidas que atraigan inversión extranjera y nacional para estimular la economía a un nivel más intenso. Lo bueno de esto es que se han realizado acciones clave para responder de manera adecuada a los desafíos que se nos vienen. La reforma educacional, centros de formación técnica en las regiones y más ayudas para que las familias puedan educar a sus hijos sin desembolsar grandes sumas de dinero, apuntan a tener un capital humano mejor preparado para un mercado laboral más exigente.

Hay que ver quién quiere seguir en esa senda y quien quiere destruir lo avanzado.

Migración y humanidad

Hace pocos días se celebró el Día Internacional contra la Trata de Personas; coincidentemente, el Gobierno anunció un protocolo del Ministerio del Interior para regularizar la situación migratoria de personas que hayan sido objeto de tráfico hacia Chile. Pero esto último no es una señal de nada, más aún cuando se verificó casi al mismo tiempo, la polémica renuncia del director de Migraciones ante las desavenencias con la Subsecretaría de Interior.

La OEA ha indicado que en el último tiempo, la migración en América ha tenido un crecimiento anual de un 5%. De acuerdo a esas cifras, Argentina es el país del área que más inmigrantes reciben, seguido de México. No obstante, el mayor número de personas sigue desplazándose hacia el norte, Estados Unidos y Canadá, lo que da cuenta de las persistentes esperanzas de los latinoamericanos, de encontrar un mejor futuro. Las

restricciones a la migración que surgieron tras la última elección presidencial en Estados Unidos, han hecho que nuevos focos migratorios se hayan abierto.

Chile es uno de ellos y constituye un verdadero boom. La OEA tiene números que indican que el mayor número de extranjeros en Chile son peruanos, seguidos de la migración boliviana y argentina. Pero en los últimos años, los propios chilenos hemos visto cómo la gama de países se ha ampliado: dominicanos, colombianos y haitianos, completan una nutrida fuerza migratoria que ha levantado una fuerte polémica. ¿Debemos aceptarlos a todos?

La pregunta es compleja y la respuesta más difícil aún. Es cierto que lo más popular, lo más fácil y lo que da mayores réditos, es oponerse a la migración. Cerrar las fronteras y culpar de todos los males propios a quienes vienen llegando en busca de una mejor vida.

Pero vamos por parte. La estabilidad política, económica y social de Chile es atractiva para muchos que en otras partes viven fuertes privaciones económicas y hasta políticas. De hecho, Chile cuenta con uno de los mayores PIB de la región y uno de los salarios mínimos más altos, cosa que no siempre es valorada por la propia población local que sigue creyendo que Chile vive en un caos económico que no es real.

Pero en realidad, lo que más preocupa de este flujo migratorio, son las penosas condiciones de vida de muchas de estas personas que, más allá de si consideramos que es justo o no que lleguen a Chile, viven situaciones muchas veces extremas. Un porcentaje no menor de ellos, llegan acá producto del tráfico de personas, del engaño de bandas organizadas.

Se sabe que casi el tercio de las personas que son traficadas en el mundo son niños y niñas. Cerca del 60% son mujeres. Las personas traficadas sufren de la explotación sexual, el tráfico de órganos, la mendicidad y trabajos forzados, trabajo domiciliario no remunerado y una larga lista de atrocidades. Es difícil pedir comprensión y aceptación a los migrantes, sobre todo en tiempos en que se valora esta idea sin fundamentos de que “todos los migrantes son delincuentes que vienen a quitar el trabajo”. Sólo pedimos algo de empatía y comprensión para aquellos niños, niñas, mujeres y hombres de muchas

veces han debido dejar sus casas, su país, buscando una vida sin penurias y que, muchas veces, son maltratados.

Sin ahondar en el tema de fondo que es la política de migraciones moderna que Chile no tiene, nuestro país al menos sí da señales de humanidad e integración que son dignos de destacar. El convenio al que me refería al inicio de esta columna, tiene un elemento muy conmovedor: tendrán prioridad para regularización los niños y niñas hijos de personas que hayan sufrido el tráfico de personas, independiente de la situación de sus padres.

Pero la solidaridad sigue en deuda. Los chilenos seguimos considerando mayoritariamente que la migración es mala o indeseable, según los estudios de opinión. Hay candidatos que han transformado este punto de vista en un punto de campaña que da dividendos fáciles e inmediatos, pero sigue latente la pregunta de si los migrantes se merecen la falta de empatía, de solidaridad y de humanidad que muchas veces nos pesa a los seres humanos. Hay que hablar mucho y derribar muchos mitos y miedos infundados porque, si bien hay migrantes que cometen delitos, eso no es una realidad mayoritaria. Es como decir que los chilenos por el mundo son mayoritariamente delincuentes, cosa que no es cierta. Lo mismo vale para los que llegan a Chile.

Migración y nación humanitaria

Cada cierto tiempo, el movimiento migratorio se torna de interés para la opinión pública. En los últimos días, el fenómeno ha mostrado distintos ángulos, algunos de ellos lamentablemente han mostrado aires de xenofobia y otros parecen ser sólo una estrategia electoral, lejos de ser un aporte.

Y es que éste es un asunto que va más allá del discurso - inclusivo o excluyente - porque es una realidad. El discurso se divide en trincheras, la realidad es una sola y la misma, independiente del signo político del gobierno de turno.

Se cuestiona la real la voluntad política, motor que muchos esperan de las autoridades para insistir y sacar adelante la respuesta a una demanda específica. En este punto, el Estado ha recogido el guante y trabaja para ello. Los chilenos ¿lo hemos hecho?

En eso se ha centrado el trabajo de la instancia que integro como parte de la Mesa directiva del Parlatino, donde se empuja un marco de ley común tanto para Latinoamérica como Europa y es que es un tema global, no local.

Mirarse el ombligo en este ámbito, sólo demuestra que no hemos entendido que estamos viviendo en una sociedad globalizada. Y para Chile esto es importante porque vamos a discutir el proyecto que el Ejecutivo prepara respecto a establecer y garantizar los derechos de los migrantes, en cuanto a educación, acceso a salud y vivienda, por ejemplo.

Esta misma cobertura devela la naturaleza del tipo de política pública pertinente: una transversal, no sólo respecto a seguridad pública, como algunos han buscado enfocar la migración, insistiendo en que es una problemática.

La OEA ha indicado que en el último tiempo, la migración en América ha tenido un crecimiento anual de un 5%. Por cierto que hace falta ahondar en el rol del Estado, en la necesidad de una política de migraciones moderna que Chile no tiene, que se está esperando y formulando hace tiempo, eso también es una realidad.

Pero este no es un asunto que sólo se trate desde la institucionalidad. En la solución también está que nuestro país entregue señales del nuevo Chile que existe, con la necesaria integración de migrantes.

Ya se dio un paso básico al establecer que tendrán prioridad para regularización los niños y niñas hijos de personas que hayan sufrido el tráfico de personas, independiente de la situación de sus padres.

Pero la solidaridad sigue en deuda. Los chilenos seguimos considerando mayoritariamente que la migración es mala o indeseable, según los estudios de opinión.

Hay candidatos que han transformado este punto de vista en un slogan de campaña que da dividendos fáciles e inmediatos, y sigue latente la pregunta de si los migrantes se merecen la falta de empatía, de solidaridad y de humanidad que muchas veces nos pesa a los seres humanos.

Una candidatura, un rumbo

¿Se imagina si usted tuviera dos manos izquierda o dos manos derecha? Sería realmente imposible hacer prácticamente cualquier cosa sin provocar algún tipo de desastre. Esa es más o menos la paradoja que se está dando en lo que va de campaña en el seno de la Nueva Mayoría, donde unos se sacan en cara la izquierdización o la derechización del bloque.

Si la analogía sirve de algo es para reflejar lo que ha hecho esta alianza política en Chile desde el retorno de la democracia: juntar lo mejor del mundo de la centro izquierda, el

progresismo laico y el humanismo cristiano, para ofrecer a Chile una receta de economía a escala humana, un Estado que se hace cargo de los agudos problemas sociales que provoca el mercado sin control y una mirada integradora de la sociedad donde pensamos en derechos y no en bienes de consumo.

Es sensata una tregua para concentrarse realmente en lo que importa, que es mostrar nuestras profundas diferencias con una derecha que ve todas las soluciones en el mercado, que cree que no debe haber regulación a los poderosos, que piensa que es mejor la idea del voucher a la idea del derecho social y que incluso, –en algunos de sus exponentes- no muestra una idea moderna de lo que es la democracia, la participación y la integración social.

Es que no es mentira que entre las candidaturas de Carolina Goic y Alejandro Guillier, tenemos demasiadas cosas en común. Es nuestra mirada en temas como la salud, educación, economía, y sistema previsional, lo que en realidad nos distancia de la visión casi mercantilista que desfila en la vereda de la derecha.

Mi partido debe concentrarse en mejorar la llegada a la ciudadanía, la conexión con el electorado y gastar menos tiempo en provocar y protagonizar disputas que no nos han beneficiado en nada. De hecho, los números en las encuestas no han mejorado después de estar envueltos en peleas con Guillier, así que esa estrategia parece ser errada.

El partido tomó la decisión de levantar una candidatura independiente y lo que corresponde ahora, es asumir esa responsabilidad y llegar a la elección entregando nuestro mensaje de manera nítida y clara a la ciudadanía. El resto, es perder el tiempo.

Tenemos que dar a conocer nuestra propuesta programática, mostrar nuestras convergencias con el mundo de centro izquierda y la diferencia frente a la derecha, demostrar que somos una alternativa que da gobernabilidad y que representa mejor a la gente que quiere cambios con mesura, con sensatez y con la capacidad de llegar a acuerdos que sean duraderos en el tiempo.

Esa es nuestra fortaleza. Cambios bruscos o logrados con mayorías circunstanciales, pueden sucumbir con los cambios de signo gubernamental, afectando la credibilidad del sistema político y generando pequeñas crisis que la gente sencillamente no se merece. La DC tiene mucho que decir y ofrecer a un país que está agotado de la política. Queremos hacerlo desde la sobriedad que nos ha caracterizado en política y con el aprendizaje que nos dejaron grandes hombres como Frei padre, Frei Hijo, Aylwin y tantos otros: convocando y no generando divisiones, aunando fuerzas y no generando odiosidades, ofreciendo un país más solidario y no centrarnos en las diferencias. Ese es nuestro aporte y el que debe ser nuestro rumbo.

A votar

Lo que se juega este domingo es el tipo de país de nuestras familias a futuro. No se trata de lo inmediato, sino del legado a los chilenos, porque gobernar es más que administrar el Estado.

Ejerciendo el derecho a voto, eres parte de las decisiones respecto al tipo de país que quieres, más allá del signo político. El voto debe ser informado respecto a qué opción es la que permite construir condiciones de vida mejor, un Estado que sea capaz de garantizar derechos básicos como salud, educación y vivienda.

Y es que al contrario de lo instalado en el colectivo, el quehacer en política tiene menos que ver con partidos o cuoteo, y sí con el tipo y calidad de trabajo que tendrán las personas en las grandes ciudades y en los pequeños pueblos, con el acceso al agua de los agricultores, con las medidas para apoyar a los pequeños mineros o a los emprendedores.

En la política se define si vamos a usar nuestros recursos para generar riqueza o dejar pasar el desarrollo por la vereda del frente.

Fue la política la que permitió impulsar las energías renovables, la construcción de hospitales y centros de salud.

Fue la política la que dio más opciones a las mujeres de defender sus derechos reproductivos y reforzar sus derechos como madre trabajadora.

Eso es lo que se juega este domingo. Y no votar, no interesarse, es renunciar a participar del debate acerca de cómo y hacia dónde va el país, si las cosas se están haciendo bien y sobre cómo estas decisiones afectan nuestras vidas.

Es renunciar a ser parte activa del proceso para hacer las mejoras que se requieren.

Porque si exigimos cambios, lo mínimo es ejercer el más básico de los derechos y obligaciones civiles, como lo es el sufragio.

No votar es dejar que otros decidan por mí.

No votar es ratificar lo mismo que se critica: que su voz no vale nada. Eso es lo que hay que combatir.

No echarlo a perder

¿Dónde se fue el centro político? La elección presidencial y parlamentaria arrojó números que es necesario evaluar con calma, con una enorme dosis de mesura e idealmente, con

COLUMNAS PUBLICADAS DEL H. SENADOR JORGE PIZARRO SOTO. AÑO 2017

algo de tiempo y distancia. Pero no tenemos ni tiempo ni distancia, porque la segunda vuelta está a menos de un mes y las primeras conclusiones en caliente, indican que el centro político quedó desplazado, poco nítido o capturado en medio de posiciones más maniqueas.

Da la impresión que el escenario de ayer es prácticamente idéntico al de 2009. La derecha en su 44%, la Nueva Mayoría/Concertación al borde de los 27 puntos y un Frente Amplio que obtiene los mismos votos que logró Marco Enríquez-Ominami en esa elección que finalmente terminó ganando la derecha por primera vez.

Puesto así, la derecha por un lado se ve muy nítida atrincherada en lo que han sido sus postulados de siempre: más mercado, más individualismo, poco Estado y propensa a defender agendas valóricas conservadoras y cuestionadas en materia de derechos humanos.

En la otra banda, una izquierda fraccionada, con un espectro que va desde el bloque Nueva Mayoría hasta posturas más extremas como las propuestas de Navarro y Artés. Pero el centro, que esta vez se suponía quedaría representado por la lista de la DC, quedó relegada a una indesmentible mala votación. Quienes abogamos desde siempre por insistir en un acuerdo dentro de las fuerzas de centro izquierda y evitar el camino propio, intuíamos que esto podía pasar, porque las agendas de la derecha y de la izquierda, estaban tornándose confrontacionales, más allá de lo que el centro político podía absorber.

Lo que interesa ahora es ver cómo se va a dar gobernabilidad a quien le toque estar en La Moneda a contar del año que viene, porque hay que aclarar que es falsa esta tesis que planteó Piñera de que ya tiene una mayoría relativa que le permitirá gobernar bien. Eso no es así y lo que le va a pasar si es que llega el gobierno, es que no podrá pasar ningún proyecto de ley relevante al no tener ni siquiera mayoría simple.

El panorama no es más fácil en las corrientes de centro izquierda y es por eso que cobra tanta relevancia el llamado que hizo la Presidenta Bachelet a la unidad del mundo progresista. No es fácil y el riesgo de correrla misma suerte que en la elección en la que

ganó Piñera por primera vez: la dispersión de votos y el rechazo de unos a apoyar al candidato de la Nueva Mayoría.

Personalmente creo que lo único que tiene sentido en este minuto es respaldar a Alejandro Guillier. Al menos desde la DC, hay que entender que el partido sí tuvo un fracaso, pero sigue vivo y sigue siendo relevante para la construcción de los acuerdos futuros.

Son varias las cosas que deben confluir para que ese 55% de la centro izquierda se una en un proyecto común que derrote a la derecha, pero no se saca nada con dar consejos ni mandar mensajes por la prensa.

Lo que sí debe ocurrir, es que no haya soberbia ni intentos de mirar a los vencidos con el más mínimo de desdén. Tampoco es recomendable renunciara los proyectos y a la identidad que cada cual representa. Malo sería que la discusión partiera o terminara en repartija de cargos y cosas similares. Parece que lo sensato es tomar aire, hablar y escuchar lo que cada uno tenga que decir y despejar muy bien las aspiraciones de cada sector político del progresismo.

Ya vendrán los espacios para la reflexión de los errores y los aciertos, ya vendrá el momento incluso de las recriminaciones, pero para lo que no hay mucho tiempo, es para detener el proyecto revanchista que la derecha ha estado alimentando cada vez que se ha opuesto a las reformas que fueron espaldadas por una mayoría clara en las urnas el pasado domingo.

El tiempo cuenta y la gente está esperando una propuesta sensata, responsable y realista para frenar el retroceso que representa Piñera. La centro izquierda es mayoría en Chile y no hay que echarlo a perder.

No es slogan, aborto en tres causales

Hoy, en una sociedad que ha avanzado notablemente no sólo en temas de ciencia y tecnología, sino que también en materia de conocimiento y humanismo, parece infundada cualquier diferencia entre hombres y mujeres.

Pero sigue siendo necesario y justo llevar una agenda política que corrija la desigualdad de derechos de las personas, y ello va más allá de lo que han buscado encasillar como “ideología de género”, en una lógica que descontextualiza este objetivo.

Pero la despenalización de la interrupción del embarazo bajo las tres causales que hemos discutido latamente en el Congreso Nacional por iniciativa del Ejecutivo, no se aboca a resguardar el derecho a la mujer de elegir abortar. Por ello insisto, este texto no apunta ni tiene que ver con la valoración que nuestra sociedad hace del aborto. Eso no está en discusión, sin embargo, parece haberse centrado en aquello.

Debemos tener en cuenta que lo que estamos legislando no es más que una respuesta al imperativo de dar acceso equitativo a muchas mujeres que día a día se enfrentan a hechos tan delicados como estas tres causales. Entonces podemos hablar también de un asunto de salud pública e igualdad, que bajo estas tres circunstancias especiales se transforman en un asunto social.

Es en tal sentido que el Gobierno envió un proyecto que ha sido trabajado por todos los sectores y que para las circunstancias descritas es razonable. Ello porque recoge las visiones no sólo de los sectores con representación en el parlamento, sino de la sociedad civil y las distintas iglesias. Y es que cuando se trata de realidades tan dramáticas como las consideradas, no podemos cerrar la decisión a un tema netamente valórico, moral o de salud pública y derecho femenino. Esto es sin poner etiquetas, sin marketing, sin una bandera. Es transversal.

Pero esa altura de miras que debemos tener es la que estuvo ausente durante el debate que vimos en ambas cámaras dando paso, en algunos casos, a un argumento que caricaturizaron las situaciones de excepción. Lamentable.

Bajo el alero de convicción moral - que merece todo el respeto y consideración - se esgrimieron razones que rayaron en lo inconcebible, como referirse al autor de la violación como el progenitor y padre de la creatura. Estamos hablando de un hecho violento y no de amor, y este argumento no sólo agrede a las mujeres y en algunos casos, niñas que han sufrido aquella situación, sino que a toda nuestra sociedad en su conjunto.

¡Cuánto daño hacen estas razones a un país que no necesita leyes que laceren su bienestar! Nadie debe ser obligado a lo impensable, ser objeto de violación y además, convertirse en delincuente, todo en medio de un drama tan agravante, que en su mayoría afecta a las familias más vulnerables que no tienen alternativa.

El PDC está en contra del aborto libre y en eso no ha habido un cambio de postura. Sí algunos en conciencia hemos concurrido con nuestros votos y apoyo político en estas tres causales de excepción, puesto que simplemente no se puede obligar a nadie a enfrentar tales circunstancias como hasta ahora lo estipula la ley.

Quisiéramos que la discusión y camino que seguirá el texto no se enmarque en sentidos dictatoriales que ofenden. Y que los argumentos consideren además del convencimiento personal, jurídico o moral, la señal que estamos dando al país. Como sociedad, debemos abordar este tema desde su real perspectiva, en conjunto, sin miramientos políticos y con la sensatez que requiere el asunto y sobre todo, sin slogan de ningún tipo.

No es TVN, es lo público

Costó mucho aprobar en el Senado el proyecto de ley que facilita la capitalización de TVN y el que crea la señal 2 del canal público, destinada a contenido exclusivamente cultural y educativo, de acuerdo al mandato legal que se le dio a TVN. Aún resta el trámite en la Cámara, pero ya sabemos que la actitud de la derecha es una sola: oponerse tenazmente a que estas dos iniciativas sean aprobadas de manera conjunta. Según la Oposición, ambas iniciativas no pueden convivir.

Es muy difícil sostener públicamente que se está en contra de que en Chile por fin se desarrolle una señal esencialmente cultural y educativa. Cuesta entender que exista un sector político que abiertamente le niegue esta posibilidad al país, especialmente a las regiones que muchas veces tiene menos opciones a acceder a ofertas televisivas de mejor factura, calidad y diversidad.

Acá lo único relevante es debatir si es que en verdad queremos una televisión pública objetiva, pluralista y autónoma que no dependa del gobierno de turno.

Todo lo demás son excusas para tapar lo que realmente le pasa a la derecha. No es TVN, no es la señal 2, no es el titular del directorio. Al parecer la derecha prefiere acotar lo público.

En su porfiada negativa a este proyecto, buscan conocer los detalles del plan de administración y gestión de TVN. Eso no es más que meter las manos en la administración del canal, cosa que justamente es lo que no se puede permitir, que TVN no sea intervenido por la política.

A nuestro juicio, los directorios deben responder a sus mandantes bajo las normas que dictan los gobiernos corporativos de cada una de esas compañías. Esas son las reglas del juego y es muy nocivo que los sectores políticos intenten intervenir, condicionar o guiar la

administración de una empresa tan relevante como es TVN, a cambio de sus votos en la sala.

El Canal de todos los chilenos, pertenece a todos los compatriotas y no es botín político y de los gobiernos.

Si no quieren televisión pública, que lo digan abiertamente, si no quieren canal cultural y educativo, que lo admitan abiertamente, pero no usemos malos argumentos.

TVN merece una oportunidad que nunca ha tenido: se le ha obligado a jugar un rol público, pero sin ningún apoyo público. Esto lo estamos corrigiendo con este proyecto de ley que permitirá por fin cumplir lo que está escrito en la ley, que es darle a Chile una televisión plural, donde quepamos todos en la pantalla.

Nueva ley de Sernac: prueba de fuego para la empresa

En los próximos meses Chile habrá logrado equilibrar la balanza de manera efectiva entre consumidores y las empresas que ofrecen bienes y servicios. En el Congreso se tramita un proyecto que dará facultades reales al Servicio Nacional del Consumidor, de modo de hacer que lo que hoy está en la ley, se cumpla: un Sernac con dientes, como se le ha llamado.

Este tema no ha estado exento de dificultades ya que la empresa privada a puesto especiales cortapisas y dificultades para debatir este proyecto. Curiosamente, el empresariado reclama que esta iniciativa “desnivela” la cancha hacia el lado del consumidor y que su aprobación significaría romper un supuesto “equilibrio” que hoy tienen consumidores y empresarios. Nada más insólito y poco ajustado a la realidad.

De acuerdo al proyecto de ley que ha impulsado el Gobierno, ya no se deberá depender de la voluntad de una empresa para responder a los reclamos de los consumidores como ocurre hasta ahora. Una vez que despachemos esta iniciativa, un reclamo deberá tratarse como corresponde y deberá responderse, sin estar sujetos as si la empresa tiene o no tiene ganas de hacerse cargo del problema. Hasta ahora, dependemos de esa “buena voluntad” empresarial, lo que a todas luces parece un desequilibrio, pero en contra del consumidor.

Una de las cosas más llamativas, es que las empresas acusan que el proyecto establece disposiciones abusivas como por ejemplo, hacer cumplir la ley. ¿Cómo el cumplimiento de la ley puede ser considerado abusivo? Difícil de entender cuando la actual situación permite que empresas no cumplan con las reglamentaciones referidas a su relación con los consumidores, sin que haya sanciones efectivas. El proyecto de ley que debatimos en el Congreso da facultades al Sernac para sancionar a las empresas que no cumplan la ley

y podrá realizar fiscalizaciones aleatorias, ya no dependiendo sólo de que una persona presente un reclamo ante un proveedor.

Estas sanciones serán más altas y podremos dar los tribunales la posibilidad de aplicar multas dependiendo del número de personas que se puedan ver afectadas, incluso en el plazo de hasta dos años desde que se produzca el incumplimiento de la empresa, cosa que hasta ahora sólo se podía hacer hasta en 6 meses.

Más allá del detalle de las medidas que se debaten, lo relevante es que la señal que estamos dando es que en Chile no hay más espacios para el abuso contra los consumidores. El mercado de consumo, de transacción de bienes y servicios, se basa en la buena voluntad y en la fe pública de que uno está pagando cierta cantidad de dinero, por un servicio que debe garantizar exactamente lo que ha sido prometido.

Nadie está pidiendo más de lo que el comerciante asegura entregar a cambio del valor de un bien de consumo. Pero si permitimos que esa fe pública se quebrante, dañamos las bases sobre las que descansa nuestro modelo de desarrollo económico. La defensa del consumidor, puesto así, es la defensa de la libre competencia, de la economía libre y de la confianza entre las personas y las empresas.

Este proyecto no se trata de establecer leyes anti empresa, sino todo lo contrario: premiará a las buenas empresas, las que juegan limpio, las que son sinceras, las que alimentan la competencia y la buena relación con sus clientes.

Nueva ley migratoria: ya era hora

El 31 de agosto se conocerán los resultados preliminares del Censo 2017, donde se podrá despejar una incógnita no menor: cuántos extranjeros hay viviendo en la actualidad en nuestro país. El fenómeno de la migración está de manera permanente en el debate político de estos años y ha sido usado incluso como herramienta para diseminar el miedo y la incertidumbre.

Coincidentemente, el Gobierno envió al Congreso un proyecto que moderniza la legislación de extranjería. El proyecto fija un sistema de principios, derechos y deberes; regula el ingreso, salida y permanencia; las sanciones y un sistema nacional de política migratoria, para evitar la trata de personas.

Ya era hora. Chile viene recibiendo grandes cantidades de personas migrantes desde distintos puntos del mundo, sin que se haya hecho un esfuerzo de Estado por actualizar la legislación que regula el ingreso y permanencia de personas de otros países. Este es un fenómeno que tarde o temprano nos iba a tocar como nación, ya que en general, todos los países del mundo tienen tasas de migración bastante más altas que las que tiene Chile en el papel.

Éste es un buen país para vivir. Tenemos buenos índices de calidad de vida, bajos niveles de violencia y delincuencia –por mucho que la derecha diga lo contrario-, buen sistema de educación e incluso enseñanza gratuita para los más vulnerables, y buenas opciones laborales para extranjeros. De hecho, las tasas de ocupación de los inmigrantes están por sobre las que exhiben los propios chilenos.

Lo que resta ahora es establecer un claro marco legal que fije no sólo los derechos que tienen las personas que deciden venir a Chile a buscar una mejor vida, sino que por sobre

todo las responsabilidades que esta decisión conlleva. Los chilenos tienen miedos y dudas que son razonables y todas esas incertidumbres se acaban una vez que la ley señala el marco que regulará las relaciones entre nacionales e inmigrantes.

No hay que olvidar que todo Chile es una nación producto de la inmigración y que sobre esa base, tenemos que ser capaces de mirarnos al espejo y entender que si buscamos lo suficientemente lejos en nuestros antepasados, siempre encontraremos a alguien que llegó a este suelo esperando surgir.

¿País semipresidencial? ¿Por qué no?

Hace ya unos meses que se viene debatiendo en el Senado, una idea de senadores de varias bancadas y que apunta a que Chile explore la posibilidad de cambiar su actual sistema político -en extremo presidencialista- por uno semipresidencial. De cara al proceso constituyente que Chile ha comenzado, no es descabellado pensar en un debate que mire el fondo de nuestro sistema político y responda a algunas crisis actuales y futuras.

En Chile, la participación de la ciudadanía en política es cada vez más débil y también al interior del sistema de partidos. Se sabe que cada vez es más complejo contar con gente no sólo dispuesta a sumarse a los partidos sino que además a la labor pública.

No sólo es un tema de desinterés, sino que -mucho más relevante- de legitimidad. La crisis de confianza además golpea la representatividad de todo el sistema de partidos tal como lo conocíamos hasta ahora. Esa desafección no sólo es de la ciudadanía hacia la política, hacia el gobierno, sino que es también de los propios partidos que se suponen deben apoyar al gobierno que los representa.

Hoy, ni siquiera eso está garantizado. No deberíamos desconocer o minimizar el efecto que décadas de exacerbado presidencialismo ha traído a la política y a la percepción que los ciudadanos tienen de la labor pública. Basta pensar que las regiones son prácticamente quienes pagan el costo más alto del centralismo presidencialista, cuando en

Chile todo se decide en Santiago y por una sola persona: desde las autoridades locales, hasta el presupuesto regional.

Y sinceramente, esto no se resuelve sólo con elegir a los gobernadores regionales, ni con darle una que otra facultad especial a las regiones. Tal vez no es malo pensar en un rediseño más profundo que logre algunas cosas que son o deberían ser de mucho provecho para la democracia: mayor poder real de decisión de los ciudadanos -en especial los de regiones- y que haya más responsabilidad política de parte de los partidos frente al gobierno al que apoyan.

Un sistema semipresidencial necesariamente resuelve esto último de manera automática ya que los representantes del Congreso pueden y deben dar forma a la coalición gobernante, incluso formando parte del ejecutivo. Además, el Gobierno -para poder hacer su tarea diaria- debe estar necesariamente alineado con el Congreso. Eso, hoy no ocurre y no le ocurre no sólo a la Nueva Mayoría, le puede pasar a cualquiera que gobierne de aquí en adelante.

Lo otro, es dar real poder de decisión a la ciudadanía y a las regiones. Un sistema semipresidencial necesariamente debe asumir el desafío de construir un presupuesto, desde regiones hacia el centro. Desde los costados del país, al poder central, de modo de que se pongan recursos allí donde ponemos los discursos.

Chile está maduro para este y otro tipo de debates, insisto, junto en momentos en que se ha abierto la posibilidad de un proceso constituyente.

No va a haber más respeto, más compromiso y más confianza hacia la política y hacia los políticos si no aumentamos los niveles de responsabilidad política, de la mano de un sistema que modere y balancee los poderes del Presidente de la República, creando una figura de Primer Ministro que esté obligado a buscar gobernabilidad para llevar el día a día

de ejecutivo y, por sobre todo, cumplir con los compromisos adquiridos con los únicos dueños de la soberanía, la ciudadanía.

El Partido primero

Es razonable que la ansiedad política de cara a las elecciones del próximo año nos lleve a un excesivo nerviosismo o a tomar decisiones apresuradas. Una de ellas, la de llevar un candidato a primera vuelta o a una primaria, es justamente la más relevante para el futuro del Partido Demócrata Cristiano y va a determinar si seguiremos siendo un referente en la política nacional o vamos a arriesgarlo todo por nada.

En política es común, pero no siempre conveniente, moverse por pasiones o arrebatos, pero hay períodos decisivos en que se vuelve riesgoso hacerlo sin tener evidencia, al menos plausible, de que estamos tomando un camino que asegure larga vida al partido.

En esa lógica, las propuestas con ese norte siempre serán bienvenidas, y es sano tomarlas en su justa dimensión: plebiscitos, proclamaciones y apuestas por tal o cual estrategia, cuando aún el escenario está muy abierto en la coalición a la que pertenecemos.

Yo apostaría más por los escenarios reales y menos por las voluntariedades. En este momento, las miradas están puestas en el desenlace de la definición del candidato radical y socialista. Por la derecha, esperamos que se transparente y sincere su candidatura, cada vez más obvia. Aún las alternativas no terminan de estar completamente claras. Y es más, todo parece indicar que recién en marzo-abril habrá más luces sobre la definición del abanderado del bloque PS-PPD-PR.

Ante este cuadro, me parece que la Junta Nacional, la directiva y el consejo nacional -que son los órganos mandatados a tomar las decisiones del partido - deben ser extremadamente responsables en conducir a la colectividad hacia un escenario sensato.

Es por eso que quiero hacer un llamado a la medida. Claramente hablando, un candidato a primera vuelta significa aislarnos, ir solos a una elección y con resultados inciertos que pueden ser negativos para nuestro partido. En la primaria de la Nueva Mayoría de 2013, la DC obtuvo un 8,8% de los votos, lo que nos hace pensar en los riesgos de obtener una votación similar pero en una papeleta de primera vuelta.

Sin un liderazgo sólido o figura relevante en las encuestas y sin una propuesta o idea de qué estamos ofreciendo a Chile consensuada en el partido, difícilmente podremos marcar la diferencia en una primera vuelta. La tarea aunque parezca de perogrullo, es clara: fortalecer nuestras potenciales cartas de liderazgos internos que pudieran perfilarse como presidenciales potentes acompañados de un programa de consenso que convoque a todas las sensibilidades internas.

Por ahora actuemos hacia pavimentar ese camino, debatir dentro de la Junta acerca de estas dos cosas centrales, ¿tenemos un liderazgo capaz de catapultarse al contexto nacional? ¿Tenemos una propuesta programática zanjada y unificadora dentro de la DC para ofrecer al pacto y al país?

Si la respuesta es no, entonces, no pongamos la carreta antes de los bueyes. Lo primero es dar estos dos pasos, para luego y sólo luego, acordar el mecanismo para proponer un nombre demócrata cristiano para aportar a Chile como el PDC sabe hacerlo.

Pensiones justas o pensiones de mercado

El actual sistema de pensiones lo impuso una dictadura. Se diseñó entre cuatro paredes y las promesas que hizo, sencillamente no se cumplieron. Hoy, las AFP son una de las industrias más cuestionadas por la ciudadanía, pero la demanda no la recogemos recién, ya algo avanzó la Presidenta Bachelet en su primer gobierno con la creación del pilar solidario y – ahora - con la primera reforma al sistema de pensiones de la historia.

Acabamos de conocer los fundamentos de la propuesta del Gobierno que tiene algunos titulares interesantes. Por un lado, se introduce una idea que debe ser celebrada y que tiene que ver con obligar a las AFP a un mayor compromiso con sus cotizantes. La idea de la Presidenta es que si a las AFP le va muy bien, deben compartir esas ganancias con los cotizantes y, si les va muy mal, deben amortiguar esas pérdidas. Hasta ahora, cuando había caídas importantes, éstas eran asumidas íntegramente por usted, el dueño de los fondos.

A eso se suma un hecho que es tal vez la mejor de las noticias: de aprobarse este proyecto, podrían subir las pensiones de los actuales jubilados y de las personas que están por pensionarse, al introducir un ahorro colectivo solidario, al aumentarse en un 5% la cotización. Un 3% de ese ahorro adicional irá a las cuentas personales y el restante 2% al sistema solidario. Este nuevo elemento es de toda justicia porque son miles las familias que viven con pensiones que ni se acercan a lo que prometieron los economistas de la dictadura.

Chile no puede seguir con un sistema de pensiones que no responde a los más básicos principios de justicia y equidad social. En eso, el Gobierno se atrevió a decirle basta al sistema de pensiones herencia de la dictadura, que descansa en el viejo adagio de que “cada cual se rasca con sus propias uñas”.

¡No más! Vamos a poder discutir el primer paso de una serie de modificaciones que apunten a llevar más dignidad a la vejez de los chilenos.

Sí, este es el inicio. Porque es un avance de pensiones gradual, tendremos que continuar con el perfeccionamiento y corrección del sistema en los años que vienen. De partida, evaluar la edad de jubilación y acotar las características del ente estatal que anunció el Gobierno para administrar el 5% adicional. Me imagino que no es un tema tabú y que podremos introducir algunos elementos en el proyecto, que den más poder a la gente acerca de dónde quiere que estén sus fondos.

Lo interesante, ahora que se acerca la campaña electoral, es que la Nueva Mayoría y sus distintas sensibilidades, han propiciado este cambio. En la vereda de enfrente, esa que es heredera del actual sistema de pensiones, han dicho que no es necesario introducir mayores modificaciones. De hecho, unos de los candidatos del sector, ha centrado el problema en que las personas tienen que aumentar “su vida útil”.

Ahí está la clave de lo que se juega en esta elección: dos visiones de mundo que tiene que ver con qué es la dignidad de las personas.

El sistema de pensiones es un emblema, tal como lo fue la educación, el mercado laboral o la distribución de la riqueza.

Y ahora cuando usted reciba su jubilación, piense en si considera justa esa cifra y recuerde quién ha hecho esfuerzos por mejorarla v/s quién le ha dicho que es un tema de mercado.

Pensiones justas o pensiones de mercado

El actual sistema de pensiones lo impuso una dictadura; se diseñó entre cuatro paredes y las promesas que hizo, sencillamente no se cumplieron. Hoy, las AFP son una de las industrias más cuestionadas por la ciudadanía y el Gobierno –dos veces- ha tenido que salir a corregir una tremenda injusticia: primero lo hizo la Presidenta Bachelet en su primer gobierno con la creación del piular solidario y –ahora- con la primera reforma al sistema de pensiones de la historia.

Acabamos de conocer los fundamentos de la propuesta del Gobierno que tiene algunos titulares interesantes.

Por un lado, se introduce una idea que debe ser celebrada por la gente y que tiene que ver con obligar a las AFP a un mayor compromiso con sus cotizantes. La idea de la Presidenta es que si a las AFP le va muy bien, deben compartir esas ganancias con los cotizantes y, si les va muy mal, deben amortiguar esas pérdidas. Hasta ahora, cuando había caídas importantes, éstas eran asumidas íntegramente por usted, el dueño de los fondos.

A eso se suma un hecho que es tal vez la mejor de las noticias: de aprobarse este proyecto, podrían subir las pensiones de los actuales jubilados y de las personas que están por pensionarse, al introducir un ahorro colectivo solidario, al aumentarse en un 5% la cotización. Un 3% de ese ahorro adicional irá a las cuentas personales y el restante 2% al sistema solidario. Este nuevo elemento es de toda justicia porque son miles las familias

que viven con pensiones que ni se acercan a lo que prometieron los economistas de la dictadura.

Chile no puede seguir con un sistema de pensiones que no responde a los más básicos principios de justicia y equidad social. En eso, el Gobierno se atrevió a decirle basta al sistema de pensiones de Pinochet que descansa en el viejo adagio de que “cada cual se rasca con sus propias uñas”. No más: vamos a poder discutir el primer paso de una serie de modificaciones que apunten a llevar más dignidad a la vejez de los chilenos.

Es el inicio, sí. Pero de seguro tendremos que continuar con el perfeccionamiento y corrección del sistema en los años que vienen. De partida, tendremos que evaluar el tema de la edad de jubilación y de si el ente estatal que anuncio el Gobierno es la mejor opción para administrar el 5% adicional. Me imagino que no es un tema tabú y que podremos introducir algunos elementos en el proyecto, que den más poder a la gente acerca de dónde quiere que estén sus fondos.

Lo interesante –ahora que se acerca la campaña electoral- es que es la Nueva Mayoría y sus distintas sensibilidades, las que han propiciado este cambio. En la vereda de enfrente, en la derecha, esa que es heredera del actual sistema de pensiones, han dicho que no es necesario introducir mayores modificaciones. De hecho, unos de los candidatos del sector, ha centrado el problema en que las personas tiene que aumentar “su vida útil”.

No estamos hablando de autómatas, no estamos hablando de piezas de la maquinaria de la empresa que deben retrasar su depreciación. Estamos hablando de personas que han trabajado duro toda su vida y que esperan una justa recompensa por este esfuerzo. Hay que exigir un mínimo de respeto y de humanidad en este debate, cosa que muchas veces se ve demasiado lejos cuando la derecha habla de economía.

Ahí está la clave de lo que se juega en esta elección: dos visiones de mundo que tiene que ver con qué es la dignidad de las personas. El sistema de pensiones es un emblema, tal como lo fue la educación, el mercado laboral o la distribución de la riqueza. Y ahora cuando usted reciba su jubilación, piense en si considera justa esa cifra y recuerde quien

ha hecho aunque sea un poquito por mejorarla y quien le ha dicho que es un tema de mercado. Piénselo bien.

Pensiones: lo imprudente es no atacar el problema de fondo

El debate acerca de quién va a administrar el 5% de cotización adicional para mejorar la pensión de los trabajadores, de verdad parece ser lo menos relevante o un aspecto casi accesorio frente al problema de fondo. Y es que la administración de un porcentaje de la cotización no va a resolver legítimas dudas que tenemos sobre cómo hacer que el sistema entregue de manera efectiva, pensiones más dignas a las personas.

El aumento del monto de la cotización es sólo uno de los aspectos, pero falta hablar seriamente sobre la edad de jubilación de los chilenos, más aún cuando hay expectativas de vida más largas, o sobre el problema de quienes no cotizan pudiendo hacerlo o sobre las lagunas en el ahorro para la vejez. Los bajos sueldos, la poca capacidad de ahorro de las familias y múltiples otros factores, influyen en la decisión final que tendremos que adoptar como país para ofrecer una solución responsable, viable y realista a los chilenos.

Y como este debate ya es un tema de campaña, hay que tener el doble de cuidado. Acá no hay ni soluciones mágicas, ni menos soluciones que dejen contentos a todos.

Por un lado, casi todos han hablado de la extensión de la edad de retiro de las personas, más allá de los 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, pero todos olvidan hablar de lo precario que es el mercado laboral incluso para los mayores de 50, con sueldos que

van en declive. Eso es particularmente delicado, cuando el sistema de retiro programado pone especial énfasis en los últimos años de la vida laboral para hacer proyectar la pensión.

En este particular punto, no hemos escuchado ninguna propuesta relevante de los candidatos y es necesario que se haga un esfuerzo mayor por parte del Gobierno, para socializar lo que hay en mente, No queremos que el secretismo nos lleve a casarnos con soluciones que no han sido lo suficientemente debatidas por los sectores políticos y académicos.

Para la Democracia Cristiana, el trabajo digno es un tema central y más aún cuando se trata de trabajo digno para las personas mayores que –no por tener más de 60- dejan de tener productividad o experiencia como para que los sueldos decaigan de manera injustificada.

Puesto así, lo verdaderamente imprudente es no hablar estos temas a tiempo, no abrir la discusión o insistir en mantener las fórmulas bajo siete llaves. Sí, es bien impopular entregarle más de 2 mil 500 millones de dólares –que es lo que debería representar el 5% adicional en la cotización- a las AFP. Pero ese en realidad es un aspecto bien debatible y opinable del problema. El dilema sigue siendo la rentabilidad de los fondos y de las cunetas individuales y eso no lo resuelve una discusión en torno a quién administra.

Mientras ese debate se consume las páginas de la prensa, las rentabilidades siguen siendo magras para los cotizantes y millonarias para las AFP.

El sistema de ahorro individual tiene una tasa de reemplazo que bordea el 30% y eso sigue siendo el tema de fondo. El gobierno –entonces- tiene que concentrar los esfuerzos no tanto en mantener bajo secreto quién va a administrar estos fondos adicionales y quien se va a quedar además con la comisión por administrar esos fondos, sino en responder a la

inquietud de quienes se pensionarán en los próximos 10 o 20 años: qué se va a hacer para aumentar la rentabilidad de las cuentas individuales.

Suponemos que aún hay tiempo para dar este debate y para aportar con ideas desde distintas miradas, porque ha sido demostrado que más visiones y más propuestas, pueden lograr un mejor proyecto y una mejor propuesta que responda a la esperanza sincera que tienen todas las personas que se preocupan de este tema y que han participado de las muchas marchas en contra de las AFP. Sí, están en contra, pero alguien tiene que ofrecer una solución realista y eso hasta ahora no ha salido en ninguna de las marchas.

Pensiones: soluciones mixtas versus ideas fijas

En un mes más, se va a cumplir el plazo para que el Gobierno presente su propuesta de reforma al sistema de pensiones, sin que hasta ahora hayamos conocido los detalles de esta importante iniciativa. Sabemos que hay lineamientos generales: que va a haber un aumento de la cotización en un 5%, que una parte de esa cotización extra irá a un fondo común solidario y que existe la decisión del Gobierno de sacar a las AFP de la administración de la nueva cotización.

Si bien los anuncios van en un sentido correcto, es necesario que el gobierno comparta qué está pensando para aquellos temas más específicos y que son motivo de diferencias al interior de la Nueva Mayoría y también con la oposición, de modo de no llevar a este proyecto a un callejón sin salida antes de que siquiera ingrese a tramitación.

Uno de esos temas es quién va a administrar el 5% adicional, asunto en el que el Gobierno se casó de antemano con la idea de un organismo estatal. Hay serias y razonables dudas respecto de qué ganaría el cotizante con que la administración quede en manos de un organismo que debe ser creado, versus que sea administrado por las actuales AFP que ya

tienen una capacidad instalada funcionando y con una dilatada experiencia. Si hay números que respaldan esta decisión, sería bueno conocerlos ahora, ya que si es tanta la diferencia y has signos de que las AFP están muy por detrás de otras entidades, ¿qué esperamos para traspasar la administración de la totalidad de los fondos que actualmente están en las administradoras?

Me preocupa, porque en Chile solemos cometer el error de “enamorarnos” de la solución y no preocuparnos de buscar la mejor solución al problema. En otras palabras, para el gobierno parecer ser que lo único que importa es impedir que las AFP participen del 5% adicional, en vez de buscar cuál es la mejor opción para asegurar la rentabilidad y ganancias de la cotización adicional en beneficio de los cotizantes.

Ni la idea de la AFP estatal u otra similar, ni el aumento del ahorro *per se*, ni el Pilar Contributivo son soluciones al problema de la rentabilidad de los fondos. Prueba de ello es que el tema de la edad de jubilación se volvió un tabú desde el momento en que el candidato de la derecha propusiera que la única manera de mejorar las pensiones en Chile, era la de alargar la “vida útil” de las personas haciéndolas trabajar más años.

Puesto así, parece una brutalidad e insensibilidad más de la derecha, pero no podemos negar que la esperanza de vida de los chilenos se está alargando al mismo tiempo que la gente en edad activa está disminuyendo. Esto provoca dos cosas inmediatas: que la propuesta del Frente Amplio de volver a un sistema de reparto es inviable e irresponsable, y –además- que seguimos sin resolver el tema al largo plazo, de pensionados cada vez más activos y longevos.

Aún queda tiempo para testear las fórmulas, sondear con la Nueva Mayoría dónde están los acuerdos y dónde estarán los problemas, ya que nos ha pasado muchas veces que los proyectos llegan al Congreso sin el mínimo acuerdo y viabilidad política. Hay espacios para soluciones mixtas más que ideas fijas en materia de administración de los fondos adicionales y hay espacios para explorar fórmulas intermedias que den cuenta de la extensión de la edad de jubilación, de la mano de los cambios que sean necesarios en el

mercado laboral para viabilizar el anhelo de todos: que la vejez no se transforme en una amenaza para una inmensa mayoría de compatriotas.

Ponerle el hombro al cobre

Esta semana se conoció la rebaja de la calificación de riesgo de Chile, hecho que -entre otras cosas- está motivado por el bajo precio del cobre y el impacto que esa situación tiene en nuestras cuentas. Nuestros ingresos como nación han bajado y eso hace que el país crezca poco, obligando al gobierno a gastar más de lo que recibe en ingresos para activar la economía.

Poco podemos hacer con el tema de la baja del cobre pues se trata de efectos globales de mercado y que van de la mano de la actividad de las grandes economías como China, India o Estados Unidos, pero al menos hemos hecho esfuerzos por darle una mano a la pequeña minería chilena, que es la que más sufre con esta depresión de precios que nos afecta. Este año, vamos a despachar una ley que crea un mecanismo de estabilización del precio del cobre, iniciativa que mandó este gobierno.

De acuerdo a esta nueva reglamentación, Enami se hará cargo de administrar un Fondo de 50 millones de dólares que irá en ayuda de los pequeños productores, cuando el precio del mineral fluctúe por debajo de una banda que establezca el Ministerio de Hacienda. Con esto, Enami fortalece su rol de institución de fomento al contar con un mecanismo que ya se está utilizando, pero que no es formal y estable en el tiempo. Con esta ley, dejaremos que este sistema quede fijado por ley.

En 2016, sin ir más lejos, la empresa entregó 34 millones de dólares para suplementar el bajo precio del cobre, permitiendo una cosa no menor: que varias empresas pequeñas mineras, no cerraran y mantuvieran su producción. Es en otras palabras, ponerle el hombro al cobre.

Es muy difícil mantener una operación sin tener la certeza de que los precios van a sustentar los costos y si habrá o no incentivos para mantener la mano de obra y la inversión. Con esta iniciativa estamos dando una tremenda señal de apoyo y de incentivo, sobre todo en zonas en donde el cobre y la minería en general, es el motor del desarrollo, como ocurre en nuestra región.

Tener este mecanismo cristalizado en una ley es una buena política, es una buena herramienta para nuestros emprendedores mineros y es una señal de que cuando algo se hace bien, puede contar con el apoyo transversal de todos los partidos.

¿Por qué nos importa el destino de TVN?

Por estos días, estamos debatiendo en el Congreso un proyecto que inyecta 47 millones de dólares para permitir la continuidad de operaciones de Televisión Nacional de Chile, el canal de todos los chilenos. A simple vista, pareciera que esto, por un lado, no tiene nada que ver con nuestras preocupaciones como región y que, en segundo lugar, se trata de una cantidad “inaceptable” de dinero.

Pues, partamos por lo segundo. Esos 47 millones de dólares son para capitalizar la empresa, es decir, para inyectarle recursos frescos que le permitan seguir funcionando e intentar detener las fuertes pérdidas que sea acumulan desde el gobierno anterior.

No es tanta plata si se toma en cuenta la crisis por la que atraviesa toda la industria televisiva. Es decir, no es sólo el canal público el que está pasando por una mala racha económica, sino que todos los canales privados están enfrentando un escenario complejo.

Por un lado, porque se debe poner en marcha la televisión digital, lo que requiere una fuerte inversión.

Pero el problema tal vez más grave, es que hoy los canales enfrentan una crisis de financiamiento, al caer la disponibilidad de publicidad. Ahora, otros medios, como las redes sociales, también entraron a la disputa de esos dineros, dejando a la televisión en un muy mal pie.

Eso se puede ir resolviendo desde varias aristas. Una de ellas, es inyectando recursos públicos al canal que se supone es público. Entre paréntesis, TVN es un canal estatal, pero no recibe ni un peso para su financiamiento, lo que constituye un contra sentido enorme. Esta inyección de recursos, por supuesto debe ir de la mano de un plan y una estrategia para mejorar la gestión, reducir costos que tal vez no se justifican.

Ahora bien, lo segundo relevante tiene mucho que ver con nuestro interés regional. Chile necesita una televisión estatal de calidad, abierta, pluralista y que dé cobertura a todo el territorio nacional.

Nuestra región tiene lugares aislados como los valles y las zonas interiores, a los que cuesta llegar con señales de televisión, radio o incluso de telefonía móvil o internet. Para nuestras zonas interiores, es clave estar conectados con el resto del país, más aún cuando la necesidad de acceder a información puede ser de vital importancia para las comunidades más aisladas.

Como país, tenemos que contar con un canal público que entregue entretenimiento e información, con programas misceláneos, de entretenimiento deporte y noticias. Pero también se requiere hacer realidad el proyecto que TVN emita una señal 2 dedicada a la cultura, la innovación, artes, teatro, música y ciencias y tecnologías.

De hecho, nuestra región tiene tremendos aportes en materia de ciencia y astronomía que sería muy bueno tener un espacio donde nuestros científicos puedan enseñarle al país lo que han aprendido y descubierto, pero que hasta ahora, no tienen espacios alguno donde mostrar estos avances.

Por eso nos importa el destino de TVN, porque a través de una televisión pública y de calidad, se construye un país más educado, más integrado y más democrático.

¿Qué hacemos si no prende?

A primera vista, la pregunta puede parecer de una sinceridad brutal y de una eventual falta de camaradería con la Senadora Carolina Goic, la candidata de mi partido, que ha anunciado que llegará hasta noviembre como opción de primera vuelta. Pero se trata de todo lo contrario. Como mi partido me importa y como también me importa cuidar sus liderazgos, creo que es sano y necesario hacer estas preguntas en público, porque la política se hace de cara a la gente.

Todos saben que he sido férreo partidario de mantener el eje de centro izquierda de la Nueva Mayoría, que por lo demás, ha sido y es el centro por donde se toman buena parte de los acuerdos que han dado gobernabilidad al pacto. Por lo tanto, también he sido

férreo defensor de las primarias como mecanismo esencial para dirimir acerca del candidato o candidata del bloque. Esto, por supuesto, con el imperioso acuerdo programático que debe guiar todo lo anterior.

Entonces, pregunto de nuevo, ¿qué hacemos si no prende?

Ese es un escenario realmente inquietante porque sabemos - y es bueno dejarse de eufemismos o de autocomplacencia - que hay quienes creen que en ese caso hay que bajar la candidatura presidencial y buscar una salida negociada al tema del pacto parlamentario.

No estoy de acuerdo. Por un asunto ético y de práctica política. Primero, porque en esto no estamos haciendo trueque ni intercambiando algunas especies. Estamos hablando de liderazgos políticos, de proyectos ideológicos y de visiones de país. Carolina es uno de esos liderazgos de recambio para el PDC y para la política nacional en su conjunto, por lo que desde mi perspectiva sería bueno cuidarlo, proyectarlo y fortalecerlo al futuro.

Lo segundo y que tiene que ver con la práctica política, es que hemos sido hasta ahora un pacto que llega a acuerdos, que pese a las grandes diferencias sí es capaz de ser ordenado y disciplinado. Llevar las cosas a una negociación espuria donde se podría conjugar el peor escenario de buscar sólo los cupos parlamentarios, me parece algo francamente de mal gusto.

Este fin de semana la Junta Nacional terminará por definir qué acciones seguirá mi partido para enfrentar uno de los momentos más complicados por lo que ha atravesado el bloque de centro izquierda.

Y no deja de ser sintomática esta conjunción de eventos similares a los que vivimos antes; de hecho, hay que ser sinceros respecto la alternativa cierta de que la Presidenta Bachelet le entregue el gobierno a la derecha por segunda vez y eso pareciera no ser leído de una manera lo suficientemente seria ni por el gobierno ni por los partidos que han estado alentando el clima divisional.

La Junta va a hablar y es hora de que la DC tenga en mente todas estas cosas antes de decir una palabra.

Tenemos liderazgos, tenemos ideas, la clave está en cómo gestionar ambas cosas y cómo seducir a nuestros socios y a nuestro país para poner en práctica nuestra vocación por el servicio público.

Regionalización a punto de dar el primer paso

La elección de los gobernadores regionales en 2020 se acerca, falta menos. Ha sido complejo ponerse de acuerdo respecto puntos como traspaso de las competencias que tendrán los gobiernos de las regiones y los mecanismos mediante los cuales haremos la entrega de las facultades que hoy tiene la autoridad central.

Pero se avanza, la Comisión Mixta ya se encuentra a poco de despejar un acuerdo definitivo, pese a algunas voces que insisten en criticar la medida. Ya despejamos asuntos cruciales como la duplicidad de cargos, un mecanismo que asegure mínima la coherencia entre las estrategias regionales y las políticas públicas nacionales. Así como la

administración de los recursos o las inhabilidades que pesarán sobre los postulantes a los cargos.

Y no ha sido fácil. Uno de los temas más complejos es cómo vamos a constituir áreas de gestión que deben tener una coordinación muy estrecha con los ministerios sectoriales que son los que, en definitiva, llevan a cabo el desarrollo de los proyectos en regiones. Las adecuaciones que se requieren en materia de reglamentos, planos reguladores y otras áreas normativas han sido exhaustivamente tratadas en el Congreso. Ahora, es tiempo de dar luz verde definitiva.

De esta forma, estamos dando un paso relevante para la verdadera regionalización y la descentralización esperada: la elección de los gobernadores regionales y el traspaso de competencias de gestión en áreas como Vivienda, Transporte o Desarrollo Social, serán sin duda un tremendo aporte a mejorar los niveles de desarrollo de las regiones y de su gente.

Con ello tenemos el primer paso. Y por eso, quiero poner este punto sobre el tapete, porque conforme hemos visto, el traspaso completo en materia de toma de decisiones, está directamente ligado a la forma en que se construye el presupuesto nacional. Hoy, todo pasa por decisiones que se toman en el ministerio de Hacienda, Presidencia y el comité político de La Moneda. Y está bien, pues es ese el ordenamiento político que hoy tenemos.

No es una crítica, sino un planteamiento que me gustaría que se debatiera y se abriera a la discusión: abrir porcentajes o áreas presupuestarias que puedan ser priorizadas o definidas por las regiones. Es triste decirlo, pero el verdadero poder político, el verdadero poder de decisión es el de quien determina dónde se gasta y en qué se gastan los recursos de todos los chilenos.

Me parece que es razonable conversar sobre este tema y estudiar fórmulas que a futuro nos permitan generar nichos en los que las regiones tengan algo más de voz acerca de

dónde destinar recursos para el desarrollo de obras públicas, instrumentos de desarrollo humano o tecnológico.

Después de todo, es en regiones donde mejor se sabe dónde aprieta el zapato.

Responder con obras

No hay nada más relevante para las personas que el arraigo, la pertenencia a un lugar, una ciudad o un barrio. Y así lo entendió el Gobierno que acaba de hacer el llamado para lanzar la construcción de 170 viviendas como parte del Plan de Reconstrucción de Coquimbo, tras el terremoto y maremoto de 2015, y que permitirá a familias del sector de Baquedano y que fueron afectadas por ese desastre natural, mantenerse en lo que había sido su hogar.

El Proyecto Habitacional Baquedano comenzará a levantarse en febrero de 2018, lo que en la práctica creará un precedente en lo que se refiere a medidas de reparación y

reconstrucción tras una catástrofe: integrare incluir a las familias en la decisión final de cómo y dónde reconstruir.

De acuerdo a lo que explicó la Ministra de Vivienda cuando lanzó este llamado, el proyecto no sólo tendrá las 170 viviendas, sino que contará con infraestructura urbana relevante como locales comerciales y otras medidas de integración. Se trata de un conjunto habitacional que tendrá tres tipos de vivienda, con una superficie mínima de 56 metros cuadrados. Esto es porque hay distintos tipos de familia, todas con necesidades diferentes, asunto que se ha considerado a la hora de reconstruir.

Pero la reconstrucción es un proceso extremadamente complejo y dinámico. En nuestra región ha habido especial énfasis en materia de obras urbanas de mitigación de los riesgos, como lo vimos con las obras del borde costero de Coquimbo y Tongoy, del mismo modo en que se planificó para la contención de plataformas viales de Illapel, Canela, Sotaquí y Ovalle, que en promedio tienen un avance de un 84,7%. Asimismo están las nuevas vías de evacuación en el borde costero de Coquimbo-La Serena.

Hasta hace un mes, teníamos 1.842 subsidios a la vivienda vigente, 465 de ellos con obras terminadas, 405 en ejecución y 972 sin inicio. Más de 3.813 subsidios de reparación están vigentes, de los cuales la mitad ya están con obras terminadas. Se avanza, no siempre con la rapidez que todos quisiéramos, pero son nuevas cifras considerando lo complejo que es esta empresa.

Esta no es una reconstrucción de papel, o administrativa, es una reconstrucción de calidad, realista y sobre todo, digna. Y es por eso que vale la pena mirar atrás y ver la forma en que se ha hecho esta reconstrucción y evaluar con esa vara. Chile siempre tendrá desastres y lo importante es ver quién responde con palabras y quién con obras.

Retroceder, nunca; rendirse, jamás.

Con la elección resuelta y con la derecha nuevamente en La Moneda, se abre una tremenda incertidumbre acerca de cuál será el camino que adoptará el nuevo gobierno y cómo se va a configurar y organizar la oposición que, esta vez, no es un solo bloque político, sino una pléyade de partidos y movimientos menos orgánicos que a lo que estábamos acostumbrados.

De hecho, el destino de la Nueva Mayoría es prácticamente ineludible: debe cambiar rotundamente o morir para renovar la oferta programática. Al menos nosotros la DC, creo que debemos ser una oposición activa y constructiva ya que la campaña obligó a la derecha a abrazar banderas que jamás estuvieron en sus programas y postulados, lo cual abre una tremenda duda respecto de si van a respetar esos ofertones o si van a volver a sus postulados, tal como ya hemos visto en declaraciones de algunos parlamentarios.

Algunos querrán volver a que los colegios segreguen a los estudiantes por plata, por estatus social o por tipos de familia, algunos querrán retroceder en la gratuidad y otros ya estarán pidiendo que haya lucro en la educación universitaria. Intentarán también “corregir” la ley que despenaliza el aborto en tres causales, castigando a la mujer que haya tenido que recurrir a esta dramática situación.

Y así, en muchas otras áreas, intentarán presionar al Presidente electo para llevar las cosas hacia los postulados clásicos de la derecha. ¿Qué harán las bancadas que hoy integran la Nueva Mayoría, qué harán las fuerzas del Frente Amplio? Es una incógnita y es una legítima preocupación para los votantes de la centro izquierda y del mundo progresista que verán una amenaza permanente a aquellas áreas en las que se ha avanzado corriendo el cerco.

La derecha no tiene mayoría suficiente para pasar cambios relevantes y debe pactar, pero eso no debe dar pie a retrocesos o claudicaciones frente a derechos ya obtenidos y ganados por la ciudadanía. En ese cuadro político, es claro e ineludible el rol de mi partido.

A mi juicio, la DC debe ser oposición a un gobierno de derecha. El camino propio en esta elección nos relegó a un cuarto lugar en la primaria, pero el camino con la derecha nos puede llevar a la desaparición. Eso no quiere decir que las buenas ideas, las que vayan en el sentido de profundizar cambios sociales y derechos para los más vulnerables no vayan a ser apoyadas. Si un proyecto o cambio legal va en el sentido de profundizar derechos, pues estaremos disponibles; retroceder, eso no.

Pero la peor amenaza que se cierne sobre estas ideas del mundo progresista es realmente la división y la falta de habilidad para lograr el entendimiento de las fuerzas del centro y de la izquierda democrática. Caer en desconfianzas y divisiones insalvables, nos va a llevar no sólo a la posibilidad de perder lo que se ha ganado, sino que abre la posibilidad de que la derecha logre instalarse en el poder por más de un periodo. Eso es real y tiene que ver con que no existe un liderazgo nítido, claro y convocante que pueda tomar estas banderas y generar confianzas al futuro.

La derecha tomó propuestas como la gratuidad, el mejoramiento de las pensiones la protección de la infancia, pero eso fue en campaña. Ahora hay que ver qué tanto podrá el Presidente soportar la presión de quienes quieren profundizar el lucro en salud, educación o pensiones, los que quieren indultar a los violadores de los derechos humanos o los que quieren acabar con la agenda de integración en materia de sexualidad y género.

Ahí veremos la integridad de quienes se declaran progresistas y de quienes están dispuestos a dejar las diferencias y matices menores a un lado, por enfrentarnos con quienes tenemos abismos de diferencia en materia de políticas públicas.

El tema es asegurarle a la ciudadanía que vamos a pelear por mantener aquello que logramos, las áreas en donde se hizo una diferencia esencial para las familias. Como decía

una película antigua, lo que espera la gente del mundo progresista es retroceder nunca; rendirse, jamás.

Salvar vidas

Varios huracanes –uno detrás de otro- terremotos devastadores y numerosos desastres derivados de los efectos de cambio climático han azotado a Latinoamérica en los últimos 5

años, dejando en claro que las acciones de contención, recuperación y de reconstrucción están sobrepasando las fronteras de los países y su capacidad autónoma de respuesta.

Lo hemos visto en estas últimas horas con los efectos de los huracanes que afectaron el Caribe y los dos terremotos que golpearon México de manera terrible, pero también pudimos experimentarlo directamente con los incendios en Chile que fueron los primeros en alcanzar la categoría 6 en la escala mundial, o los aluviones en el Desierto de Atacama donde se suponía que no llovía.

Desde Chile hasta México, se han visto efectos devastadores para la vida de las personas, los pueblos y las economías locales al tratar de recuperar lo perdido. Y es que cuando los fenómenos son de tal escala y con resultados así de globales, entonces también debe haber una respuesta más coherente, coordinada y contundente para primero prevenir los desastres y luego, para trabajar por la reconstrucción.

Esto se ha debatido en varios países Latinoamérica y el Caribe y en el propio Parlatino que ha insistido en que deben adoptarse medidas más firmes e inequívocas frente al calentamiento global, por ejemplo. Nos opusimos y manifestamos nuestro rechazo a la forma en que Estados Unidos ha resuelto darle la espalda al mundo, renunciando a sus compromisos en materia de mitigación de gases de efecto invernadero y concretando su salida del Acuerdo de París.

Es brutal el contrasentido de ver al Presidente Trump visitando los lugares afectados por huracanes nunca vistos mientras niega que el calentamiento global sea una realidad.

Pero lo relevante es lograr que haya coherencia en el resto de la región para enfrentar estos efectos y para generar mecanismos que permitan una adecuada acción legislativa a favor de salvar vidas humanas. Los Congresos, en ese sentido, son clave para generar legislaciones que promuevan buenas normas preventivas en materia de construcción, planificación urbana, dotación de recursos para equipos de salvataje y una serie de otras áreas en donde se requiere que el Estado dé garantías a la ciudadanía.

El Parlatino ha puesto el cuidado del medioambiente dentro de sus prioridades pues su impacto y conflictividad, se refleja en fenómenos como el hambre, las migraciones

forzadas y la respuesta temprana a los desastres naturales. Hemos debatido también sobre cómo impulsar instrumentos e institucionalidad adecuada en materia de desastres. Eso es particularmente relevante para un país como el nuestro que en apenas unos años ha debido hacer frente a 24 catástrofes de este tipo.

Chile y otros países han impulsado leyes especiales en este campo, como es el caso del proyecto que crea la nueva Onemi o el que reemplaza a la Conaf, pero a la luz de los hechos de estos días, queda claro que nunca se está actuando con la velocidad y agilidad necesaria. En cualquier momento, podemos ser azotados por un terremoto, un tsunami, un aluvión o incendios de la era del cambio climático. Es cosa de tiempo y por eso debemos estar preparados no sólo dentro de cada uno de nuestros países, sino que tenemos que ser capaces de coordinarnos con los vecinos y aliados para ir de manera urgente en ayuda de las personas.

No es catastrofismo ni sensacionalismo, es aprender de los errores, de la experiencia y actuar con la mente puesta en salvar vidas. Todas las vidas.

Un Sernac con dientes, prueba de fuego para las empresas

En los próximos meses Chile habrá logrado equilibrar la balanza de manera efectiva entre consumidores y las empresas que ofrecen bienes y servicios. En el Congreso se tramita un proyecto que dará facultades reales al Servicio Nacional del Consumidor, de modo de hacer que lo que hoy está en la ley, se cumpla, un Sernac con dientes, como se le ha llamado.

Este tema no ha estado exento de dificultades, ya que la empresa privada ha puesto especiales cortapisas y dificultades para debatir este proyecto. Curiosamente, el empresariado reclama que esta iniciativa “desnivela” la cancha hacia el lado del consumidor y que su aprobación significaría romper un supuesto “equilibrio” que hoy tienen consumidores y empresarios. Nada más insólito y poco ajustado a la realidad.

De acuerdo al proyecto de ley que ha impulsado el Gobierno, ya no se deberá depender de la voluntad de una empresa para responder a los reclamos de los consumidores como ocurre hasta ahora. Una vez que despachemos esta iniciativa, un reclamo deberá tratarse como corresponde y deberá responderse, sin estar sujetos a si la empresa tiene o no tiene ganas de hacerse cargo del problema. Hasta ahora, dependemos de esa “buena voluntad” empresarial, lo que a todas luces parece un desequilibrio, pero en contra del consumidor.

Una de las cosas más llamativas, es que las empresas acusan que el proyecto establece disposiciones abusivas como por ejemplo, hacer cumplir la ley. ¿Cómo el cumplimiento de la ley puede ser considerado abusivo? Difícil de entender cuando la actual situación permite que empresas no cumplan con las reglamentaciones referidas a su relación con los consumidores, sin que haya sanciones efectivas. El proyecto de ley que debatimos en el Congreso da facultades al Sernac para sancionar a las empresas que no cumplan la ley y podrá realizar fiscalizaciones aleatorias, ya no dependiendo sólo de que una persona presente un reclamo ante un proveedor.

Estas sanciones serán más altas y podremos dar a los tribunales la posibilidad de aplicar multas dependiendo del número de personas que se puedan ver afectadas, incluso en el

plazo de hasta dos años desde que se produzca el incumplimiento de la empresa, cosa que hasta ahora sólo se podía hacer hasta en 6 meses.

Más allá del detalle de las medidas que se debaten, lo relevante es que la señal que estamos dando es que en Chile no hay más espacios para el abuso contra los consumidores. El mercado de consumo, de transacción de bienes y servicios, se basa en la buena voluntad y en la fe pública de que uno está pagando cierta cantidad de dinero, por un servicio que debe garantizar exactamente lo que ha sido publicitado.

Nadie está pidiendo más de lo que el comerciante asegura entregar a cambio del valor de un bien de consumo. Pero si permitimos que esa fe pública se quebrante, dañamos las bases sobre las que descansa nuestro modelo de desarrollo económico. La defensa del consumidor, puesto así, es la defensa de la libre competencia, de la economía libre y de la confianza entre las personas y las empresas.

Este proyecto no se trata de establecer leyes anti empresa, sino todo lo contrario: premiará a las buenas empresas, las que juegan limpio, las que son sinceras, las que alimentan la competencia y la buena relación con sus clientes.

Todo lo que necesitan es amor

Sí, es indignante todo lo que sucede en torno al caso de los niños muertos y vulnerados en sus derechos y que pertenecen al sistema de protección de la infancia, particularmente los que están al cuidado del Sename. Esta semana vimos una agria polémica por el rechazo a un informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y, lo más probable, es que la gente en sus casas no tenga idea de qué se buscaba con este informe y si de verdad esas conclusiones solucionaban en algo la situación de esos menores.

Estamos hablando de más de 1300 niños muertos en más de una década, es decir, contando más de dos gobiernos en ejercicio. Y lo mas triste de todo, es que pareciera que acá lo relevante es cuántos niños murieron en una u otra administración, para ver quién es más “culpable” de esas muertes. Nunca pensé que tirarse niños muertos de un lado a otro era una forma seria de hacer política pública.

Acá no se trata de si una persona o dos o cien, tuvieron responsabilidades inexcusables. Se trata de que cortemos con la hipocresía y asumamos que Chile entero le ha fallado a esos niños y adolescentes que por el abandono y la vulneración de sus derechos, terminaron en verdaderos centros de reclusión.

¿Dónde estaban las familias de esos menores?, ¿los padres y parientes más cercanos?, ¿los colegios?, ¿las iglesias?, ¿los vecinos?, ¿las municipalidades?, y claro, ¿el Estado?

Esta es una culpa y una vergüenza colectiva. Cuando uno mira para el lado, justifica que el otro haga lo mismo. Acá el abandono a partido por las familias y el sistema escolar, seguido de una larga lista de intervinientes que no han sido capaces de asumir el cuidado mínimo que requiere un niño en formación. Así, es muy pero muy fácil echarle la culpa al Sename y a un puñado de ministros y jefes de servicio.

Este Gobierno fue el único que ha transparentado este escándalo y tomó la decisión de mandar 8 proyectos de ley para solucionar el problema estructural del cuidado de la infancia vulnerada. Entonces –y me incluyo- mejor callarse la boca y aprobar estas

iniciativas en vez de seguir haciendo shows que en nada ayudan a esos miles de niños que esperan en un hogar de menores que alguien les dé amor y una familia. Los niños y niñas del Sename no necesitan diputados, ni ministros, ni senadores paladines de la justicia; todo lo que necesitan es amor.

Todos contamos

El 19 de abril Chile realizará un nuevo Censo Nacional para corregir las malas cifras que se obtuvieron en el tristemente conocido como “mejor censo de la historia”. Pero más allá del lamentable resultado del Censo anterior, lo que ahora importa es aunar a la mayor cantidad de voluntarios para una gesta tan cívica y republicana, que sólo nos puede mover a la unidad.

Por estos días, más de 3.300 colegios de todo el país iniciaron las capacitaciones a estudiantes de tercero y cuarto medio participar ser censistas. Me imagino la emoción y el orgullo de estos miles de estudiantes que aportarán con un día de trabajo voluntario a la grandeza del país. Es una gesta que sin duda debería vivir cada ciudadano al menos una vez en su vida: participar de uno de los actos nacionales que más épica deben tener.

Faltan voluntarios. Y para eso, el Ministerio de Economía ha estado trabajando para sumar y convocar a más y más jóvenes, adultos y funcionarios públicos, para cumplir con la tarea de contarnos a todos en una jornada en la que todos valemos lo mismo, todos somos iguales.

Va a ser realmente hermoso ver a estos miles de jóvenes movilizados por Chile, tal como lo han hecho para las emergencias y las catástrofes, donde han llegado estudiantes de distintos puntos del país a ayudar a sus compatriotas. Esperemos que ese entusiasmo sea contagioso y pueda motivar a los adultos que aún no se han decidido a participar como voluntarios.

Esta es una tarea que sobrepasa al Gobierno de turno, es una tarea país, y por lo que hay que participar. Hay que estar en las casas el 19 de abril, hay que abrir la puerta y participar de este ejercicio nacional y –mejor aún- hay que ofrecerse como voluntario para censar.

No queremos ofrecer que este será el mejor censo de todos los tiempos, no. Sólo queremos que se aun buen Censo, que sea útil para definir buenas políticas públicas, para

definir las ayudas sociales y ponernos metas reales y correctas. Todas las ayudas que se entregan a través del sistema de protección social, los municipios y el gobierno, dependen de las cifras que se obtienen de un Censo bien calibrado.

Por eso necesitamos de usted y de su familia. Es una tarea nacional y un esfuerzo que se hace cada cierto tiempo, para saber cuántos somos, cuánto necesitamos y cómo mejorar el ejercicio de la política, esa buena política que se traduce en educación gratuita, bonos familiares, mejores pensiones o viviendas sociales dignas. Sí, todos contamos.

El Muro de Trump, la punta del iceberg

Por estos días, Chile y Argentina dieron muestra una vez más de lo que significa integración. Los gobiernos de Mauricio Macri y Michelle Bachelet, además han coincidido en la necesidad de impulsar acciones ante la latente amenaza de racismo, xenofobia y proteccionismo hacia América Latina, desde la llegada de Donald Trump a la cabeza del gobierno estadounidense.

Ello luego del gesto que ambos mandatarios hicieron al conmemorarse los 200 años de la Batalla de Chacabuco el pasado domingo 12 de febrero.

Fue un hito noble y hermanable. En 1814, dos países, dos pueblos se unieron en pos de del respeto a la autodeterminación de las nacientes repúblicas y en contra del absolutismo.

Doscientos años más tarde, América Latina está dando cuenta de esfuerzos por aumentar los niveles de integración y de cooperación, lo que va justamente en sentido contrario de lo que vemos en las declaraciones y primeras acciones de la nueva administración de Trump. Pero no son los únicos.

Vemos con preocupación cómo las fuerzas de extrema derecha en Europa han ido ganando terreno de la mano de la explotación del miedo, la xenofobia y la intolerancia. Mientras que aquí, hace pocos meses, la derecha chilena usó como bandera de Campaña poner trabas a la inmigración, lo que da cuenta de una situación preocupante cuando pensamos en los derechos humanos de todos quienes viven en Chile.

El tema es que la amenaza del Presidente Trump no está dada sólo por construir un muro, poner prohibiciones al ingreso de ciertos países, imponer chantajes comerciales a las

empresas para impedir que fabriquen sus productos en distintos países de América Latina, entre otras medidas.

La verdadera amenaza podría estar por venir y tiene que ver con los desastrosos efectos que una política extrema de proteccionismo podría tener sobre las economías emergentes, entre ellas la nuestra.

¿Qué pasa si un día EE UU decide no comprar más fruta chilena para privilegiar la producción interna? ¿Y el cobre y el vino y muchos otros productos?

El anunciado muro en la frontera mexicana, es en realidad un muro contra América Latina - ya se ha dicho varias veces - pero parece ser que nadie ha salido a denunciarlo explícitamente y nadie parece estar haciendo algo para enfrentar esta potencial crisis.

Algunos economistas han planteado que el actual ciclo económico va a estar marcado por el fin de la era del crecimiento y que más bien, vamos a tener burbujas de crecimiento o crecimientos más acotados y contenidos. Eso va de la mano de fenómenos cada vez más recurrentes en países desarrollados y en vías de desarrollo, como el envejecimiento de la población y la reducción de la competitividad de las empresas privadas.

Es ahí donde opera el Estado y no el mercado, tenemos que usar transferencias públicas para corregir la profunda desigualdad, generar más justicia social con la gratuidad o la reforma laboral, entre otras cosas.

Según algunos expertos, la reactivación de la economía que planea Trump requiere de mucho más que levantar un muro e impedir que una empresa automotriz se mueva de México a Estados Unidos. El plan del mandatario es que las empresas estadounidenses creen más empleos dentro EEUU y aumentar la inversión interna en infraestructura.

Todo esto está por verse porque cualquier renegociación de un Tratado de comercio exterior no toma meses y sus eventuales efectos no son inmediatos, lo que nos lleva a la necesaria duda, ¿en el afán por cumplir ese programa no se podrán cometer errores fatales para economías tan expuestas como la nuestra?

Si esto se produce, la verdadera amenaza de los cambios de Trump podrían estar en que las actuales reglas del comercio exterior quedarían en entredicho y eso nos obligaría a echar una mirada profunda a nuestra cadena de valor y a lo que estamos haciendo como país, para buscar cómo diversificar nuestra matriz productiva y los mercados de destino de nuestros productos.

El muro es, al parecer, la punta del iceberg.

Es un botón de muestra a las trabas que pondrá Estados Unidos al resto de la región y que podría traer consecuencias desastrosas en nuestro desarrollo como país, al igual que a nivel continental.

Un presupuesto responsable

Este fin de semana se habrá conocido finalmente el proyecto de ley de presupuesto 2018, que la Presidenta dijo tendría dos ejes fundamentales que son la educación y la salud. Será de seguro un presupuesto austero, moderado y con la evidente necesidad de dejar suficientes holguras y recursos para el gobierno que viene, sea cual sea su signo, por lo que corresponde hacer una muy buena negociación política para cumplir con el necesario equilibrio que demanda la situación.

Salud y educación –sin embargo- serán los dos bastiones en donde la Nueva Mayoría tiene intención de defender tanto lo que se ha hecho hasta ahora como el legado al país y a las familias que han visto cómo sus vidas cambiaron para siempre, por ejemplo, al no tener que pagar la colegiatura o la universidad de sus hijos.

Pero hay que tener ciertos resguardos.

En agosto, el Índice de Producción Industrial alcanzó un crecimiento de un 5,1% respecto de igual mes del año anterior producto del aumento de la actividad de tres de los sectores más sensibles de nuestra economía, como es el minero (9,2% de crecimiento), agua, gas y electricidad (4,5% más) y manufacturas (1,4%).

Del mismo modo, el empleo anotó cifras auspiciosas con una caída de 6,9% a 6,6%, marcando una señal de que el mercado laboral está recuperándose.

Todo esto pudiera tentarnos a desatar las naves y emprender una escalada alcista que puede ser muy ilusoria. El presupuesto 2018 no debería mostrar un crecimiento por sobre el 3% porque si bien hay señales de una recuperación general de la economía chilena, lo que corresponde es cuidar, asegurar y potenciar estos pequeños brotes. Aún es incierta la recuperación total del cobre y aún falta por consolidar al menos unos cuantos meses decrecimiento claro y nítido.

Lo que sí es cierto, es que las mejores cifras son señales inequívocas de que la reactivación llegó antes, agudándole la fiesta a ciertos candidatos que andaban asegurando que la reactivación su obra... sin siquiera habiéndose producido la elección.

Tenemos mejores perspectivas y pueden ser aún mejores si tramitamos un presupuesto que sea ante todo responsable. Y la responsabilidad tiene que ver con poner plata en aquellas cosas que sí transforman a Chile e impulsan una mejor calidad de vida y que son capaces de transformar nuestra economía o nuestra oferta de servicios.

Prueba de ello es el Plan Nacional de Inversiones de Salud, que contemplaba la construcción de 20 nuevos hospitales en los cuatro años de gobierno, dejando otros 40 en fase de construcción, diseño o licitación, junto con la construcción de 332 establecimientos asistenciales, además de la reposición y adquisición de equipamiento clínico, ambulancias y vehículos.

Pues este año terminará con los 20 hospitales construidos, 40 hospitales en construcción, licitación, estudios técnicos de pre inversión o diseño de obras, 63 Cesfam terminados y otros 35 en construcción, más 100 Cecosf y 74 SAR construidos y entregados.

Algo similar tenemos en educación donde gracias a las reformas y a los recursos destinados a este sector, hoy tenemos a más de 262 mil jóvenes de todos Chile estudiando en las 32 universidades, 6 centros de formación técnica 6 institutos profesionales adscritos, con gratuidad. En el presupuesto 2018 estarán de seguro los recursos para que aumentemos a 320 mil jóvenes los que puedan estudiar lo que deseen, sin depender de la capacidad de pago de los padres.

El presupuesto es esto y mucho más, es la oportunidad de transformar Chile en una nación mucho más justa y equitativa, más inclusiva y que sea capaz de garantizar derechos y dignidad. ¡Y cuando pedimos responsabilidad, es justamente eso y nada más: ser cuidadosos con lo que estamos logrando porque cada paso es delicado y tiene consecuencias que no tiene que ver con números, sino con jóvenes estudiando gratis o con un mejor hospital o consultorio para atender a nuestra gente.

Una apuesta a mayor crecimiento

Finalmente conocimos el proyecto de Ley Presupuesto 2018, coherente con los compromisos y eso es lo destacable, cuando un gobierno asume, tiene que hacer los esfuerzos por cumplir.

No fue sorpresa que el eje estuviera planteado por Educación y Salud, lo que además se buscó también con la Reforma Tributaria. Y sin duda que la sensibilidad de recoger la inquietud por la situación del Sename es un punto a favor indiscutible. Pero más allá de la contingencia, me parece relevante la mirada al crecimiento y reactivación dada en este proyecto, enfocado en la inversión pública. Cuyo énfasis fue descuidado durante la administración pasada y retomado con un aumento en este ítem.

Son hasta ahora cifras preliminares, con los datos concretos en materia de educación nos hace más sentido este incremento en el gasto público, que más que aumentar la deuda, como advierten desde la Derecha de manera agorera, no tiene otro sentido que el de financiar la gratuidad en educación al 60% de los estudiantes más vulnerables o, la inversión para cumplir la meta de que 70 mil infantes tengan acceso gratuito a salas cunas, lo que permite además incentivar una mayor fuerza laboral femenina. Lo mismo la implementación de la Nueva Educación Pública.

Son las cifras globales de las que hasta ahora se ha colgado la Derecha para crear alertas.

Este Erario 2018 obedece al deber de bajar el déficit estructural del 0,5% que está dentro de la política responsable, Chile es un país de certezas donde es bueno invertir.

Presupuesto que además cumple con la suficiente holgura y recursos para el gobierno que viene, sea cual sea su signo. Contrario a la intención que se le busca dar respecto que la Nueva Mayoría tiene intención de defender el llamado “legado” de esta administración. Esta apuesta refleja que no se trata sólo de lo discursivo, sino que el compromiso sobrepasa al simple relato. Hay familias que han visto cómo sus vidas cambiaron para siempre, por ejemplo, al no tener que pagar la colegiatura o la universidad de sus hijos.

Pero es verdad que debemos tener ciertos resguardos.

En agosto, el Índice de Producción Industrial alcanzó un crecimiento de un 5,1% respecto de igual mes del año anterior, producto del aumento de la actividad de tres de los sectores más sensibles de nuestra economía.

Del mismo modo, el empleo anotó cifras auspiciosas con una caída de 6,9% a 6,6%, marcando una señal de que el mercado laboral está recuperándose. Todo esto pudiera tentarnos a desatar las naves y emprender una escalada alcista que puede ser muy ilusoria. Sin embargo, el Ejecutivo tomó la vía responsable de apostar por un crecimiento en 3,9% del gasto público.

Y es que corresponde cuidar, asegurar y potenciar estos pequeños brotes, porque aún es incierta la recuperación total del cobre y falta consolidar al menos unos cuantos meses de crecimiento claro y nítido.

Lo que sí es cierto, es que las mejores cifras son señales inequívocas de que la reactivación llegó antes, aguándole la fiesta a quienes aseguran, en tono mesiánico, que el avance se viene de la mano de su candidato.

Tenemos mejores perspectivas y pueden seguir si tramitamos un presupuesto que sea ante todo responsable. Y esto tiene que ver con invertir en aquellas cosas que sí transforman a Chile e impulsan una mejor calidad de vida.

Una candidatura, un rumbo

¿Se imagina tener dos manos izquierdas o dos manos derechas? ¿Como una especie de Puente CauCau? Inútil.

Todo lo contrario a lo que ha hecho esta alianza política en Chile desde el retorno de la democracia: juntar lo mejor del mundo de la centro izquierda, el progresismo laico y el humanismo cristiano, para ofrecer a Chile un Estado que se hace cargo de los agudos problemas sociales que provoca el mercado sin control, una receta de economía a escala humana, y una mirada integradora de la sociedad donde pensamos en derechos y no en bienes de consumo.

Es sensata una tregua para concentrarse realmente en lo que importa, que es mostrar nuestras profundas diferencias con una derecha que ve todas las soluciones en el mercado, que cree que no debe haber regulación a los poderosos, que piensa que es mejor la idea del voucher a la idea del derecho social y que incluso - en algunos de sus exponentes - no muestra una idea moderna de lo que es la democracia, la participación y la integración social.

No es mentira que entre las candidaturas de Carolina Goic y Alejandro Guillier, tenemos cosas en común. Es nuestra mirada en temas como la salud, educación, economía, y sistema previsional, lo que en realidad nos distancia de la visión casi mercantilista que desfila en la vereda de la derecha. Entonces es cierto que se debe fortalecer nuestro proyecto como PDC y la llegada a la ciudadanía, la conexión con el electorado y gastar menos tiempo en provocar y protagonizar disputas que no nos han beneficiado en nada.

El partido tomó la decisión de levantar una candidatura independiente y lo que corresponde ahora, es asumir esa responsabilidad y llegar a la elección entregando nuestro mensaje de manera nítida y clara. El resto, es perder el tiempo.

Tenemos que dar a conocer nuestra propuesta programática, mostrar nuestras convergencias con el mundo de centro izquierda y la diferencia frente a la derecha, demostrar que somos una alternativa que da gobernabilidad y que representa mejor a la gente que quiere cambios con mesura, con sensatez y con la capacidad de llegar a acuerdos que sean duraderos en el tiempo.

Esa es nuestra fortaleza. Cambios bruscos o logrados con mayorías circunstanciales, pueden sucumbir con los cambios de signo gubernamental, afectando la credibilidad del sistema político y generando pequeñas crisis que la gente sencillamente no se merece.

Desde Facebook:

Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado

Una cuenta también con sello DC

¿Quién dijo que Chile no ha avanzado? ¿Le vamos a seguir creyendo a los que insisten en contar medias verdades y asegurar que las reformas han sido un retroceso para el país? ¿Es un retroceso para la señora Eugenia de la Serena que tiene a sus cuatro hijos estudiando gratis en la enseñanza superior? ¿Es un retroceso para Tania Huenul que pasó de vender 400 mil pesos a 56 millones mensuales gracias a la ayuda de un programa de gobierno?

El discurso de la derecha se cayó a pedazos. El discurso de la Presidenta fue tan sólido, claro y transparente que no dejó espacios para la ofensiva que la derecha tenía planeada desde hace días. ¿Querían compararse?

Dijeron que había crecido más con Piñera que en estos años. Sí, pero la media verdad que no dijeron era que lo hicieron con un precio del cobre que era casi el doble del que le tocó a este gobierno. El empleo por cuenta propia aumentó mucho más en el gobierno anterior que en este, dictaron apenas una ley laboral, versus las 28 del gobierno de la Nueva Mayoría.

Sólo en el tema de las pensiones, marcamos un abismo de diferencia con la derecha que ha postulado como única solución a las bajas jubilaciones, que los chilenos tienen que trabajar más años y alargar “su vida útil”. La Presidenta señaló que la reforma que ofreció la Nueva Mayoría a Chile permitirá un aumento inmediato de 20 por ciento en las jubilaciones de los pensionados de AFP, lo que representa no sólo un legado clave para el futuro, sino que además es una muestra de cómo se escuchó una demanda ciudadana muy sentida.

Los avances han sido notorios. La línea 7 del metro, los más de 500 mil compatriotas de zonas aisladas o rurales y en todo Chile, que usan utilizan servicios de transporte subvencionados por el Estado, el matrimonio igualitario, el nuevo Plan Araucanía que busca enfrentar el tema de fondo a la violencia rural en la zona, los 21 hospitales que estarán contruidos al final del periodo, la extensión de la gratuidad en la educación para cientos de miles de familias de todo Chile, la creación de 325 mil empresas -60 mil más que en la administración anterior-, una tasa de desempleo de 6,5% que está por debajo del promedio histórico a pesar del mal momento económico, y un largo etcétera.

Lo que más me entusiasma de esta cuenta pública, es que la DC ha aportado no sólo con votos, sino que con ideas, entusiasmo, propuestas y defensa del programa. Hemos puesto lo mejor del partido para acompañar estas reformas y para mejorarlas con nuestra mirada de centro que sin duda aporta a esa gobernabilidad de la que habló la mandataria durante su último discurso en el Congreso.

Es esto lo que hay que preservar, cuidar y proyectar. Una mirada humanista de la economía, las leyes y el Estado de Derecho. La derecha ha tenido la desfachatez de decir que viene a terminar con las reformas, a acabar con la gratuidad, a retroceder en la reforma laboral y educacional, en restar derechos ya ganados.

Es eso lo que se juega en este nuevo periodo electoral, donde más allá de las candidaturas independientes de la Nueva Mayoría, lo que cuenta es defender esta obra que le ha cambiado al vida a las familias chilenas.

La derecha se quedó sin discurso luego de la demoledora demostración de la Presidenta. Ahora es un asunto de responsabilidad política entender a este nuevo Chile, ofrecerle una continuidad de estas políticas, una continuación de este concepto de que los chilenos somos sujetos de derechos más que meros consumidores. Que queremos más derechos sociales y no bienes de consumo.

Fue una bonita cuenta pública, alentadora, optimista, con sello de progresismo, con sello de centro izquierda y con sello de la DC. Fue una cuenta pública para un Chile que cambió sin vuelta atrás.

Una nueva oposición

Sí, parece un déjà vu. Hace 4 años, la entonces Concertación perdía el gobierno frente a Sebastián Piñera y se abría una tremenda incertidumbre respecto de cómo sería volver a ser oposición a la derecha, pero ahora en democracia. Volvemos a la misma situación, pero claro, con varias cosas nuevas: la derecha no tiene control abrumador en ambas Cámaras y surgió una fuerza nueva - el Frente Amplio - al cual sería un error profundo ignorar como si fuesen recién llegados a la política.

Lo cierto es que algo se mantiene: el PDC será oposición, ocupando el lugar que nos dio la ciudadanía en las últimas elecciones.

Es evidente que esta nueva oposición cruza un ciclo, cada partido hará su propia evaluación interna. Si eso puede derivar en un pacto político, es hacer política ficción. Y en ese mismo sentido, adelantar alianzas o rechazar alianzas antes de definir cuál es el proyecto político en el que nos vamos a embarcar, es una pésima idea.

Flaco favor le hace al PDC instalar que seremos un partido político “bisagra”, la primera tarea no tiene que ver con la relación con otros partidos o conglomerados, sino que lo correcto es orientarnos a discutir qué será de nosotros bajo nuestras propias urgencias.

El problema nuestro es cómo tomar decisiones internas que sean apoyadas y respetadas por todos, cómo evitar que las diferencias se transformen en divisiones internas y cómo hacer que la DC vuelva a ofrecer a Chile una propuesta que sea respaldada por la mayoría de los chilenos como lo hicimos alguna vez.

Un partido “bisagra” no tiene alma, no tiene futuro. Debemos volver a trabajar con serenidad, voluntad y generosidad; acá nadie sobra en la tarea, que debe ser colaborativa, humilde y con real responsabilidad política.

Una reforma esperada y justa

Esta semana se habrá concretado la presentación de la reforma al sistema previsional que creará un seguro colectivo, a partir de una cotización adicional de un 5% que será aportada por el empleador. Con esto, al fin se le pone el cascabel al gato y se asume de una vez por todas, la tarea de enfrentar uno de los problemas sociales más apremiantes del país: las bajas pensiones que entregan las AFP.

De acuerdo a diversas fuentes, que difieren levemente en sus cifras, al año 2015 el monto promedio de una pensión entregada por las AFP era de poco más de 190 mil pesos en pensiones de vejez y de poco más de 207 mil pesos para el promedio total de pensiones entregadas. Las tasas de reemplazo para Chile bordean el 40% para los hombres y menos del 35% para las mujeres, lo que nos deja como uno de los países OCDE con las menores tasas de reemplazo.

Había que hacer algo y se hizo. Este proyecto que empezaremos a debatir en el Congreso debe tener como meta una sola cosa: mejorar las pensiones tanto de los actuales como de los futuros jubilados. Debemos mejorar las pensiones ahora.

Para eso hay que cumplir varias condiciones. Lo primero es aumentar la carga de cotizaciones y, en tal sentido, el aumento de un 5% en el ahorro previsional es un paso crucial. Además, el hecho de que sea el empleador quien aporte esta nueva cotización, permite finalmente tener un sistema tripartito de financiamiento de la jubilación, que es una de las políticas que todos los organismos internacionales y la propia OCDE recomiendan para tener un sistema robusto.

La propuesta del Gobierno permitirá el mejoramiento en un 20% de las actuales jubilaciones y no en 40 años más, de acuerdo a otras fórmulas planteadas desde la oposición. Además, resuelve un tema que al menos para la ciudadanía, es de primera importancia y que tiene que ver con no traspasar más dineros a las AFP.

Las AFP son parte interesada en este cambio regulatorio y su opinión no vale más que la de los propios cotizantes que son los afectados finales de las bajas pensiones que entregan estas compañías. Si tuviéramos pensiones dignas, buenas tasas de reemplazo y un sistema legitimado, el debate sería bien distinto y de seguro la gente tendría otra opinión de su AFP. Pero lo cierto es que las Administradoras hasta ahora, son parte del problema.

Es por eso que el Gobierno resolvió crear un ente estatal que deberá recaudar, administrar y asignar el 5% adicional, tanto en el caso del 3% que va a las cuentas de capitalización individual, como el 2% que debería ir al fondo solidario.

Este sin duda es uno de los puntos que centrará buena parte del debate, ya que "en teoría" hay una mayoría que quiere que ese 5% sea de propiedad íntegra del cotizante. La forma en que se resuelva este asunto está directamente relacionada con elevar las pensiones de los actuales jubilados, pues suponemos (aún no conocemos el contenido final de la iniciativa) que el 2% es que permitirá generar la solidaridad generacional que facilite el mejoramiento de la jubilación al día de hoy.

Más allá del detalle del debate, lo relevante es que estamos dando respuesta a una demanda muy justa y apremiante. En el anterior gobierno de nuestra coalición, creamos el Pilar Solidario que ha beneficiado a más de un millón 800 mil personas, así que esta propuesta viene a completar un trabajo que iniciamos años atrás.

Otros no han hecho nunca nada por mejorar las pensiones de la gente, mientras que nosotros estamos poniendo en la mesa una reforma esperada y justa.

Una región con vocación exportadora

Nuestra región de Coquimbo tiene un insospechado valor para las exportaciones de todo Chile. ¿Sabía usted que los principales países a los cuales llegan nuestros envíos son Japón y Alemania, seguidos de Corea y China? Somos exportadores mineros esencialmente, con una participación menor de otros productos, lo que nos hace poner una alerta no menor respecto de nuestra matriz productiva regional.

Un informe del INE muestra que en mayo de 2017 las exportaciones de la región alcanzaron 208,8 millones de dólares un 30,6% frente al mismo periodo del año pasado, lo que representa 91 millones de dólares menos para las empresas.

La minería es el principal exportador de la región de la mano de los envíos de cobre y de hierro y que suman el 77% de nuestra producción al exterior. El problema es que el cobre ha tenido una caída importante y su menor valor, ha arrastrado a toda la economía chilena a la baja.

El sector silvoagropecuario es el segundo de relevancia con un 11,7%, donde destaca básicamente la exportación frutícola y detrás de ella, la de alimentos y alcoholes. Más atrás están la Industria y la pesca extractiva, pero con poco más de un 8% y un 2,4% respectivamente. Es decir, si a la minería le va mal, a la región de va mal.

Hay que hacer algo. No sólo en Chile, sino que a nivel de las regiones. Debemos ser capaces de encontrar aquellos nichos productivos y exportadores que resuelvan dos

cosas: evitar la monodependencia de un solo producto y, por otro lado, buscar más mercados donde poner estas exportaciones.

Sería muy interesante contar con los investigadores, centros de estudio y universidades para analizar nuestras opciones como región minera y las oportunidades que podemos abrir en otros mercados. Depender del cobre no es una buena idea, sobre todo cuando vemos que cada cuatro o cinco años, Chile es afectado por alguna turbulencia económica internacional.

Cuando hablamos de que queremos más descentralización y más poder de decisión en las regiones, tenemos que ser capaces de que esa independencia se genere en la misma región. No podemos esperar que de Santiago vengan a decirnos cuáles son las mejores estrategias para asegurar el desarrollo de la región. La invitación es a los cerebros locales, a los innovadores y a los emprendedores, para aportar, opinar y convocar a los actores locales y buscar un mejor futuro para nuestra gente.

Una región en deuda

El último informe sobre ahorro y endeudamiento de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), evidenció que nuestra región ocupa el primer lugar nacional de deudas mayores a 90 días o más, con una tasa de total de 2,6%, desglosada en un 1,5% de morosidad endeudas de consumo, un 0,8% en deudas habitacionales y un 5,8% de morosidad comercial.

Esta cifra es preocupante y grave, ya que el promedio del país está en un 1,2%. La deuda comercial (créditos a empresas) superior a los 90 días en la región es la mayor de todo el país, particularmente inquietante en localidades como Coquimbo, Ovalle y La Serena.

¿Qué está pasando? Una de las explicaciones que ofreció la propia SBIF es que la región de Coquimbo tiene un fuerte rezago en materia de una adecuada educación financiera. En general, el 98% de las personas mayores de 15 años en Chile tiene acceso a algún instrumento financiero, llegando incluso a que cada chileno tiene un promedio de 5,6 productos de acceso financiero. El problema está cuando esas mismas personas, no tienen un acceso equitativo a una educación adecuada e información clave para aprender a usar estos instrumentos.

Eso es lo que pasa en nuestra región: un amplio acceso al crédito y al endeudamiento, bajos sueldos o altas tasas de desempleo, combinado con una pobre educación financiera.

Hay que hacer algún urgente en la región y eso no basta con un par de clases, talleres o actividades aisladas en la zona. Se requiere un rol más activo del Gobierno Regional y sus autoridades para ir atacando la morosidad comercial y de las familias, área por área, segmento por segmento.

El tema hay que atacarlo desde distintas aristas, partiendo por los colegios, las agencias de desarrollo –como INDAP o SERCOTEC- hasta llegar al sector privado, en especial la pyme. Esto es porque la mayor morosidad está afectando a las pequeñas empresas, situación que requiere de un diagnóstico más fino y de un plan de acción. Si cae la pequeña empresa, cae la economía regional.

Creo que no está de más que se concrete una cita con los sectores más afectados y se busque una forma de salir de este ranking. Este no es un tema de la esfera privada. No es un problema de cada persona. A estas alturas, es un problema social y para eso están las autoridades locales, para enfrentarlos desafíos y ofrecer soluciones a la gente.

El verdadero sentido de la Junta Nacional DC

La tentación de varios es instalar que tras esta nueva Junta Nacional de la Democracia Cristiana, prácticamente saldremos con la elección presidencial ganada. Que basta proclamar a nuestra presidenta del PDC, Carolina Goic y partir rumbo a la primera vuelta.

Y como dice el refrán, no por madrugar amanece más temprano, aún hay mucho camino que recorrer, muchas tareas que cumplir y demasiado trabajo que hacer para siquiera pensar que podremos seducir de nuevo al electorado nacional sin antes hacerse cargo de dos asuntos esenciales.

Primero, despejar cuál es nuestro aporte al país, a través de una propuesta programática, cuáles son nuestras recetas para resolver las urgencias sociales que a nivel país aún nos apremian y, si vamos a respaldar el curso de las reformas que hasta ahora se han implementado.

Lo segundo, debemos resolver cuál será nuestro domicilio político. ¿Vamos a seguir en una coalición de centro izquierda, a emprender el camino propio o, acaso sucumbir a la apuesta por aliados de derecha?

Son dos temas de fondo, que definen el futuro de la DC en las próximas décadas, que van a determinar la trascendencia y el legado que nuestro partido ha entregado a Chile desde su fundación. Un paso en falso y esto perfectamente puede terminar en el declive de las ideas democratacristianas.

Puesto así, la candidatura es un asunto casi incidental, pues si nuestro partido tiene una propuesta programática robusta, una sólida política de alianzas y el proyecto político en el que vamos a trabajar, la candidatura no sólo saldrá de manera natural, sino que además tendrá un discurso certero, transparente y claro frente a la ciudadanía. Como siempre, se trata de no poner los bueyes delante de la carreta.

Acá la disyuntiva no es si vamos o no a primera vuelta. Suena bonito, suena aguerrido, suena provocador, pero ¿vamos solos a primera vuelta, sin acuerdo parlamentario, sin acuerdo programático, sin coalición, sin alianzas, así, sin nada?

Nuestra obligación es resolver qué opina el PDC frente a lo que resta de la Reforma Educacional y la gratuidad, qué hay que hacer para corregir el sistema de AFP que tiene la ciudadanía muy molesta, o qué se puede hacer para reactivar la economía y el crecimiento.

¿Tenemos opinión frente a cómo mejorar el sistema de salud que ha mostrado una de sus peores caras por estos días, o la corrupción a todo nivel, o la colusión de los mercados?

Es preocupante que ante la evidente fatiga anímica del partido, unos vean la oportunidad para arrastrarnos a una aventura individualista, pero la identidad no se consigue sin votos, sin representación parlamentaria, sin capacidad de influir y liderar. Si hay algo que nuestro partido puede aportar a Chile es su capacidad de garantizar estabilidad política, social y económica, porque somos la bisagra política natural entre el mundo progresista de la izquierda y el mundo progresista del centro.

Ahí está nuestro valor agregado, eso que ningún otro partido tiene, es una característica nuestra que nos hace únicos no sólo en Chile sino que en el mundo.

Esas decisiones las debe tomar el partido, con una configuración directiva que le reste presión a quien asuma la candidatura, de modo que las decisiones sean colectivas, integradoras y consensuadas entre todas las sensibilidades internas. La resolución acerca de cómo vamos a participar del proceso programático y de selección del candidato o candidata presidencial del que será el bloque político que enfrente a la derecha, no es una decisión que debamos imponérsela a Carolina Goic, nuestra carta presidencial. Sería injusto e inapropiado.

Lo central es que esta Junta se transforme en una herramienta de unión, de convocatoria a las fuerzas progresistas del centro que han confiado en la DC y que están a la espera de ideas nuevas, atrevidas y seductoras para Chile.

El aislacionismo no es una actitud que haya estado en el centro de nuestra gestión y convivencia política. No es momento de traicionar lo que hemos sido durante décadas: un partido que ha generado unión y puntos de encuentro entre los chilenos.

Urgencia a la emergencia

Los efectos de la acción de la naturaleza en nuestro continente han dejado en claro que las medidas de contención, recuperación y de reconstrucción están sobrepasando las fronteras y su capacidad autónoma de respuesta.

Lo hemos visto en estas semanas con la destrucción generada por los huracanes que azotaron el Caribe y los dos terremotos que golpearon el corazón del territorio mexicano de manera terrible. Un tema que conocemos de cerca.

Consecuencias devastadoras para la vida de las personas, los pueblos y las economías locales, al tratar de recuperar lo perdido. Y es que cuando el fenómeno es de tal escala y con resultados así de globales, entonces también debe haber una respuesta coordinada y contundente para prevenir los desastres y luego trabajar en la reconstrucción.

Se insiste en que hablar de desastres naturales no es correcto. Claro que no, se trata de la evidencia y estragos por el descuido y daño con que hemos tratado nuestro planeta.

Esto se ha debatido las distintas instancias internacionales. Sin ir más lejos, en el último encuentro del Parlatino, que reúne a congresistas de Latinoamérica y el Caribe,

trabajamos en acuerdos transversales para precisamente adoptar medidas que ayuden a enfrentar las emergencias a nivel regional.

Y en nuestro último encuentro de Eurolat, en San Salvador, los legisladores insistimos en la importancia de mantener el compromiso con la lucha contra el cambio climático y con el Acuerdo de París. Ante la autoexclusión de EEUU en esta materia, Europa y América Latina tienen que incrementar sus esfuerzos frente al calentamiento global.

Eso es lo relevante, lograr coherencia en el resto de la región para generar mecanismos que permitan una adecuada acción en la emergencia.

Pero el trabajo no es sólo en la urgencia. En ello, la legislación es clave para generar reglas que promuevan buenas normas preventivas en materia de construcción, planificación urbana, dotación de recursos para equipos de rescate y una serie de otras áreas en donde se requiere que el Estado esté preparado y sepa cómo actuar.

Ello es particularmente relevante para un país como el nuestro, que en apenas unos años ha debido hacer frente a 24 catástrofes de este tipo.

Chile y otros países han impulsado leyes especiales en este campo, como es el caso del proyecto que crea la nueva Onemi o el que reemplaza a la Conaf, pero a la luz de los hechos de estos días, queda claro que nunca se está actuando con la velocidad y agilidad necesaria.

Hay que poner énfasis que esto no es catastrofismo ni sensacionalismo. Es simplemente aprender de los errores, de la experiencia y actuar con la mente puesta en salvar vidas.

Solo poniendo estas cartas sobre la mesa, podremos sortear de manera exitosa estas manifestaciones de la naturaleza, que ya no son extraordinarias.

Usurpación de funciones

Los trascendidos en torno a la supuesta eliminación de facultades al Sernac que habría realizado el Tribunal Constitucional, es una alarma gravísima para el equilibrio de los poderes del Estado en Chile y camina peligrosamente por una línea de usurpación de funciones. El TC no es legislador, no puede doblegar las decisiones que se adoptan en organismos que sí lo son y tampoco puede pretender dictar normas que son materia de ley y de debate del Congreso Nacional.

Independiente del tema o del proyecto de ley, el TC se ha vuelto un instrumento de un rol dudoso y que llama a equívocos como los de estos trascendidos de prensa. El Congreso, en el uso de sus facultades, decidió entregar facultades fiscalizadoras y sancionatorias al Sernac para poner fin a las asimetrías de derechos que caracterizan las operaciones comerciales de compra y venta: los consumidores pagan por bienes y servicios, pero no tienen una efectiva protección de sus derechos, mientras que los empresarios tienen muchísimas herramientas para evadir sus responsabilidades ante casos de incumplimiento.

El TC estaría definiendo que son los Tribunales los que deberían zanjar estas disputas. Pues eso fue debatido en el organismo que en Chile hace las leyes –el Congreso- y allí definimos que ese tipo de reclamaciones no son ni sencillos, ni baratos ni menos expeditos. Opero además, esa es materia que fue legislada por un cuerpo colegiado de personas elegidas para tales efectos, mientras que el TC no está facultado para hacer leyes ni menos definir materias como lo estaría supuestamente haciendo.

Fue el legislador quien entregó estas facultades al Sernac para que al fin podamos tener una capacidad de defensa de los derechos de los consumidores ante casos graves como la colusión o los abusos de proveedores. Fue el legislador el que entendió que la fiscalización debe estar acompañada de sanciones, porque de lo contrario se trataba de letra muerta.

De ser cierto lo que informan los medios, estamos ante una grave situación ya que se cristalizaría el anhelo del empresariado por mantener una situación de desbalance y debilitamiento de la defensa de los derechos de las personas.

Ante eso me pregunto, ¿un eventual Gobierno de Piñera se la jugará por defender una legislación que equilibre la cancha o por dejar que el TC cercene las facultades del Congreso y de paso lesione a las personas?

Es imperioso despejar cuanto antes estas informaciones, más aún cuando estamos ad portas de una decisión tan relevante como la de elegir al Presidente que debe defender los intereses de todos los chilenos, no sólo del gran empresariado.

¿Vamos para atrás?

Cuando comenzó el gobierno de la Presidenta Bachelet, había más de 4 mil 100 familias que no tenían casa propia en la comuna de Coquimbo. Es la cantidad de personas que casi llenarían el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Pero eso va a cambiar radicalmente cuando, al terminar este periodo, todos ellos se transformen en propietarios de una vivienda.

Esta semana se inauguró el conjunto habitacional Las Canteras, el proyecto habitacional más grande de los últimos 20 años que se construye en la ciudad puerto. Se entregaron los primeros 520 hogares luego de casi dos años de faenas, en un proyecto que fue impulsado por las propias familias que confiaron y creyeron en el Ministerio de Vivienda y en el Gobierno.

Se trata de un conjunto de departamentos de 57 metros cuadrados, áreas verdes, sede social, multicanchas, juegos infantiles, estacionamientos y un parque con ciclovías. Además, está en pleno casco urbano de la comuna con vista a la costa, acceso a locomoción colectiva, centros deportivos, comercio y colegios. Es decir, el estándar con que se ha construido dista mucho de las soluciones parche o de mala calidad que se han visto antes.

Nada de mandar a las familias a la “punta del cerro”, o a lugares periféricos, ni menos aún, ofrecer barrios feos, desconectados y desprovistos de las mínimas condiciones. Esto es fruto de una mirada integradora de la política de vivienda, donde lo que realmente importa es la integración, la dignidad y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Este conjunto se sumará otros que al final del mandato nos permitirá dar respuesta al sueño de la casa propia a 4 mil 169 familias de Coquimbo. Esto obliga a preguntarnos si en verdad es cierto eso que anda diciendo un candidato, acerca de un país estancado. Si usted es una de esas personas beneficiadas, haga memorial. ¿Recuerda lo pequeñas que eran las viviendas sociales años atrás?, ¿recuerda dónde se construían?, ¿tenían parques, juegos infantiles, colegios?

Si recuerda bien, los estándares eran bastante más precarios y es eso lo que usted debe poner en la balanza cada vez que le digan que vamos para atrás. Los cambios y las reformas provocan molestia en grupos que durante años tuvieron privilegios que nadie tocaba, pero para hacer estas viviendas sociales de alta calidad, se requerían cambios tributarios, para ofrecer colegios gratuitos cerca de estos barrios, se requería una reforma educacional y así sucesivamente.

Hay que felicitar a esas familias que ahora comenzarán una nueva etapa en sus vidas, con casa nueva, barrios más integrados, colegio o universidad gratis y con la posibilidad de destinar esos dineros que antes eran para la mensualidad de la enseñanza, para mejorar su vida diaria. ¿Sigue creyendo que vamos para atrás?

Victimización regional: salvadas por un terremoto

Las cifras sobre victimización en todo el país mostraron claros signos de estabilización, salvo en nuestra Región donde se vio un alza estadísticamente significativa. Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), que fue dada a conocer por el gobierno hace pocos días, en nuestra zona los índices de victimización saltaron de un 21% a un 27,6%, mientras que la tendencia a nivel nacional es a la baja.

La Subsecretaría de Prevención del Delito explicó que esta situación no tiene que ver con un alza significativa de los delitos en la región, sino que se relaciona con el bajo punto de comparación de 2015, a raíz de los efectos del terremoto y tsunami. La explicación es bien sencilla: En situaciones de emergencias y catástrofes, los delitos tienden a bajar y después retomar sus niveles históricos.

Pero más allá del “accidente” que estaría motivando el alza en nuestra región, es obvio que la lucha contra la delincuencia no se debe relajar, ni mucho menos pensar que hemos logrado controlarla. En momentos en que la situación económica se ve cada vez más compleja, es natural pensar que podría aumentar los niveles de criminalidad, por lo que es necesario tomar medidas.

Un dato interesante de las estadísticas entregadas por la subsecretaría es que esa caída en la sensación de temor, está relacionada con la baja en situaciones de desorden y violencia en el “espacio público”. Estamos hablando de la caída en faltas y delitos como el consumo de alcohol en la vía pública, rayados o grafittis, balaceras y el microtráfico.

De hecho, a través de distintos programas de Gobierno, se han recuperado más 317 mil metros cuadrados de espacios públicos para la comunidad, equivalentes a unas 50 canchas de fútbol. Allí donde antes había sitios eriazos o microbasurales en los que se producían delitos, hoy hay plazas, juegos o proyectos sociales. Esta política a beneficiando a cerca de 1 millón 700 mil personas en todo Chile.

El asunto es que hay que hacer más para disminuir las cifras de temor y hacer que en la región se note que el trabajo da frutos. Uno de los problemas más recurrentes del tema de la criminalidad es que la Fiscalía tiene grandes tasas de archivo de causas al no dar con un imputado conocido y detenido para llevarlo a juicio. En esto es esencial que haya más colaboración de la comunidad y más coordinación del trabajo policial.

Si no tenemos ese esfuerzo común, es muy difícil que una institución por sí sola logre resultados visibles. En tal sentido, hay que seguir profundizando los lazos intersectoriales y entre instituciones del Estado y la ciudadanía. La organización y el autocuidado son herramientas que muchas veces tendemos a minimizar en el combate contra la delincuencia, pero que son aliados esenciales para lograr sociedades más preocupadas y ocupadas de entender que la seguridad ciudadana es una tarea compartida.

Violencia homofóbica, no gracias.

Hace pocos días se conocieron los resultados del XV Informe de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y Género que elabora el Movilh, donde se muestra un lamentable aumento de las agresiones y ataques en todo el país, contra personas que tienen orientaciones sexuales diferentes.

El informe indica que en Chile se registraron 332 casos o denuncias por homofobia o transfobia en 2016, un aumento de un 28,6% en relación al año 2015. Nuestra región no queda al margen de esta realidad, ya que concentra el 1,8% de las denuncias del país con hechos perpetrados en La Serena Y Coquimbo, principalmente. Se desprende de este estudio, que esta cifra –si bien es pequeña- es una de las más altas en la historia regional.

Estas cifras son consistentes con un estudio similar que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la OEA, en 2014, donde se mostraba que Chile estaba entre los 10 países con mayor número de ataques a personas de sexualidad diferente.

No se trata de entrar al debate de fondo de si la homosexualidad está bien o no, de si es normal o no. Lo relevante es que no tenemos porqué aceptar como sociedad la violencia

ni menos el ataque físico y verbal a personas que son distintas y que tienen opciones sexuales diferentes. Nadie tiene derecho a violentar a otra persona por ninguna razón, sea cual sea.

Sencillamente no es civilizado insultar o golpear a gente por sus inclinaciones o preferencias sexuales, políticas o religiosas. Estamos en el siglo XXI y las controversias y las disputas se arreglan en contextos de debate, de diálogo o –en el peor de los casos- en tribunales u organismos administrativos, pero nunca a los golpes o a los insultos.

El problema es que muchos de estas denuncias de discriminación y/o ataques son perpetrados no sólo por personas, sino también por instituciones públicas y privadas. Debemos hacer más esfuerzos a nivel de Gobierno y a nivel de las empresas, para ir dejando atrás conductas que hoy no son aceptables. A la violencia homofóbica, hay que decirle "no, gracias".

El mundo es diverso y las sociedades son complejas; esa es la nueva realidad. Muchas veces se dice que en regiones hay menos espacio o menos tolerancia a expresiones culturales, religiosas o culturales de vanguardia y creo que eso también es una caricatura. En esta región podemos demostrar que aceptar al otro tal como es, no es un atributo de las "clases iluminadas de Santiago", sino un atributo propio de las buenas personas. Y en regiones, viven buenas personas.

No hay excusa alguna para ejercer la violencia ni de género, ni homofóbica, ni política, ni social de ningún tipo. A este país, la violencia le costó muy caro y dejó heridas que aún están abiertas. No dejemos entonces que nuevos fenómenos, nos abran nuevos traumas que no podamos erradicar a tiempo.

Vocación democrática

Protestas sociales que terminan con jóvenes muertos, prensa censurada, aislamiento internacional, fuerte represión contra la ciudadanía y peligrosos intentos por terminar con uno de los poderes del Estado y cerrar el Congreso. ¡Qué manera de parecerse esta descripción de una dictadura!

Esto es lo que pasa en Venezuela en este preciso instante y la situación lejos de parecer más calma, parece deteriorarse día a día. Las autoridades venezolanas parece que vivieran en una realidad paralela, mostrando un país que sólo existe en sus mentes y torciendo evidentes hechos de la realidad, con una propaganda que linda en la vergüenza ajena.

Venezuela es hoy un país que se dirige a la dictadura y es necesario intervenir para que su pueblo no sufra las consecuencias que han vivido otras naciones que vivieron el fin de sus democracias. Ese fue nuestro caso. El atropello a los derechos humanos, el acallamiento

de la prensa y la destrucción de las instituciones democráticas son signo inequívoco de lo que estamos hablando.

Y, ¿qué recibe Chile por apoyar la democracia? Ataques, insultos y una retórica pasada de moda que ya nadie acepta, entiende o tolera. El canciller Muñoz aclaró que la única motivación de nuestro país es apoyar los procesos de diálogo, la estabilidad y la paz social, de la mano de la mantención y cuidado de las instituciones que aseguran la democracia.

Lo que pasa en el país del norte no es sólo una crisis política, no es sólo que haya una oposición que no deja gobernar a Maduro, no es sedición como se ha intentado imponer. Se trata de una crisis social, económica y humanitaria. El hecho de que no haya comida o enseres básicos, explica por sí sola la dimensión de lo que tiene que vivir día a día la gente más sencilla.

Nadie está llamando a derrocar un gobierno democráticamente elegido, pero tampoco se puede permitir que ese mismo gobierno intente romper la institucionalidad, viole los derechos de las personas o utilice el aparato estatal para torcer la voluntad de las mayorías.

Chile pasó por esto y se puso de pie, le dijo No a una dictadura cruenta, gracias al acuerdo y la conjunción de los demócratas. Vaya que nos hace falta retomar ese espíritu en momentos en que el pacto pasa por un momento de debilidad y dudas sobre su validez y legitimidad. Le cambiamos la cara a Chile y le cambiamos la vida a miles de familias, pero parece que eso no basta para trabajar más unidos, más convencidos de que somos la mejor opción para continuar con una agenda de derechos para las familias chilenas.

De eso se trata de vocación democrática.

